



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

## **FACULTAD DE DERECHO**

### **ESCUELA ACÁDEMICO PROFESIONAL DE DERECHO**

“Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados , Lima Metropolitana, periodo 2008-2015.”

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

#### **AUTORA:**

Guisella Rosio Arteaga Vásquez

#### **ASESOR:**

Dr. Esaú Vargas Huamán

Dr. Pedro Santisteban Llontop

#### **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Administración Pública.

**LIMA-PERÚ - 2018**

## **PÁGINA DEL JURADO**

---

**MGTR. Vargas Huamán, Esaú**

**PRESIDENTE**

---

**DR. Santiesteban Llontop, Pedro**

**SECRETARIO**

---

**MGTR. Castro Rodríguez, Lesly**

**VOCAL**

### **Dedicatoria**

En primer lugar a Dios todopoderoso por darme un poquito de su sabiduría para poder terminar con éxito la carrera.

En segundo lugar a mi Madre por su apoyo incondicional y confianza en mí, sin ella a mi lado no hubiese logrado terminar la profesión, pues ella tuvo un papel muy importante en toda mi carrera universitaria.

Tercero y último, pero no menos importante, esta tesis se la dedico a mis hijos: Alejandro y Valentina, los dos motivos más grandes de mi vida que me permiten luchar día a día, y por ellos lograr ser una gran profesional.

## **Agradecimiento**

Al Mgtr. Esaú Vargas Huamán, por sentar las bases de esta investigación, por sus observaciones constructivas, guía y confianza en mí.

A mi asesor, Dr. Pedro Santisteban Llontop, por su orientación, comprensión y profesionalismo en la culminación de la tesis.

A la Universidad César Vallejo, mi Alma Mater por contribuir a mi formación académica, por permitirme conocer a excelentes docentes, quienes siempre los recordaré, porque demostraron su profesionalismo y pasión por el Derecho a través de sus enseñanzas, me inculcaron valores y sobre todo la ética profesional, para cuando este fuera de las aulas deje en alto el nombre de mi Universidad.

A todas las personas que colaboraron directa e indirectamente, en especial a todos los entrevistados que aceptaron a participar y plasmar su conocimiento en la elaboración de la tesis pues sin su participación no hubiera sido posible culminarla.

## **DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD**

Yo, Guisella Rosio Arteaga Vásquez, con DNI N° 44522287, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada, es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseadas duplicado ni copiado y por lo tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se contribuirán en aportes a la realidad investigativa.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 30 de junio de 2018



---

Guisella Rosio Arteaga Vásquez

DNI N° 44522287

## **Presentación**

Señores miembros del jurado:

La presente investigación titulada “Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados”, que se pone a vuestra consideración, tiene como propósito ser un antecedente importante para la posible modificación de la Ley de Tributación Municipal en lo que se refiere al pago del referido Impuesto, a fin de garantizar el respeto a los principios tributarios de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad; eliminando la incertidumbre jurídica de los contribuyentes

Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo, denominado Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, estableciendo en éste último el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos. En el segundo capítulo, se aborda el Método empleado, en el que se sustenta el porqué de esta investigación se ha realizado bajo el enfoque cualitativo, con un tipo de estudio descriptivo a la luz del diseño de investigación de Teoría Fundamentada. Acto seguido, en el tercer capítulo, se detallan los resultados obtenidos que permitirá arribar a las conclusiones (capítulo quinto) y recomendaciones (capítulo sexto), todo ello con los respaldos bibliográficos (capítulo séptimo) y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación

La Autora

## ÍNDICE

### **PÁGINAS PRELIMINARES**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Página del Jurado            | ii        |
| Dedicatoria                  | iii       |
| Agradecimiento               | iv        |
| Declaratoria de autenticidad | v         |
| Presentación                 | vi        |
| Índice                       | vii       |
| <b>RESUMEN</b>               | <b>ix</b> |
| <b>ABSTRACT</b>              | <b>x</b>  |

### **I. INTRODUCCIÓN 11**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA     | 12 |
| 1.2 MARCO TEÓRICO             | 22 |
| 1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  | 55 |
| 1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO | 56 |
| 1.5 SUPUESTOS JURÍDICOS       | 58 |

### **I. MÉTODO 60**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN           | 61 |
| 2.2 MÉTODO DE MUESTREO                | 62 |
| 2.3 RIGOR CIENTÍFICO                  | 66 |
| 2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS | 70 |
| 2.5 ASPECTOS ETICOS                   | 70 |

### **III.- DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 71**

### **IV.- DISCUSIÓN 91**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>V.- CONCLUSIONES</b>   | <b>101</b> |
| <b>VI.- RECOMENDACIÓN</b> | <b>103</b> |
| <b>REFERENCIAS</b>        | <b>105</b> |
| <b>ANEXOS</b>             | <b>109</b> |



## RESUMEN

La finalidad del estudio de investigación es dilucidar la contienda en la interpretación por parte del Tribunal Fiscal y del SAT de Lima Metropolitana durante el periodo 2008-2015, del artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, que establece el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular, respecto del caso de los vehículos hurtados o robados. Asimismo, se expone los métodos de interpretación admitidos por el derecho que resultan aplicables para dilucidar tal contienda, haciéndose énfasis en el método de interpretación sistemático por comparación con otras normas, así como la aplicación de los principios de igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. De esta manera, se desarrolla cómo estos principios son afectados cuando se exige el pago del aludido impuesto respecto de los vehículos hurtados o robados, considerando la capacidad contributiva que pretende gravar dicho impuesto. Finalmente, se propone la modificación del citado artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, a fin que no se exija el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular a los propietarios de los vehículos hurtados o robados.

Para cumplir los objetivos del trabajo investigado, se utilizó guías de análisis documental y jurisprudencial como también, se entrevistó a abogados especialistas en Derecho Tributario y Civil, dada la conexión existente entre ambas ramas del Derecho, toda vez que el supuesto gravado con el Impuesto al Patrimonio Vehicular, está referido al derecho real de propiedad que recae sobre el vehículo; siendo por ello necesario contar con la opinión de dichos abogados, pues para determinar cuál es la capacidad contributiva que se pretende gravar con el impuesto, es indispensable conocer cuáles son los atributos del derecho de propiedad.

***Palabras clave:*** *Impuesto al Patrimonio Vehicular, Derecho de Propiedad, Principio de Igualdad, Principio de Capacidad Contributiva, Principio de No Confiscatoriedad.*

## **ABSTRACT**

The purpose of the research study is to elucidate the contest in the interpretation by the Tax Court and the SAT of Metropolitan Lima during the period 2008-2015, of article 30 of the Organized Unique Text of Municipal Taxation Law, which establishes the payment of the Vehicle Property Tax, in reference to the case of taken or stolen vehicles. Besides, it is marked the methods of interpretation admitted by the law that are applicable to elucidate such contest, emphasizing the method of systematic interpretation by comparison with other norms, as well as the application of the principles of equality, contributory capacity and non-confiscation. In this way, it is developed how these principles are affected when the payment of the aforementioned tax is demanded respect to taken or stolen vehicles, considering the tax capacity that is intended to tax. Finally, it is proposed the modification of the aforementioned article 30 of the Organized Unique Text of the Municipal Taxation Law, so that the payment of the Vehicle Property Tax is not required to the owners of the taken or stolen vehicles.

In order to fulfill the objectives of the research work, documentary and jurisprudential analysis guides were used, as well as, specialized lawyers in Tax and Civil Law were interviewed, given the existing connection between both branches of Law, since the supposed taxed with the Tax Vehicle Property, refers to the real property right that falls on the vehicle; being therefore necessary to have the opinion of these lawyers, because to determine what is the tax capacity that is intended to tax, it is essential to know what are the attributes of property rights.

**Keywords:** Vehicle Property Tax, Property Law, Principle of Equality, Principle of Taxable Capacity, Principle of Non-Confiscation.

## **I. INTRODUCCIÓN**

## 1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA

Las primeras leyes tributarias aparecieron en Egipto, donde los impuestos eran pagados a través del trabajo físico, lo que ocurrió por ejemplo, en el año 2,500 A.C., con la construcción de la pirámide del Rey Keops, en la que se dice participaron unas 100,00 personas. En Roma, el emperador Vespasiano (69-79 D.C.), decidió imponer un impuesto a la orina, la misma que era recogida de las letrinas públicas por curtidores de pieles que la usaban para adobar sus cueros y por los lavaderos que lo empleaban para limpiar y blanquear las togas, debido a su alto contenido de amoníaco. En Inglaterra, a finales del Siglo XVII, el Rey Guillermo III aplicó un impuesto a todos los propietarios de casas con más de seis ventanas. En Rusia, durante el mandato de “Pedro El Grande” (1862-1696), se creó el impuesto sobre las personas que tenían barba.

Se puede decir que los impuestos existen desde que el Estado ha tenido la necesidad de contar con recursos para solventar sus gastos públicos, gravándose distintas situaciones o actividades de las personas. Actualmente, los impuestos gravan principalmente los ingresos, los gastos o consumos y el patrimonio de las personas.

Así, en el Perú se exige impuestos a los ciudadanos por sus ingresos (Impuesto a la Renta), por sus gastos o consumos (Impuesto General a las Ventas) y por su patrimonio (Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular). Es con relación a este último impuesto, vale decir, al Impuesto al Patrimonio Vehicular, que tratará la presente investigación, limitándose la misma a analizar el caso de los vehículos hurtados o robados.

Al respecto, cabe señalar que existe en nuestro país un alto índice de hurto y robo de vehículos. Ante esta realidad, los propietarios de los vehículos que han sido víctimas de los mencionados delitos, y cuya antigüedad no supera los tres años desde su primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular, no tienen certeza si deben seguir pagando el Impuesto al Patrimonio Vehicular (en adelante, IPV), conforme lo dispone el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF (en adelante TUO de la LTM).

La falta de certeza por parte de los contribuyentes del referido impuesto se presenta porque el Tribunal Fiscal, que constituye la última instancia administrativa en materia tributaria, de acuerdo con el artículo 101° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF (en adelante, TUO del CT), ha establecido en numerosas resoluciones que han puesto fin a la instancia administrativa, que la Ley de Tributación Municipal no ha previsto la exoneración del IPV a los sujetos que han padecido el robo de sus vehículos, pues de acuerdo con el artículo 968° del Código Civil, el hurto o robo de un vehículo no extingue el derecho de propiedad, por lo que persiste la obligación de pago del impuesto.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria – SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, SAT de Lima), en la Directiva N° 001-006-00000024, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de agosto de 2017, ha establecido en el artículo 10.1°, que no será posible determinar deuda por IPV, cuando se haya producido el hurto o robo del vehículo, por desaparecer el bien del ámbito patrimonial de su propietario.

Lo señalado en los párrafos precedentes, evidencia una contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, en el sentido de si en virtud del artículo 30° del TUO de la LTM, se debe continuar con el pago del IPV cuando acontece el hurto o robo de un vehículo.

Para el Tribunal Fiscal se debe continuar con el pago del impuesto, pues no se ha extinguido el derecho de propiedad, mientras que para el SAT de Lima, no será posible determinar deuda por IPV, por no encontrarse el bien en dominio de su propietario.

Cabe advertir, que la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, pasa por determinar cuál es la capacidad contributiva gravada con el IPV, para cuyo propósito resultará útil establecer si el referido impuesto califica como un impuesto personal o real.

Mediante este trabajo de investigación se buscará dilucidar dicha contienda, a fin de determinar si corresponde pagar el IPV en el caso de vehículos hurtados o robados, sustentándonos en los principios constitucionales en materia tributaria recogidos en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993, específicamente los principios de igualdad y no confiscatoriedad; así como el de capacidad contributiva, reconocido por el Tribunal Constitucional como un principio implícito del citado artículo 74°, que se deriva del principio de igualdad en materia tributaria.

Asimismo, existe otro aspecto que resulta necesario dilucidar, y está referido a la facultad de los Gobiernos Locales para no determinar deuda por IPV, pues el artículo 74° de la Constitución Política de 1993, señala que los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. En esa misma línea, la Norma IV del Título Preliminar del TUO del CT, que recoge el principio de legalidad, establece que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley.

Por su parte, el artículo 41° del TUO del CT, señala que la deuda tributaria sólo podrá ser condonada, es decir, perdonada, por una norma expresa con rango de ley; precisando que, excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren, siendo que en el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar el tributo.

De esta manera, la investigación nos permitirá establecer qué norma debe aplicarse en el IPV.

Finalmente, como resultado de la investigación se determinará si procede plantear la modificación del artículo 30° del TUO de la LTM, a fin que quede claro que no corresponde pagar el IPV en el caso de vehículos hurtados o robados.

## **Trabajos Previos**

Para efecto de iniciar el análisis de los temas planteados, se citara las investigaciones de la doctrina y la jurisprudencia sobre las definiciones de los supuestos materia de análisis.

En ese sentido, se citara primero a las investigaciones más relevantes a nivel internacional y posteriormente se pasara a revisar las investigaciones realizadas en nuestro país.

A fin de poder determinar cuál es la capacidad contributiva gravada con el IPV, resulta útil previamente analizar la clasificación de los impuestos en reales y personales, a fin de ubicar al referido impuesto en una de estas clasificaciones.

Una vez definido si el IPV califica como un impuesto real o personal, se podrá establecer con mayor certeza, cuál es la capacidad contributiva gravada con el citado impuesto.

Asimismo, luego de establecer la capacidad contributiva gravada con el IPV, se mencionara si existe a nivel internacional y nacional alguna postura, doctrinaria o jurisprudencial, con relación a si corresponde seguir pagando el IPV en caso de los vehículos hurtados o robados.

## **Investigaciones Extranjeras**

Con relación a la clasificación de los impuestos en personales y reales, según el maestro español Pérez. (2015), en su libro: *“Derecho Financiero y Tributario”*, en los impuestos reales no importa quién ostenta la titularidad de la riqueza gravada, a diferencia de los impuestos personales, donde la capacidad económica que se ha considerado para establecer el impuesto está en función del sujeto gravado. (p.56).

Para el citado autor, refiriéndose a la legislación española, un impuesto de carácter real sería el impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI), exigible a los titulares de dichos

bienes, siendo que una misma persona podría ser deudora tributaria del referido impuesto respecto de cada uno de los inmuebles de su propiedad (Pérez, 2015, p.56).

Por su parte, el maestro argentino Villegas. (2005), en su libro *“Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”*, afirma que en los impuestos reales se toma en cuenta de manera exclusiva la riqueza gravada, sin considerar la situación particular del contribuyente. Lo que no ocurre en los impuestos personales, donde sí se toma en cuenta la situación personal del contribuyente, apreciando todo aquello que forma parte de su capacidad de pago, por ejemplo, su carga familiar o el origen de sus ingresos. (p.160).

En la misma línea, el maestro colombiano Plazas. (2005), en su libro *“Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario”*, al referirse al impuesto unificado sobre la propiedad inmobiliaria, lo califica como un impuesto real, toda vez que el mismo grava una expresión de riqueza, esto es, la posesión o propiedad de un inmueble, sin considerar la situación personal del contribuyente (pp. 286 - 287).

Los autores antes mencionados coinciden en que la capacidad contributiva gravada en los impuestos personales toma en cuenta las circunstancias personales de los contribuyentes, como por ejemplo, la carga familiar en el Impuesto a la Renta; mientras que en los impuestos reales, la capacidad contributiva se circunscribe a una determinada expresión de riqueza, como por ejemplo, el valor de la propiedad de un predio en el Impuesto Predial; no siendo relevante para los impuestos reales, la situación personal del contribuyente.

En tal sentido, la distinción entre impuestos personales y reales, dependerá de si la capacidad contributiva gravada con el impuesto, toma o no en cuenta las condiciones personales de los contribuyentes.

Así, en los impuestos reales se gravará como manifestación de riqueza, la propiedad de bienes muebles, como por ejemplo, los vehículos, y en el caso de bienes inmuebles, serían los predios.

Sobre el particular, comparto la opinión de la doctrina extranjera en cuanto a la clasificación de los impuestos en personales o reales, en función a si la capacidad contributiva gravada considera o no las circunstancias personales de los contribuyentes.



En los impuestos reales no se considera la situación personal del contribuyente. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 8° del TUO de la LTM, el Impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos.

Para este impuesto, son irrelevantes las circunstancias personales del contribuyente, es decir, si el predio lo adquirió a título gratuito u oneroso, si tiene ingresos, si tiene carga familiar, entre otros. Lo que interesa es el valor de los predios de propiedad del contribuyente.

Con relación al tema materia de la investigación, la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-489/04 del 20 de mayo de 2004, recaída en el Expediente N° T-845873, estableció que la obligación de pagar el impuesto por todo el año sólo podía desvirtuarse si el contribuyente demostraba la cancelación de la matrícula del vehículo antes del nacimiento de la obligación tributaria; lo que no habría ocurrido en el caso, pues el contribuyente se habría limitado a presentar la denuncia por el hurto del vehículo ante la policía, omitiendo tramitar la cancelación de la matrícula del aludido vehículo, por lo que aún seguía figurando como propietario del mismo. Esto quiere decir, que en caso dicho contribuyente hubiera tramitado la cancelación de la matrícula del vehículo hurtado, no habría tenido que pagar el impuesto.

Asimismo, en España, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de 2004, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estableció en los numerales 1 y 2 del artículo 92°, que el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un impuesto directo que grava la titularidad de estos vehículos, idóneos para circular por las vías públicas, sin importar su categoría y clase, considerándose como tales, a los que se hubieran matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no se hayan dado de baja por los supuestos de hurto o robo.

De la citada Ley Española, podemos apreciar que no se gravará con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a los titulares de los vehículos que hayan dado de baja a la matrícula por el hurto o robo de tales vehículos.

Se Comparte la posición expresada en la Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia y lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de España, en el sentido que una vez que se da de baja la matrícula del vehículo, no corresponde seguir pagando el Impuesto Vehicular.

Una de las razones por las que correspondería dar de baja a la matrícula de un vehículo sería cuando el mismo haya sido hurtado o robado. De esta manera, no existiría la obligación de pagar el impuesto respecto de tal vehículo.

### **Investigaciones Nacionales**

Según Alva. (2003), en su artículo *“Hurto, Robo e Impuesto Vehicular”*, el IPV es de tipo personal, toda vez que el referido impuesto grava al propietario del vehículo y no al poseedor del mismo, negando que el citado impuesto sea de tipo real, ya que si fuera así, no sería relevante saber la identidad del propietario del vehículo. (p.23).

No se comparte la posición del citado autor, pues en todo impuesto interesa saber la identidad del contribuyente. Lo que es importante conocer, para distinguir un impuesto personal de uno real; es si se toma o no en cuenta la situación personal del contribuyente.

En tal sentido, se considera que el IPV califica como un impuesto real, donde la capacidad contributiva gravada se circunscribe a la propiedad de determinados vehículos, sin importar las circunstancias personales del contribuyente, es decir, si el vehículo lo adquirió a título gratuito u oneroso, si tiene ingresos, si tiene carga familiar, etc.

Siguiendo al mismo autor, los resultados del hurto o robo de vehículos respecto del IPV, es que el propietario del vehículo no tendrá la posesión del mismo, pero no perderá su condición de propietario, por lo que continuará siendo contribuyente del referido impuesto. (p.25).

Al respecto, Ruíz. (2008), en su artículo *“Impuesto al Patrimonio Vehicular”* considera que la capacidad contributiva que hay detrás de este impuesto, consiste en los ingresos obtenidos por las personas que les ha permitido adquirir la propiedad de un vehículo,

negando que la capacidad contributiva de este impuesto sea el vehículo o a la posesión del mismo.

Para los citados autores, el contribuyente estará obligado a pagar el IPV por los vehículos hurtados o robados, pues el robo solo lo ha privado de la posesión del vehículo, más no de su propiedad.

En la misma línea de los mencionados autores, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 03152-3-2002 del 18 de junio de 2002, que se pronunció sobre la apelación interpuesta por un contribuyente contra la resolución emitida por el SAT de Lima, estableció el criterio, según el cual, el robo de un vehículo no extingue el derecho de propiedad del contribuyente, toda vez que la comisión de dicho delito, no supone una transferencia de propiedad del contribuyente al delincuente responsable de tal ilícito.

En tal contexto, cabe mencionar que con ocasión de la apelación presentada por un contribuyente contra la resolución emitida por el SAT de Lima, que declaró improcedente la solicitud de exoneración del IPV, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 13202-4-2008 del 18 de noviembre de 2008, reiteró el criterio establecido en la Resolución N° 03152-3-2002, precisando que la Ley de Tributación Municipal no ha previsto alguna exoneración o beneficio tributario con relación al pago del referido impuesto para los contribuyentes que hubieran padecido el hurto o robo de sus vehículos.

En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Fiscal en las Resoluciones N° 06356-7-2009, 05695-7-2011 y 10722-8-2012 de fechas 3 de julio de 2009, 6 de abril de 2011 y 4 de julio de 2012, al resolver los recursos de apelación presentados por distintos contribuyentes contra las resoluciones emitidas por la Municipalidad Provincial de Arequipa, el SAT de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao, respectivamente.

En contraposición con el criterio del Tribunal Fiscal antes expuesto, la Defensoría del Pueblo en el Informe N° 98 (2005), concluyó que exigir el pago del IPV a las personas que han sufrido la pérdida de sus vehículos, por el hurto o robo de los mismos, implica una situación de injusticia objetiva, que considera necesario evitar, planteando por esta razón, la modificación del artículo 30° de la Ley de Tributación Municipal.

En atención al referido Informe, el SAT de Lima emitió la Circular N° 001-008-00000011 del 6 de enero de 2006, señalando en el numeral 7.1, que no podrá determinarse deuda por IPV, cuando se haya producido el hurto o robo del vehículo, por no encontrarse el bien en el ámbito patrimonial de su propietario.

De acuerdo con las disposiciones generales de la citada circular, se debía considerar al hurto o robo de un vehículo como un hecho que disminuya el valor, conforme al artículo 11° del Reglamento del Impuesto al Patrimonio Vehicular aprobado por Decreto Supremo N° 22-94-EF, según el cual, una vez ocurrida la destrucción o cualquier otro hecho que disminuya el valor del vehículo en más del cincuenta por ciento, los sujetos del impuesto debía presentar una declaración rectificatoria dentro de los sesenta días posteriores de ocurrido alguno de los mencionados hechos, lo cual debía demostrarse de manera fehaciente ante la respectiva Municipalidad Provincial, surtiendo efectos a partir del año siguiente de aquel en que fuera presentada tal rectificatoria.

Cabe anotar que la referida circular fue derogada por la Directiva N° 001-006-00000024 del SAT de Lima, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de agosto de 2017. En donde actualmente establece en el numeral 10.1 de la citada directiva, señala que no podrá determinarse deuda por IPV, cuando haya ocurrido el hurto o robo del vehículo, por desaparecer el mismo del ámbito patrimonial de su propietario, debiendo los contribuyentes presentar una declaración jurada a fin de suspender la afectación del impuesto a partir del 1 de enero del año siguiente de haber ocurrido el hurto o robo del vehículo.

De la revisión de la aludida directiva, no se aprecia la mención al artículo 11° del Reglamento del Impuesto al Patrimonio Vehicular, por lo que actualmente no podría sostenerse que para el SAT de Lima el hurto o robo de un vehículo califique necesariamente como un supuesto de hecho de disminución del valor.

Debido a los pronunciamientos disímiles de las autoridades administrativas, los propietarios de los vehículos hurtados o robados no tienen certeza si les corresponde pagar o no el IPV.

Por mi parte, considero que no corresponde el pago del IPV en el caso de los vehículos hurtados o robados, coincidiendo con la posición de la Defensoría del Pueblo, así como la posición adoptada por el SAT de Lima, aunque por distintos fundamentos, los mismos que se tendrá que desarrollar en la investigación.

## **1.2 MARCO TEÓRICO**

Ahora bien, corresponde desarrollar los conceptos más importantes relacionados con el trabajo de investigación, para lo cual nos basaremos en la doctrina, la jurisprudencia y el respectivo marco legal.

### **Contienda interpretativa**

La contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, está referida a las distintas interpretaciones efectuadas por la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal del artículo 30° del TUO de la LTM, respecto a si los propietarios de los vehículos hurtados o robados deben seguir pagando el IPV por los años en los que todavía se encuentran afectos al impuesto.

Las distintas interpretaciones efectuadas por la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal están relacionadas con los diversos métodos de interpretación admitidos o reconocidos por el Derecho que cada una de estas entidades han utilizado en la interpretación de la norma que regula el pago del IPV.

Antes de analizar tal contienda interpretativa, resulta importante en este punto, explicar las funciones que tienen cada una de las citadas entidades en los procedimientos tributarios, a fin de entender con mayor claridad los alcances de dicha contienda.

### **El Tribunal Fiscal**

El Tribunal Fiscal es un órgano resolutor que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, del cual depende administrativamente, pero que goza de autonomía en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal Fiscal constituye la última instancia administrativa a nivel nacional en materia tributaria y aduanera; siendo competente para resolver las controversias que se produzcan entre los contribuyentes y las Administraciones Tributarias.

Al respecto, el artículo 98° del TUO del CT señala que el Tribunal Fiscal está conformado por: 1) la Presidencia del Tribunal Fiscal, conformada por el Vocal Presidente, quien tiene la representación del citado órgano; 2) la Sala Plena del Tribunal Fiscal, compuesta por todos los Vocales del Tribunal Fiscal, la que está encargada de establecer a través de acuerdos de Sala Plena, los procedimientos que faciliten el desempeño de sus funciones así como la unificación de los criterios de las Salas que la integran; 3) la Vocalía Administrativa, conformada por un Vocal Administrativo encargado de la labor administrativa; 4) la Salas especializadas, cuyo número se regula a través de un Decreto Supremo, de acuerdo con las necesidades operativas del citado órgano, siendo el Presidente del Tribunal Fiscal el encargado de definir la especialidad de las Salas, para lo cual podrá considerar el órgano administrador, el tributo, la materia, entre otros criterios que ameriten la implementación de la especialidad; y, 5) la Oficina de Atención de Quejas, integrada por los Resolutores - Secretarios de Atención de Quejas.

Cabe agregar, que conforme con el citado artículo 98°, cada Sala especializada está compuesta por tres Vocales y un Secretario Relator, además de asesores en materia tributaria y aduanera.

De acuerdo con el artículo 101° del TUO del CT, para que las Salas del Tribunal Fiscal puedan emitir una resolución, requieren de dos votos conformes de los Vocales que las integran, aunque para su funcionamiento necesitan de la concurrencia de los tres Vocales.

En cuanto a sus funciones, según el citado artículo 101°, el Tribunal Fiscal está encargado de resolver en última instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos por los contribuyentes contra las resoluciones emitidas por las Administraciones Tributarias que se pronuncian sobre los recursos de reclamación formulados contra los actos que determinan deuda tributaria, como son las órdenes de pago, las resoluciones de determinación y de multa, entre otros.

De la misma manera, el Tribunal Fiscal está encargado de resolver en última instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos por los contribuyentes contra las resoluciones que se pronuncian solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, y las correspondientes a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP.

También el Tribunal Fiscal resuelve en última instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones de multa que se impongan por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la asistencia administrativa mutua en materia tributaria; así como las apelaciones respecto de la sanción de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, y de las sanciones que se emitan en sustitución de las mismas.

Asimismo, el Tribunal Fiscal tiene entre otras de sus atribuciones, la de resolver las quejas que interpongan los contribuyentes contra las Administraciones Tributarias cuando existan procedimientos o actuaciones que los afecten directamente o transgredan lo previsto en el Código Tributario; así como también uniformar la jurisprudencia y resolver los asuntos de competencia que se produzcan en materia tributaria.

En lo que se refiere a la función de uniformar la jurisprudencia, al amparo del artículo 154° del TUO del CT, el Tribunal Fiscal está facultado a emitir jurisprudencia de observancia obligatoria, cuando se trate de resoluciones que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias; cuando aplique la norma de mayor jerarquía; cuando emita resoluciones en virtud a un criterio recurrente de las salas especializadas, así como las emitidas por los Resolutores - Secretarios de Atención de Quejas por asuntos materia de su competencia.

Cabe anotar que, conforme con el citado artículo 154° del TUO del CT, en los casos de resoluciones que establezcan jurisprudencia obligatoria, la Administración Tributaria no podrá interponer demanda contencioso-administrativa.



De otro lado, según el artículo 153° del TUO del CT, contra lo resuelto por el citado órgano, no cabe recurso alguno en la vía administrativa.

En la misma línea, el artículo 157° del TUO del CT señala que la resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, pudiendo solo impugnarse ante el Poder Judicial, a través del proceso contencioso administrativo.

Como podemos apreciar, el Tribunal Fiscal es la última instancia administrativa a nivel nacional en materia tributaria y aduanera, siendo sus resoluciones impugnables solo ante el Poder Judicial, pues con la resolución del citado Tribunal se agota la vía administrativa.

### **El Servicio de Administración Tributaria – SAT de Lima**

Mediante Edicto N° 225, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 17 de mayo de 1996, se creó el SAT de Lima, como un organismo público descentralizado de la Municipalidad de Lima Metropolitana, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, presupuestaria, financiera y administrativa.

De acuerdo con el artículo 2° del citado Edicto, el SAT de Lima tiene por finalidad administrar, fiscalizar y recaudar todos los ingresos tributarios de la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Entre las funciones del SAT de Lima, están la de identificar al sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, determinar la deuda tributaria, recaudar los ingresos, fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, resolver los recursos de reclamación que los contribuyentes interpongan, entre otras.

Precisamente sobre esta última función, es decir, la de resolver los recursos de reclamación interpuestos por los contribuyentes, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 04563-5-2003, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de agosto de 2003, estableció como precedente de observancia obligatoria, el siguiente criterio: “Son válidas las resoluciones que resuelven controversias en materia tributaria en el ámbito municipal, emitidas por

sujetos distintos al alcalde, tales como el director municipal o el funcionario competente del órgano creado con la finalidad de administrar los tributos municipales”.

En la citada resolución, el Tribunal Fiscal señaló que conforme con el artículo 192° de la Constitución Política de 1993 y los numerales 1 y 4 del artículo 10° de la derogada Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 23853, las Municipalidades estaban facultadas constitucional y legalmente para diseñar su organización, con la finalidad de ofrecer una prestación de servicios eficiente a los administrados, incluyendo los vinculados a la materia tributaria; por lo que resultaba razonable que las municipalidades contasen con una entidad especializada a su interior, para una eficiente gestión de los tributos a su cargo.

Si bien las municipalidades están facultadas a crear una entidad especializada que se encargue de administrar, fiscalizar y recaudar los tributos municipales a su cargo, como en el caso de los Servicios de Administración Tributaria – SAT, no todas han creado a su interior dicha entidad, por lo que tales funciones les son encargadas a una gerencia, dirección u oficina de rentas.

Explicadas las principales funciones del Tribunal Fiscal y del SAT de Lima, pasaré a analizar la contienda existente entre ambas entidades con relación a la interpretación de la norma que regula el pago del IPV en el caso de los vehículos hurtados o robados.

Pues bien, en base a lo previsto en el artículo 30° del TUO de la LTM, se han suscitado dos interpretaciones con relación a la norma que regula el pago del IPV en el caso de los vehículos hurtados o robados. Para el Tribunal Fiscal sí se debe pagar el IPV por cuanto el hurto o robo de un vehículo no extingue el derecho de propiedad que recae sobre el mismo; mientras que para el SAT de Lima, no corresponde seguir pagando el referido impuesto por haber desaparecido el vehículo del ámbito patrimonial del propietario.

Tratándose de una controversia sobre la interpretación de la norma, se debe tener presente lo señalado en la Norma VIII del Título Preliminar del TUO del CT, según la cual, al aplicar las normas tributarias se puede usar todos los métodos de interpretación reconocidos por el derecho.

Cabe señalar, a título ilustrativo, que entre los métodos de interpretación reconocidos por el derecho, tenemos a los siguientes: literal, histórico, *ratio legis*, sistemático por ubicación de la norma y por comparación con otras normas, entre otros.

A continuación, me referiré de manera breve a los distintos métodos de interpretación admitidos por el derecho, que considero son aplicables al Derecho Tributario.

Cabe mencionar que no existe un orden de importancia entre los distintos métodos de interpretación, por lo que se debe procurar utilizar todos aquellos que resulten aplicables al caso concreto.

### **Método de interpretación literal**

A través de este método se busca descubrir el sentido y alcance de la norma a partir del significado de las palabras (Donayre, 2014, p. 189).

Para la aplicación de este método es importante el empleo del diccionario, a fin de poder otorgar a las palabras el significado que le corresponde. En efecto, de acuerdo con este método, cada palabra es analizada conforme la gramática, la etimología, la sinonimia y cualquier otro método de estudio del lenguaje (Villegas, 2005, p.245).

Este método de interpretación fue aplicado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 05429-3-2003 del 23 de setiembre de 2003, al resolver una controversia seguida por un contribuyente contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, respecto a la exoneración del Impuesto General a las Ventas para la primera venta de un inmueble realizada por el constructor, cuyo valor de venta no superaba las 35 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, siempre que estuviera destinado exclusivamente a vivienda y cumpliera con las características técnicas establecidas en el Reglamento, entre ellas, un área mínima y máxima de construcción por unidad de vivienda.

El tema en discusión estaba en sí el área mínima y máxima de construcción debía comprender el estacionamiento y los aires de la azotea. Para el Tribunal Fiscal no debía comprender tales espacios, pues recurriendo a la definición de vivienda, consideró que por ésta se debía entender la construcción que se emplea para vivir, morar o residir. Es decir, el Tribunal Fiscal aplicó el método de interpretación literal, basándose exclusivamente en el significado de la palabra vivienda.

En efecto, conforme con una de las acepciones de la palabra vivienda contenida en el Diccionario de la Real Academia Española – RAE, se trata de un lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas; siendo que tales características no son propias de los estacionamientos o aires de las azoteas.

### **Método de interpretación histórico**

Mediante este método de interpretación se busca descubrir el sentido y alcance de la norma a través de los antecedentes de la misma (textos normativos precedentes, exposición de motivos, diario de debates, etc.), tratando de reconstruir la voluntad del legislador (Donayre, 2014, p.191).

Para la aplicación de este método, es necesario conocer la historia de la norma, lo que decía la norma antes y lo que dice la norma ahora.

En aplicación de este método de interpretación, conocer la ley, es conocer la intención de quien la dictó (Villegas, 2005, p.246).

Este método de interpretación fue aplicado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 15888-7-2013 del 18 de octubre de 2013, al resolver una controversia seguida por un contribuyente contra la Municipalidad Provincial de Chíncha, respecto a la inafectación del Impuesto Predial de un organismo público descentralizado.

El tema en discusión versaba en sí los organismos públicos descentralizados se encontraban inafectos del Impuesto Predial. Al respecto, el Tribunal Fiscal, en mérito a una interpretación histórica, consideró que tales organismos no se encontraban inafectos del Impuesto Predial, pues cuando se modificó la Ley de Tributación Municipal, se dejó

de mencionarlos expresamente como sujetos inafectos del impuesto, lo que evidenciaba la intención del legislador de modificar el tratamiento que se le venía otorgando anteriormente.

Para la aplicación de este método de interpretación es importante tener en cuenta las distintas modificaciones que se hayan producido en el texto normativo, pues a través de tales modificaciones y de sus respectivas exposiciones de motivos, se podrá descubrir cuál fue la intención del legislador.

### **Método de interpretación de la *ratio legis***

En el método de interpretación de la *ratio legis*, se busca descubrir el sentido y alcance de la norma según su razón de ser o su espíritu, la cual debe desprenderse del texto mismo de la norma (Donayre, 2014, p.192). Para la aplicación de este método, es necesario conocer el porqué de la norma.

A través de este método, que es también conocido como método de interpretación lógico, se busca descubrir el espíritu de la ley.

Este método de interpretación fue aplicado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 03925-1-2005 del 24 de junio de 2005, al resolver una controversia seguida por un contribuyente contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, respecto a la exoneración del Impuesto General a las Ventas para la primera venta de un inmueble realizada por el constructor, cuyo valor de venta no superaba las 35 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, siempre que estuviera destinado exclusivamente a vivienda y cumpliera con las características técnicas establecidas en el Reglamento.

El tema en discusión consistía en definir si la mencionada exoneración resultaba aplicable a las personas jurídicas. Para el Tribunal Fiscal la aludida exoneración no resultaba aplicable a las personas jurídicas, pues consideró que la razón de ser o *ratio legis* de dicha exoneración era la disminución del valor de los inmuebles en el importe de la alícuota o tasa del impuesto, para beneficiar así a los adquirentes incididos económicamente con el

mismo, en el marco de la promoción del acceso a la población a la propiedad privada de vivienda. En tal sentido, la exoneración sólo podía ser aplicable a las personas naturales, quienes son las que asumen la carga del impuesto, y no a las personas jurídicas.

### **Método de interpretación sistemático por ubicación de la norma**

En el método de interpretación sistemático por ubicación de la norma, se busca descubrir el sentido y alcance de la norma aplicando los conceptos o principios del cuerpo normativo en el que dicha norma se encuentra ubicada (Donayre, 2014, p.194). Para la aplicación de este método, es necesario conocer dónde se encuentra ubicada la norma, es decir, en qué artículo, capítulo, título o dispositivo legal en concreto.

Este método de interpretación fue aplicado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 07425-10-2010 del 16 de julio de 2010, al resolver una controversia seguida por un contribuyente contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, respecto a la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 176° del TUO del CT, esto es, no presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos.

En la citada resolución, el Tribunal Fiscal por una interpretación sistemática por ubicación normativa, consideró que cuando el numeral 2 del artículo 176° del TUO del CT alude a “otras declaraciones, sólo puede referirse a declaraciones que no contengan determinación de deuda tributaria, toda vez que en el numeral 1 del citado artículo se describe como infracción, no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos.

Como puede apreciarse, el Tribunal Fiscal interpretó el numeral 2 del artículo 176° del TUO del CT, de acuerdo con su ubicación en el citado artículo.

### **Método de interpretación sistemático por comparación con otras normas**

A través de este método se busca descubrir el sentido y alcance de la norma, comparándola con otra norma que permita aclarar su significado (Donayre, 2014, p.195).

Para la aplicación de este método, es necesario encontrar una norma con una razón de ser similar a la norma que estamos interpretando, para a partir de aquélla aclarar el significado de ésta.

Este método de interpretación fue aplicado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 00298-11-2013 del 7 de enero de 2013, al resolver una controversia seguida por un contribuyente contra el SAT de Lima, respecto a la solicitud de devolución por concepto de Impuesto de Alcabala.

El tema en discusión versaba sobre si procedía la devolución del pago efectuado por concepto de Impuesto de Alcabala, para lo cual debía determinarse previamente si el vendedor calificaba como una empresa constructora. Para el Tribunal Fiscal resultaba procedente remitirse a la definición de empresa constructora contenida en la Ley del Impuesto General a las Ventas, ya que no existía tal definición en la Ley de Tributación Municipal.

Cabe anotar que las normas que fueron materia de comparación por parte del Tribunal Fiscal tienen una razón de ser similar, pues ambos gravan el consumo como manifestación de capacidad contributiva, siendo además que cuando se trata de la primera venta de un inmueble a cargo de una empresa constructora la operación se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas e inafecta con el Impuesto de Alcabala.

Es importante tener en cuenta que no siempre podremos utilizar todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho para resolver una controversia, sin embargo, lo que sí debemos procurar es emplear más de uno de estos métodos para descubrir el sentido de una norma legal.

En efecto, el intérprete debe tratar de emplear todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. En ese sentido, debe analizar la letra de la ley, así como la intención de quien la dictó; coordinando la ley con todo el sistema jurídico y con la finalidad que se busca alcanzar a través de ella (Villegas, 2005, p.244).

Cabe mencionar que el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 03708-8-2012, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de marzo de 2012, estableció como precedente de observancia obligatoria, que el IPV no grava la propiedad de los remolcadores o tracto-camiones, la cual no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del artículo 30° del TUO de la LTM.

El tema en discusión versaba sobre si la propiedad de los remolcadores o tracto-camiones se encontraba gravada con el IPV, pues inicialmente la ley estableció que el impuesto gravaba la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas y station wagons, y posteriormente amplió su aspecto material para abarcar también la de los camiones, buses y ómnibuses, omitiendo definir a dichos vehículos. Por tal razón, resultaba necesario determinar si cuando la ley mencionaba a los camiones, dicho concepto incluía a los remolcadores o tracto-camiones, dado que no había norma tributaria que definiera el concepto de remolcador o tracto-camión.

Así pues, el Tribunal Fiscal, utilizando el método de interpretación sistemático por comparación con otras normas, recurrió al Reglamento Nacional de Vehículos, que contempló definiciones distintas para las categorías “camión” y “remolcador”, señalando en forma expresa que este último no se encontraba incluido en la primera categoría mencionada.

Resulta pertinente mencionar el Acuerdo de Sala Plena N° 2012-04, que sustenta la Resolución N° 03708-8-2012, pues en un voto singular, se señala que, adicionalmente, utilizando una interpretación gramatical, cuando el artículo 30° del TUO de la LTM alude a la palabra genérica “vehículos” consigna a continuación una coma explicativa, que tiene como objeto referir los bienes que califican como “vehículos” (automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y omnibuses) y cuya propiedad se grava con el IPV; precisando que no resulta razonable considerar que la coma que se consigna a continuación de la palabra vehículos tiene un carácter enumerativo y no explicativo, pues además si el legislador hubiera querido gravar todos los vehículos sólo le habría sido suficiente con consignar la palabra “vehículos”, lo que no hizo.



Como podemos apreciar, a través de los métodos de interpretación sistemático por comparación con otras normas y literal, se llegó a un mismo resultado interpretativo, en el sentido que el IPV no grava la propiedad de los remolcadores o tracto-camiones.

Con relación a los métodos de interpretación en el Derecho Tributario, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Sentencia en Casación - Cas. N° 4392-2013 del 24 de marzo de 2015, ha establecido reglas con carácter de precedentes vinculantes, precisando en su Considerando 3.6, que resulta adecuado utilizar con predominio el método de interpretación literal para establecer el sentido normativo de las disposiciones legales que establecen el nacimiento de obligaciones tributarias, por ser el significado literal, el más inmediato que resulta del uso común de las palabras y de las reglas sintácticas.

No obstante lo antes señalado, en el mismo Considerando 3.6 de la Sentencia, la aludida Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República señala que no es posible prescindir de la interpretación sistemática, dado que en nuestro Estado Constitucional de Derecho, las leyes tributarias deben interpretarse en coherencia con los principios que orientan el ordenamiento tributario.

De esta manera, para la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, no cabe solo utilizar el método de interpretación literal, sino también el sistemático, aplicando los principios del Derecho Tributario, que no son otros que los regulados en el artículo 74° de la Constitución Política del Estado de 1993, vale decir, los principios de reserva de ley, igualdad, respeto a los derechos fundamentales de la persona y de no confiscatoriedad.

En efecto, en la misma sumilla de la Sentencia se señala que la interpretación de las disposiciones tributarias se debe efectuar utilizando el método de interpretación literal y en compatibilidad con las normas constitucionales y los principios del Derecho Tributario.

Así pues, en el presente trabajo de investigación se utilizarán todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho que resulten aplicables, haciendo especial énfasis

en el método de interpretación sistemático. Para tal propósito, resultará indispensable recurrir a los principios del Derecho Tributario.

Pues bien, el criterio establecido por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 03152-3-2002 del 18 de junio de 2002, según el cual, el robo de un vehículo no extingue el derecho de propiedad del contribuyente, pues la comisión de dicho ilícito, no implica una transferencia de propiedad del contribuyente al delincuente responsable del delito; y que sirve como antecedente en este trabajo de investigación, ha sido reiterado en posteriores resoluciones del mencionado órgano colegiado; considerando conveniente mencionar aquellas resoluciones emitidas a partir del 2008, por las razones que expongo a continuación.

De acuerdo con el artículo 154° del TUO del CT, las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley; siendo que en los casos de resoluciones que establezcan jurisprudencia obligatoria, la Administración Tributaria no podrá interponer demanda contencioso-administrativa.

Según la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1311, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se establecerán los parámetros para determinar la existencia de un criterio recurrente que pueda dar lugar a la publicación de una jurisprudencia de observancia obligatoria, conforme a lo previsto por el artículo 154° del Código Tributario.

Conforme con el artículo 2° del Decreto Supremo N° 206-2012-EF, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 23 de octubre de 2012, existe un criterio recurrente cuando éste ha sido recogido en tres (3) resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Fiscal de la misma especialidad. Dichas resoluciones deberán provenir de tres (3) Salas diferentes de la misma especialidad; Cuando exista dos (2) Salas de la misma especialidad, la recurrencia se verificará cuando ambas Salas, de manera conjunta, sumen tres (3)

resoluciones; y cuando exista una (1) Sala Especializada, el criterio recurrente deberá verificarse sólo en dicha Sala.

De conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del citado Decreto Supremo N° 206-2012-EF, para determinar la existencia de un criterio recurrente se considerarán las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas a partir del año 2008.

De acuerdo con las normas antes citadas, cuando dos salas especializadas del Tribunal Fiscal, de manera conjunta, emitan tres resoluciones con un mismo criterio, se podrá emitir una jurisprudencia de observancia obligatoria; debiendo considerarse para el cómputo de las tres resoluciones, las emitidas a partir del 2008.

Es por tal razón, que para la esta investigación se ha considerado las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas a partir del 2008, pues en tanto existan tres resoluciones de dos salas diferentes, el citado Tribunal estará habilitado a emitir una jurisprudencia de observancia obligatoria, la misma que no podría ser impugnada en la vía judicial por la Administración Tributaria.

En tal contexto, me permito citar las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 13202-4-2008, 06356-7-2009, 05695-7-2011 y 10722-8-2012 de fechas 18 de noviembre de 2008, 3 de julio de 2009, 6 de abril de 2011 y 4 de julio de 2012; pues a través de las mismas, el referido órgano colegiado reiteró el criterio contenido en la Resolución N° 03152-3-2002, esto es, que el robo de un vehículo no extingue el derecho de propiedad del contribuyente, pues la comisión de dicho delito, no supone una transferencia de propiedad del contribuyente al delincuente responsable de tal ilícito.

Cabe anotar, que en la citada Resolución N° 13202-4-2008, el Tribunal Fiscal precisó que la Ley de Tributación Municipal no ha contemplado exoneración o beneficio tributario alguno respecto al pago del IPV para los contribuyentes que hubieran sufrido el hurto o robo de sus vehículos.

Asimismo, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 06629-7-2015 del 8 de julio de 2015, que se pronunció sobre la apelación presentada por un contribuyente contra la resolución

emitida por la Municipalidad Provincial del Callao, ha señalado que la Ley de Tributación Municipal no contempla la eximencia del pago del IPV a los sujetos que hayan sufrido el robo de sus vehículos, siendo que tal circunstancia no extingue el derecho de propiedad del agraviado, quien no pierde su condición de contribuyente del impuesto y de sujeto obligado a cumplir con las obligaciones formales.

Queda claro pues que la posición del Tribunal Fiscal desde el año 2002 hasta la fecha sigue siendo la misma, en el sentido que el propietario de un vehículo robado o hurtado debe continuar con el pago del IPV, pues al no haberse extinguido su derecho de propiedad, al no estar en ninguno de los supuestos de extinción de la propiedad previstos en el Código Civil, continúa siendo contribuyente del referido impuesto; no habiéndose contemplado exoneración o beneficio tributario alguno que lo exima del pago del mismo.

Por su parte, la Directiva N° 001-006-00000024 del SAT de Lima, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de agosto de 2017; señala en su numeral 10.1, que no podrá determinarse deuda por IPV, cuando haya ocurrido el hurto o robo del vehículo, por desaparecer el mismo del ámbito patrimonial de su propietario.

En tal sentido, para el SAT de Lima no cabe determinar deuda por IPV, en razón a que el vehículo ya no está en poder de su propietario. Sin embargo, no se explica en la mencionada directiva por qué tal hecho conllevaría a que no se pueda determinar deuda por el aludido impuesto.

Pues bien, en el caso materia del trabajo de investigación, se considera que la posición del Tribunal Fiscal se basa en una interpretación literal del artículo 30° del TUO de la LTM, pues considera que el IPV grava a los propietarios de los vehículos mientras éstos mantengan tal situación jurídica, a pesar que hayan padecido el hurto o robo de sus vehículos, pues conforme con el artículo 968° del Código Civil, la propiedad se extingue cuando el bien es adquirido por otra persona; cuando el bien se destruye o pierde totalmente o el mismo es consumido; cuando el bien es expropiado; o cuando un predio es abandonado durante veinte años, en cuyo caso pasa a ser propiedad del Estado. Y en ese sentido, como el hurto o robo no han sido incluidos como supuestos para la extinción de la

propiedad, el propietario del vehículo hurtado o robado deberá seguir pagando el impuesto, pues su condición de propietario sigue vigente.

Resulta pertinente en este momento citar el caso sobre el que recayó la Resolución del Tribunal Fiscal N° 01340-11-2011 del 25 de enero de 2011, en la apelación seguida por un ciudadano contra la resolución emitida por el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo de la Municipalidad Provincial de Trujillo – SAT de Trujillo, que declaró infundada la solicitud de baja de inscripción de un vehículo.

En el citado caso, un ciudadano había inscrito un vehículo de su propiedad en el Registro de Propiedad Vehicular en el año 2008, por lo que en aplicación del TUO de la LTM, a partir del 1 de enero de 2009 adquiriría la condición de contribuyente del IPV, quedando obligado a pagar el respectivo impuesto en los años 2009, 2010 y 2011. No obstante ello, en julio de 2008 el citado ciudadano sufre el robo de su vehículo.

Pues bien, este ciudadano a pesar de que al 1 de enero de 2009 no tenía la posibilidad de usar, disfrutar o disponer de dicho vehículo, por haber sido robado en el año 2008, igual seguía obligado a pagar el IPV por los años 2009, 2010 y 2011, de acuerdo con la posición del Tribunal Fiscal, que fue reiterada en la citada Resolución N° 01340-11-2011.

Una situación como la antes descrita no debe ser poco frecuente, si se tiene en cuenta que los hurtos o robos suelen ocurrir respecto de los vehículos nuevos. Con la posición del Tribunal Fiscal, el propietario del vehículo que ha sufrido el hurto o robo del mismo antes de llegar a convertirse en contribuyente del IPV, sigue obligado al pago del impuesto, por mantener su condición de propietario. Esto resulta injusto, pues se tiene que pagar el IPV a pesar de que el vehículo ya no se encuentra en el ámbito patrimonial del agraviado.

No obstante lo antes señalado, utilizando una interpretación de acuerdo con el método de la *ratio legis*, podríamos asumir que la razón de ser de gravar la propiedad de los vehículos, es someter a imposición todos los atributos del derecho de propiedad sobre el mismo, pues a través de la suma de tales atributos es que se manifiesta la capacidad contributiva que merece ser gravada con el IPV.

Teniendo en cuenta la mencionada *ratio legis*, en el caso de los vehículos hurtados o robados, no habría capacidad contributiva que merezca ser gravada con el IPV, al no poder el propietario del vehículo ejercer todos los atributos del derecho de propiedad por una causa ajena a él.

En este punto, resulta ilustrativo mencionar la Resolución del Tribunal Fiscal N° 7001 del 13 de abril de 1972, que se pronunció sobre la apelación presentada por un contribuyente contra la resolución emitida por la Dirección General de Contribuciones (actualmente, SUNAT), respecto del Impuesto al Valor de la Propiedad Predial (actualmente, Impuesto Predial); señalando que si bien el recurrente era el propietario nominal de los predios, no podía desconocerse para efectos del impuesto, quien tenía el uso y disfrute de los predios.

De acuerdo con la posición antes señalada, en los impuestos sobre el patrimonio, prevalecería la propiedad real, antes que la propiedad nominal o formal. Entendiéndose por propiedad real, aquella en la que el propietario puede ejercer todos los atributos del derecho de propiedad.

Asimismo, una interpretación sistemática por comparación con otras normas, nos permitiría aplicar los Principios del Derecho Tributario para resolver tal contienda interpretativa, tal como acertadamente ha sido señalado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Sentencia en Casación CAS. N° 4392-2013.

En tal contexto, resulta pertinente mencionar la Norma IX del Título Preliminar del TUO del CT, según la cual, en lo no previsto por el Código Tributario o en otras normas tributarias, podrán aplicarse de manera supletoria, los Principios del Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho.

Por tanto, resulta pertinente aplicar supletoriamente a las normas tributarias, como sería el caso del artículo 30° del TUO de la LTM, los Principios del Derecho Tributario.

Tal como lo señalamos anteriormente, estos principios los encontramos recogidos en el artículo 74° de la Constitución Política, y son los que regulan la potestad tributaria del Estado.

### **Principios tributarios que regulan la potestad tributaria**

Cabe anotar que la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado de crear, modificar o suprimir los tributos (Villegas, 2005, p.252).

Ahora bien, el ejercicio de tal potestad no es ilimitado, pues el Estado debe respetar determinados principios que sirven como garantías de los derechos de los contribuyentes, quienes finalmente son los destinatarios de los tributos.

Así, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 74° de la Constitución Política de 1993, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los siguientes principios: 1) principio de reserva de la ley, 2) principio de igualdad, 3) principio de respeto de los derechos fundamentales de la persona, y 4) principio de no confiscatoriedad.

Adicionalmente a los mencionados principios, según el Tribunal Constitucional, existe un principio tributario que sin estar previsto expresamente en la Constitución, se desprende de ella: el principio de capacidad contributiva. En ese sentido, para el Tribunal Constitucional el principio de capacidad contributiva es un principio implícito de la Constitución.

A continuación analizaremos cada uno de estos principios, desde la perspectiva de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

### **Principio de capacidad contributiva**

El maestro argentino Villegas (2005), considera que la capacidad contributiva está referida a la aptitud económica de las personas para contribuir con los gastos públicos (p.259).

Este principio también es conocido como de capacidad económica, y a criterio de Calvo (2012), este principio alude a la aptitud o posibilidad real de las personas de asumir la pretensión por parte de la Administración, de una específica prestación dineraria,

encontrándose dicha aptitud vinculada a una obligación tributaria concreta, como por ejemplo, el impuesto sobre los bienes inmuebles. Asimismo, para el citado autor, se vulneraría este principio si se exigiera un impuesto por una situación o hecho que careciera de contenido patrimonial, como por ejemplo, por el hecho de tener una determinada nacionalidad o ser residente de un determinado país. (p. 49).

Para Soler (2008), este principio es la causa que justifica y legitima desde un punto de vista constitucional, la creación del impuesto (p.168).

Para el Tribunal Constitucional Peruano, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 4014-2005-AA/TC, la capacidad contributiva está referida a la aptitud de las personas para ser sujetos pasivos de obligaciones tributarias, en base a hechos que sean expresiones de riqueza.

Asimismo, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 03769-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional señaló que la capacidad contributiva constituye un principio implícito que se encuentra vinculado de manera indisoluble con el hecho gravado y que legitima su creación, siendo la base para establecer el monto con que cada contribuyente puede/debe, en mayor o menor medida, contribuir a sufragar los gastos públicos.

Si bien se trata de un principio constitucional autónomo, confiere contenido a otros principios, como el de igualdad y no confiscatoriedad (Tarsitano, 2014, p.128).

De acuerdo con la doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional citadas, el principio de capacidad contributiva debemos relacionarlo con cada tributo en particular, pues alude a la capacidad económica que está detrás de una situación o hecho de carácter patrimonial.

Para Moschetti (citado por Bravo, 2013), lo que refleja la capacidad contributiva, es la riqueza que una persona genera, obtiene o acumula; no representando capacidad contributiva todo aquello que suponga un empobrecimiento o desmedro respecto del patrimonio de una persona (p.29).



En el caso del IPV, la capacidad contributiva estaría referida a la propiedad de un vehículo, entendiéndose como tal, a la suma de todos los atributos del derecho de propiedad, pues la posibilidad de ejercer tales atributos, es lo que finalmente expresa la capacidad económica del propietario que merece ser gravada con el referido impuesto.

Por tanto, no habrá capacidad contributiva si el propietario del vehículo no puede ejercer los atributos del derecho de propiedad por una causa ajena a él.

### **Principio de igualdad**

En opinión del maestro argentino Villegas (2005), la igualdad se sustenta en la capacidad contributiva, por lo que deben ser considerados como iguales, aquellos que tengan similar aptitud de pago de los tributos (p.268).

Por su parte, Calvo (2012), refiere que este principio obliga a los poderes públicos a gravar igual a los sujetos que se encuentran en una misma situación y de una manera desigual a quienes están en una situación diferente (p.55).

En opinión de Plazas (2005), este principio se opone a los tratamientos discriminatorios que supongan afectar con una mayor carga a quienes se encuentran en una misma situación (p.438).

Para el Tribunal Constitucional Peruano, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 5970-2006-PA/TC, el derecho a la igualdad tiene dos aspectos: igualdad ante la ley e igualdad en la ley; siendo que la primera significa que la ley sea aplicada de la misma manera a todos los que están en la situación prevista en el supuesto de la norma; mientras que la segunda significa que un mismo órgano no puede cambiar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos semejantes. Asimismo, de acuerdo con esta sentencia, no se vulnera el principio de igualdad cuando se establece alguna distinción de trato, siempre que dicha distinción tenga una justificación objetiva y razonable.

En la Sentencia recaída en los Expedientes N° 001-2004-AI/TC y 002-2004-AI/TC, el Tribunal Constitucional precisó que el principio de igualdad se encuentra estrechamente

vinculado con el principio de capacidad contributiva, de tal forma que la carga impositiva sea directamente proporcional a la capacidad económica de las personas gravadas con el tributo.

En la citada Sentencia, el Tribunal Constitucional reitera lo señalado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 2727-2002-AA/TC, en el sentido que la potestad tributaria del Estado está conectada de manera directa con el derecho de igualdad en materia tributaria, vale decir, con el principio de capacidad contributiva, según el cual, la distribución de los tributos debe efectuarse de tal manera que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que supone que se tenga en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes.

De acuerdo con la doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional citadas, el principio de igualdad, está vinculado con el principio de capacidad contributiva, pues la distribución de las cargas tributarias debe realizarse considerando la capacidad económica de cada contribuyente para soportar dicha carga, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales, en función de la riqueza que exterioricen cada uno de ellos.

### **Principio de no confiscatoriedad**

El maestro argentino Villegas (2005), haciendo referencia a la posición de la Corte Suprema de Argentina, sostiene que los tributos son confiscatorios si es que consumen una parte sustancial de la renta o de la propiedad de las personas, habiéndose establecido como un límite para no ser confiscatorios, el 33% de la renta o del valor de los bienes (pp. 276 y 277).

Por su parte, Calvo (2012), menciona que la no confiscatoriedad equivale a la prohibición de una carga tributaria excesiva, tomando en cuenta el sistema tributario en su conjunto, considerando arriesgado abordarla desde una perspectiva cuantitativa (p.58).

En la Sentencia recaída en el Expediente N° 03688-2011-PA/TC, el Tribunal Constitucional, reitera los criterios establecidos en la Sentencia recaída en el Expediente

N° 2727-2002-AA/TC, señalando que se vulnera el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo sobrepasa el límite que razonablemente puede aceptarse como justificado en un sistema en el que se protege constitucionalmente el derecho a la propiedad, el que además es reconocido como uno de los elementos básicos y esenciales de nuestro modelo de Constitución Económica.

Sin embargo, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 0053-2004-PI-TC, el Tribunal Constitucional precisó que la confiscatoriedad no solo puede ser cuantitativa, sino también cualitativa. Así, un tributo será confiscatorio desde el punto de vista cualitativo, si es que se exige su pago vulnerando los otros principios, como los de capacidad contributiva, igualdad, entre otros.

De acuerdo con la doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional citadas, el principio de no confiscatoriedad se vulnera cuando los tributos son tan altos que terminan afectando la propiedad de los contribuyentes o cuando se vulneran otros principios tributarios; por lo que se requiere que se haga una evaluación por cada caso concreto, a fin de determinar si los tributos resultan confiscatorios o no.

### **Derecho de propiedad**

Con relación al derecho de propiedad, Jorge y Francisco Avendaño (2017), señalan que la propiedad es el poder jurídico más amplio y completo que las personas pueden tener, en virtud del cual un bien o conjunto de bienes, sean éstos tangibles o intangibles, están sometidos de manera absoluta al señorío de la persona, lo que le permite ejercer todas las facultades posibles sobre sus bienes (p.57).

Para los citados autores, la propiedad crea una conexión directa entre el propietario y el bien, pudiendo aquél ejercer sus facultades sin la participación de otra persona (p.64).

Como podemos apreciar, el derecho de propiedad es el más completo de los derechos reales, donde el propietario tiene el poder de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, pudiendo ejercer libremente sus atribuciones sin tener que relacionarse con otra persona.

Los atributos del derecho de propiedad, que se mencionan en el artículo 923° del Código civil, son básicamente tres: a) el *ius utendi* (uso), b) el *ius fruendi* (disfrute) y c) el *ius abutendi* (disposición). El primero de tales atributos se refiere al derecho a usar la cosa, es decir, a servirse de ella; el segundo de ellos, alude al derecho a disfrutar o explotar la cosa, es decir, a percibir los frutos de ella; y finalmente, el tercero de estos atributos, que implica el derecho a disponer de la cosa. Este último atributo, permite que el propietario pueda transferir el dominio de la cosa, siendo por tanto la expresión más intensa del dominio que tiene el propietario sobre la cosa.

Si bien en el artículo 923° del Código Civil también se menciona como otro de los atributos del derecho de propiedad al *ius vindicandi* (reinvindicación), no cabe considerarlo como un atributo propio o exclusivo del derecho de propiedad, toda vez que se trata de un atributo común a los derechos reales en general, que se exterioriza a través de la persecutoriedad (María, 1994, p. 95).

En efecto, la reinvindicación no es propiamente un atributo del derecho de propiedad sino el ejercicio de la persecutoriedad del que goza todo titular de un derecho real. Por tal razón, tanto el usufructuario como el propietario tienen el derecho a perseguir la cosa a fin de que ésta les sea restituida y poder así ejercer el respectivo derecho real sobre ella.

Como se expuso anteriormente, los atributos propios del derecho de propiedad, son el uso, disfrute y disposición, siendo éstos exclusivos para ejercer tal derecho. En tal virtud, resulta erróneo que el Tribunal Fiscal considere que el propietario de un vehículo hurtado o robado debe seguir pagando el IPV, por haber perdido solo la posesión del bien pero no su titularidad, en tanto tiene el derecho de reinvindicarlo; toda vez que si no hay bien, tampoco habrá la posibilidad de usarlo, disfrutarlo o disponer del mismo.

Resulta importante definir el derecho de propiedad, pues en muchos de los impuestos reales, la propiedad de un bien, como sería el caso de los vehículos y los predios, es tomada en cuenta por el legislador como una expresión de capacidad contributiva.

Como ejemplo de impuesto real que considera la propiedad de un bien como expresión de capacidad contributiva, tenemos el Impuesto Predial, cuya imposición recae sobre la propiedad de los predios. Otro ejemplo, sería el Impuesto al Patrimonio Vehicular, que es el impuesto que constituye materia de la investigación, y cuya imposición recae sobre la propiedad de los vehículos.

Se considera que cuando se grava como expresión de capacidad contributiva, la propiedad de un bien, se hace considerando todas las atribuciones o facultades que confieren dicho derecho, vale decir, el poder usar, disfrutar, disponer y reivindicar dicho bien. Si el propietario no puede ejercer estas facultades por causas ajenas a su voluntad, entonces no hay una exteriorización de capacidad contributiva que merezca ser gravada con el impuesto, sino hasta que dicho propietario esté en la posibilidad de ejercer tales facultades.

Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N° 98, de octubre de 2005, ha señalado que el hecho que se exija al propietario de un vehículo robado o hurtado que pague el IPV constituye una situación objetivamente injusta, pues se estaría tratando de gravar una riqueza (patrimonio) que materialmente no existe; más aún si se tiene en cuenta que el Estado, como acreedor del impuesto, es el responsable de proteger la propiedad de sus ciudadanos.

### **Pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular**

El pago consiste en la forma natural como el deudor tributario cumple con la prestación a su cargo, entregando la suma de dinero adeudada al Estado, y extinguiendo así la obligación tributaria.

Por obligación tributaria debemos entender al vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, previsto por la ley, que tiene por fin el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible de manera coactiva, según lo señalado por el artículo 1° del TUO del CT.

Ahora bien, para extinguir la obligación tributaria, ésta antes debe haber nacido, y para nacer, es porque han ocurrido en la realidad todos los aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria.

## **Hipótesis de Incidencia Tributaria**

Por hipótesis de incidencia tributaria debemos entender a la descripción o detalle abstracto de un hecho contenido en la ley (Ataliba G., 1987, p. 66). En ese sentido, la hipótesis de incidencia tributaria es el hecho que está descrito en la norma. Cabe precisar que este hecho es uno de la vida cotidiana que tiene contenido económico, pues el legislador tributario solo escoge hechos económicos para convertirlos luego en hipótesis de incidencia tributaria, al ser susceptibles de expresar capacidad contributiva. También se le conoce como hecho imponible abstracto.

La descripción o detalle abstracto del hecho tiene varios aspectos: material, personal, espacial y temporal. Todos estos aspectos que se encuentran descritos en la ley, deben ocurrir en la realidad para dar nacimiento a una obligación tributaria concreta.

Pues bien, corresponde mencionar los aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria en el caso del IPV, conforme la descripción legal prevista en el TUO de la LTM.

### **Aspecto Material**

El aspecto material es la descripción del hecho gravado, la representación abstracta de un hecho jurídico, como la propiedad inmobiliaria, el patrimonio, la renta, el consumo de bienes, etc. (Ataliba, 1987, p.124).

Este aspecto presupone un verbo predicable del sujeto pasivo, como “hacer”, “dar”, “ser”, “adquirir”, “vender”, “comprar”, “permanecer”, etc. (Villegas, 2005, p.353).

Para conocer este aspecto habría que responder a la pregunta: ¿Qué está gravado?

Según lo previsto en el artículo 30° del TUO de la LTM, el IPV grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con

una antigüedad no mayor de tres años; contándose el aludido plazo desde la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular.

En tal sentido, el aspecto material en el IPV, estaría referido a la propiedad de determinados vehículos, y más concretamente, al hecho de “ser propietario” de los mismos.

### **Aspecto Personal**

El aspecto personal está referido a los sujetos de la obligación tributaria, es decir, al sujeto activo, que viene a ser el acreedor tributario, y al sujeto pasivo, representado por el deudor tributario. Para conocer este aspecto hay que responder a las preguntas: ¿Quién es el acreedor tributario? y ¿Quién es el deudor tributario?

Según el artículo 30-A° del TUO de la LTM, la administración del impuesto corresponde a las Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo.

De acuerdo con el artículo 31° TUO de la LTM, son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los vehículos; atribuyéndose el carácter de sujeto del impuesto con arreglo a la situación jurídica configurada al 1 de enero del año a que corresponda la obligación tributaria.

En tal sentido, el acreedor tributario será la Municipalidad Provincial donde tenga su domicilio el propietario del vehículo; siendo éste, el deudor tributario, en tanto tenga la calidad de propietario al 1 de enero del año a que corresponda la obligación tributaria.

### **Aspecto Espacial**

El aspecto espacial está referido al lugar donde se produce el hecho imponible, es decir, al sitio o ubicación territorial donde ocurre el hecho previsto en la norma.

Si un determinado hecho no ocurre en el lugar previsto en la hipótesis de incidencia

tributaria, no será hecho imponible y, en consecuencia, no nacerá la obligación tributaria.

Aquél lugar está referido al territorio donde el legislador tributario tiene competencia (Ataliba, 1987, p.121). Para conocer este aspecto habría que responder a la pregunta: ¿dónde ocurrió el hecho imponible?

En el caso del IPV, el lugar donde se produce el hecho imponible es el Perú, siendo en este país en el que se encuentra el Registro de Propiedad Vehicular en el que deberá inscribirse el respectivo vehículo.

### **Aspecto Temporal**

El aspecto temporal está referido al momento en el que ocurre el hecho imponible (Ataliba, 1987, p.106); vale decir, el momento en que se configura el comportamiento que se encuentra descrito en el aspecto material (Villegas, 2005, p.361).

Para conocer este aspecto hay que responder a la pregunta: ¿Cuándo ocurrió el hecho imponible?

De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 31° del TUO de la LTM, el contribuyente del IPV será quien al 1 de enero del año a que corresponda la obligación tributaria, figure como propietario del vehículo; y en caso de realizarse cualquier transferencia de propiedad, el adquirente será contribuyente desde el 1 de enero del año siguiente de efectuada tal transferencia.

En tal sentido, en el caso del IPV, el hecho imponible ocurrirá el 1 de enero de cada año, fecha en la que corresponderá verificar quién es el propietario del vehículo.

### **Capacidad Contributiva**

La capacidad contributiva está referida a la capacidad económica que se busca gravar con el impuesto, es decir, a la expresión de riqueza que el legislador tuvo en cuenta al momento de crear el impuesto.



Cuando el legislador establece un impuesto, parte de un hecho económico que considera debe gravarse por ser indicador de riqueza, como la renta, el patrimonio o el consumo.

La capacidad contributiva está relacionada con la dimensión cuantitativa del aspecto material de la hipótesis de incidencia tributaria, vale decir, con la base imponible del impuesto, toda vez que el aspecto material siempre será cuantificable, es decir, expresable en números (Ataliba, 1987, p.126).

Conforme con el artículo 32°, la base imponible del IPV está constituida por el valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio.

En tal sentido, si bien la capacidad contributiva en el IPV está referida a la suma de los atributos del derecho de propiedad sobre el vehículo, finalmente ésta se expresará en el valor económico de tal vehículo, a fin de establecer el importe o monto de la deuda tributaria que deberá cancelarse.

En efecto, el reflejo de la capacidad contributiva se proyecta tanto al hecho imponible como a la base imponible del impuesto (Soler, 2008, p.168).

### **Vehículos hurtados o robados**

La comisión de los delitos de hurto y robo, como delitos contra la propiedad, que implican el apoderamiento no autorizado de un bien mueble ajeno, con ánimo de lucro, en el primer caso sin violencia y en el segundo con violencia.

#### **Hurto**

El hurto es uno de los delitos contra el patrimonio que con mayor frecuencia se producen en nuestro país, caracterizándose por la ausencia de violencia al momento de cometerse.

Nuestro Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, contempla dos modalidades de hurto, el simple y el agravado.

El artículo 185° del Código Penal define el hurto simple de la siguiente manera: quién para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación.

Por su parte el Artículo 186° señala las agravantes que fueron considerados por el legislador donde establece una pena no menor de tres ni mayor de seis años cuando este delito se comete durante la noche, en incendio, inundación, naufragio, calamidad o todo tipo de desgracia, mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, cuando se comete con la participación de dos o más personas, así cuando también este delito involucra el apoderamiento de bienes muebles que son parte del equipaje de un pasajero.

Existen otras agravantes que se encuentran reprimidas con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años como: cuando el inmueble se encuentra habitado, cuando a consecuencia de este delito se deja a la víctima y sus familiares en problemas económicos, cuando el agente es integrante de una organización, cuando se hurta bienes científicos o que pertenecen al patrimonio del Estado, y que se cometa con empleo de materiales explosivos u otros semejantes, cuando sea en agravio de menores de edad, bienes que constituyan medios de subsistencia o herramienta del trabajo, como también sobre vehículos automotores, sus autopartes o accesorios. Cuando se cumpla cualquiera de estos supuestos y el agente es dirigente o cabecilla de una organización la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años.

Como se advierte el citado artículo 186° del Código Penal, el hurto sobre vehículo automotor califica como un hurto agravado, con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Con relación a este delito, el profesor Vizcardo (2015), señala que El hurto se califica como la modalidad típica del delito patrimonial con enriquecimiento cuya conducta es el apoderamiento doloso de bienes muebles, sin utilizar la violencia o amenaza con la finalidad de un provecho económico (p.1).

En tal sentido, el hurto es un delito contra el patrimonio, en el que se produce el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble ajeno, sin emplear la violencia, fuerza o intimidación al momento de cometerse el hecho delictivo.

## **Robo**

Por su parte, el delito de robo se encuentra tipificado en el artículo 188° del Código Penal, como tipo básico: “El que se apodera ilegítimamente de un mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.”

Cabe mencionar que este delito también contempla una modalidad agravada, la misma que se encuentra prevista en el artículo 189° donde se ha tomado en cuenta las características al momento que es efectuado el hecho delictivo como: Inmueble habitado, Durante la noche o en lugar desolado, A mano armada, Con el concurso de dos o más personas, en cualquier medio de transporte público o privado de pasajeros y cargas ya sea en vía terrestre, marítimo o aéreo, fingiendo ser autoridades o servidor público, en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, como también en vehículos automotores, sus partes o accesorios. La pena será no menor de doce a ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad

Así mismo la pena se agrava cuando el acto repulsivo ocasiona consecuencias graves contra la persona. es decir, se cause lesiones a la integridad física o metal de la víctima, abuso de la incapacidad física o mental de la víctima utilizando drogas u otros insumos químicos, fármacos y otros, colocando a la víctima o su familia en grave situación

económica, sobre bienes de valor científico o que integren al patrimonio cultural del estado. Las penas son de no menor de veinte a ni mayor de treinta años,

Si el que comete el delito de robo actúa en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del delito, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental, la pena es de cadena perpetua.

Conforme con el artículo 189° del Código Penal, el robo sobre vehículo automotor califica como un robo agravado, con pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de veinte años.

Para la autora, Gonzales (2013), señala que El robo se encuentra caracterizado porque se ejerce la fuerza física o una intimidación compulsiva para reducir la resistencia del dueño o poseedor de la cosa al momento de que se comete tal hecho (p. 4)

En tal sentido, el robo es un delito contra el patrimonio, en el que se produce la sustracción ilegítima de un bien mueble ajeno, empleando para ello, la violencia, intimidación, agresión física o psicológica al momento de cometerse el hecho delictivo.

En resumen, para nuestro Código Penal, tanto el hurto como el robo de vehículos, total o parcialmente, han sido tipificados como modalidades agravadas de ambos delitos, siendo una respuesta del legislador ante el incremento de dichos delitos en nuestra sociedad.

### **Determinación del Impuesto al Patrimonio Vehicular**

La determinación de la obligación tributaria consiste en declarar y precisar el importe del tributo (Villegas, 2005, p.399), es decir, en corroborar que nació la obligación tributaria y en fijar su cuantía. Es por ello que tiene carácter meramente declarativo, pues su función no es hacer nacer la obligación tributaria, sino declarar que ya se produjo el hecho imponible, y por tanto ya nació la obligación tributaria, señalando el monto al que asciende la deuda tributaria.

Esto se desprende del artículo 59° del TUO del CT, cuando señala que por el acto de la determinación de la obligación tributaria, el deudor tributario o la Administración Tributaria, verifican la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señalan la base imponible, así como el importe del tributo.

Es decir, a través de la determinación de la obligación tributaria se comprueba o constata algo que ya existe, esto es, el hecho imponible, como generador de la obligación tributaria.

De esta manera, la hipótesis de incidencia se convertirá en hecho imponible, cuando hayan ocurrido todos los aspectos de dicha hipótesis, dando así nacimiento a la obligación tributaria.

En el caso del IPV, el hecho imponible ocurrirá cuando se hayan dado todos los aspectos de la hipótesis de incidencia del referido impuesto, tal como se ha expuesto anteriormente.

Una vez producido el hecho imponible nacerá inmediatamente la obligación tributaria, es decir, la relación entre el sujeto activo, que sería la Municipalidad Provincial, y el sujeto pasivo, es decir, el propietario del vehículo; quedando éste obligado al pago del impuesto.

En esa línea de ideas, cuando la Directiva N° 001-006-00000024 del SAT de Lima señala que no será posible determinar deuda por IPV, estaría asumiendo que la determinación de la obligación tributaria tiene carácter constitutivo, es decir, que en tanto no se realice la determinación, la obligación tributaria no habrá nacido. En caso esa fuera la posición del SAT de Lima, no estaría de acuerdo, pues reitero que la determinación de la obligación tributaria tiene carácter declarativo.

Otra interpretación podría ser que el SAT de Lima considere que si bien nació la obligación tributaria, reconociendo el carácter declarativo de su determinación, no es posible exigir el cobro de la deuda tributaria. En tal supuesto, la no determinación de deuda por IPV estará referida a la facultad de los Gobiernos Locales para no cobrar el referido impuesto, a pesar de haberse producido el hecho imponible.

La figura legal que permitiría a los Gobiernos Locales no cobrar el IPV, una vez nacida la obligación tributaria, sería la condonación.

## **Condonación**

La condonación viene a ser el perdón de la deuda tributaria por parte del acreedor y supone la renuncia de éste a cobrar la deuda. Así, una vez que la deuda tributaria es condonada, se extingue la obligación tributaria.

En el Derecho Tributario la condonación es una figura excepcional, pudiendo establecerse únicamente a través de una norma con rango de ley (Pérez, 2015, p. 364).

La excepcionalidad de la condonación se explica por el hecho que la misma colisiona con el principio de capacidad contributiva, al dejarse de gravar una manifestación de riqueza, así como con el principio de igualdad, toda vez que se privilegia a un deudor frente a otro; por lo que su utilización debe estar reservada o limitada para situaciones en las que un grupo de personas no se encuentran en las condiciones de pagar el tributo por algún acontecimiento ajeno a ellas, como sería en el caso de una catástrofe natural; o porque ya no existe capacidad contributiva (Calvo, 2012, p.188).

En el caso del IPV estaría plenamente justificado que se condonara la deuda tributaria en el caso de los vehículos hurtados o robados, pues en mi opinión ya no existe capacidad contributiva que amerite ser gravada.

Lo que queda por analizar es si los Gobiernos Locales están facultados para condonar las deudas tributarias por concepto de impuestos.

### **Facultad de los Gobiernos Locales para condonar deudas tributarias**

De acuerdo con el artículo 41° del TUO del CT, los Gobiernos Locales no pueden condonar las deudas tributarias por concepto de los impuestos que administren, salvo el interés moratorio y las sanciones generados por tales impuestos; pudiendo solo condonar las deudas tributarias por concepto de tasas y contribuciones.

De esta manera, si los Gobiernos Locales condonasen deudas tributarias por alguno de los impuestos que administran, su actuación sería ilegal, puestos que no están facultados para ello.

Al respecto, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 10877-5-2007 del 13 de noviembre de 2007, precisó que no existe norma alguna con rango de ley que en el caso de hurto de vehículos, condone las deudas por IPV.

Asimismo, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 13202-4-2008 del 18 de noviembre de 2008, señaló que el TUO de la LTM no ha previsto exoneración o beneficio tributario con relación al IPV para los contribuyentes que hayan sufrido el robo de sus vehículos.

En efecto, se coincide con la posición del Tribunal Fiscal en el sentido que no existe una norma con rango de ley que haya previsto expresamente la condonación, exoneración o el acogimiento a cualquier beneficio tributario respecto del IPV para los contribuyentes que hayan sufrido el hurto o robo de sus vehículos.

### **1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

Para Bernal (2010), desarrollar un problema de investigación implica los siguientes pasos: exponer el problema de aspecto general, es decir el objeto de investigación al mismo tiempo plantear el problema lo que requiere, fundamentar y estructurar oficialmente la investigación. Por lo tanto, se debe estructurar el problema mediante una interrogante la cual tiene que ser sincero y exacto, que encaje a la problemática.

Por lo expuesto, los problemas a plantearse en esta investigación son:

#### **Problema general:**

- ¿Qué implicancias tiene la contienda en la interpretación de la Norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

### **Problema específico 1:**

- ¿Qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

### **Problema específico 2:**

- ¿Qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

## **1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO**

Se ha elegido esta investigación porque nos va permitir establecer si los propietarios de los vehículos hurtados o robados deben continuar con el pago del IPV.

Las implicancias prácticas son que a partir de esta investigación se podrá dilucidar la contienda existente sobre ese tema, lo que podría derivar en una propuesta de modificación normativa, la misma que tendría impacto en la sociedad, pues permitirá que los propietarios de los vehículos hurtados o robados no se vean afectados económicamente con el pago del referido impuesto, al haber desaparecido el vehículo de su ámbito patrimonial, impidiéndoles ejercer todos los atributos del derecho de propiedad sobre el aludido bien.

Adicionalmente, tal propuesta normativa permitiría hacer justicia con los propietarios de los vehículos hurtados o robados, para que no sientan que el Estado que no los protegió en su momento de la comisión de estos delitos, es el mismo que ahora les cobra un impuesto por un vehículo que ya no está en su poder; más aún en aquellos casos donde los propietarios sufren el hurto o robo de sus vehículos antes de llegar a ser contribuyentes del impuesto, como expusimos anteriormente.



## **Teórica**

Esta investigación se sustenta en las distintas teorías que tratan sobre la clasificación de los impuestos en personales y reales, en la capacidad contributiva que se grava en los impuestos patrimoniales y en la potestad de los gobiernos locales para crear, modificar y suprimir tributos.

Esta investigación nos permitirá revisar diversas fuentes de información a fin de plantear los argumentos y fundamentos teóricos de la investigación.

## **Metodológica**

La metodología de este estudio ha sido la investigación no experimental, siendo el estudio de los fenómenos que se manifiestan en la realidad, es por ello que va a emplearse en la investigación el análisis de los conocimientos de la materia objeto de investigación, como fuentes documentales (jurisprudencia, libros, revistas, etc.).

También se empleará el análisis del marco normativo legal pertinente, utilizando los distintos métodos de interpretación admitidos en el Derecho.

## **Práctica**

La presente investigación adquiere su justificación práctica en la necesidad de determinar si los propietarios de los vehículos hurtados o robados deben continuar con el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular, logrando los objetivos planteados para la investigación. Encontrando así la solución del problema a través del estudio y análisis para determinar un aporte en la sociedad con parámetros relacionados al ordenamiento jurídico. Es decir, que los contribuyentes afectados por el hurto o robo de sus vehículos encuentren la protección por parte del Estado al no cobrarse un impuesto donde no existe capacidad contributiva para tal caso.

## **1.5 SUPUESTOS**

Cabe señalar que para este trabajo de investigación emplear supuesto jurídico se entiende como hipótesis, lo cual termina siendo la realización de ideas probables de respuestas para las preguntas de la investigación.

Ante ello Hernández, Fernández y Batista (2014), señala que la hipótesis adquiere un papel diferente cuando es una investigación cualitativa a una cuantitativa (p. 365). Se entiende entonces que los supuestos son las repuestas que se obtendrán a las preguntas planteadas, mediante instrumento de recolección de datos a través de las entrevistas.

### **Supuesto Jurídico General**

La contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, genera incertidumbre jurídica en los contribuyentes y afectación económica.

### **Supuesto Jurídico 1**

La interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, vulnera los principios de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad.

### **Supuesto Jurídico 2**

La Interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, se encuentra arreglado a los principios tributarios de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad.

## **Objetivos**

Los objetivos responden a ser los estudios alcanzados, para ello Hernández, Fernández y Batista (2014), los objetivos se dividen en general y específico, lo cual, se fundamentan en la investigación. Es decir, que se conoce como el conocimiento que se pretende alcanzar.

### **Objetivo General**

Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

### **Objetivo Específico 1**

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

### **Objetivo Específico 2**

Determinar que implicancias tiene la Interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

## **II. METODO**

## **2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN**

Al estudio de investigación le corresponde el diseño de la **TEORÍA FUNDAMENTADA**, toda vez que es una estrategia metodológica que tiene como finalidad generar o descubrir una teoría.

Es un estudio basado en diseños de la investigación cualitativa que tiene como finalidad obtener resultados de una población específica respecto de la que se está haciendo el estudio, mediante la interpretación de los alcances del fenómeno a investigar.

Esta teoría es utilizada frecuentemente cuando existen resultados fallidos de otras teorías al momento de dar resultados respecto a un fenómeno que dio origen al problema de la investigación. Es por ello que, tiene resultados con precisión y exactitud para determinar el estudio mediante las entrevistas de los integrantes que colaboraron para los resultados del estudio. (Hernández, Fernández y Baptista,, 2014, pp.472-473).

Es por ello, que en la investigación se ha tomado en cuenta el enfoque **CUALITATIVO** siendo esta, una investigación basada en generar datos para la comprensión de fenómenos que suceden en la realidad.

Utilizado cuando se busca comprender la expectativa de los individuos de quien se investiga, la forma de percibir la realidad, los conceptos que subjetivamente ellos plantean ante la problemática. Por otro lado el enfoque cualitativo es aplicado cuando se ha obtenido poca información o ha sido poco explorado con respecto al tema de estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 236).

El enfoque cualitativo en una investigación que está basada en la comprensión y análisis de los fenómenos de la realidad, mediante la perspectiva de los participantes del estudio.

## **Tipo de Investigación**

### **a) BASICA- TEORICA**

La investigación aplicada, es también llamada como dinámica, activa, empírica, práctica, que se encuentra relacionada con la investigación básica, ya que sus aportes teóricos y descubrimientos generan un beneficio a la sociedad.

Por lo tanto busca una aplicación inmediata sobre una realidad concreta y tiene como finalidad aplicar teorías existentes a la producción de normas y procedimientos tecnológicos.

Esta investigación se encuentra movida por el espíritu de investigación, para encontrar solución al problema, se refiere a la solución inmediata. (Valderrama 2013, p.30).

## **2.2 MÉTODO DE MUESTREO**

### **a) Tipo de muestreo**

El tipo de muestreo que se realizó es en base del estudio de la investigación con relación a las RTFs sobre Impuesto al Patrimonio Vehicular en casos de vehículos hurtados o robados de los años 2008 -2015; es NO PROBABILÍSTICO, ya que implica que por criterio del investigador realizar las entrevistas a especialistas en el tema, es decir abogados tributaristas, y abogados civilistas.

Por lo expuesto, la investigación es de enfoque cualitativo, por lo tanto considera a la población como el contexto donde aparece la intencionalidad de investigar. Por lo tanto, la investigación cualitativa la muestra es un grupo determinado de sujetos de una comunidad, y que se recolectara datos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 385)

En tal sentido, es un estudio basado en diseños de la investigación cualitativa que tiene como finalidad obtener resultados de una población específica respecto de la que se está haciendo el estudio, mediante la interpretación de los alcances del fenómeno a investigar.

### 2.2.1 Escenario del estudio

El escenario de estudio para el tema de investigación, se desarrolló de acuerdo al espacio físico donde se aplicó la entrevista, es por ello necesario precisar que las entrevistas a realizar comprometen directamente a una persona calificada, como también al lugar donde se va entrevistar.

Entonces, el escenario del estudio realizado se basó en el análisis de las Resoluciones del Tribunal Fiscal de los periodos del 2008 al 2015, en relación al pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular en vehículos que han sido hurtados o robados, como también del análisis de la Directiva del SAT sobre dicho Impuesto, por lo que existe una doble interpretación de la norma por estos dos órganos, generando así una incertidumbre por parte de los obligados si deben seguir pagando o no, ante ello se realizó los objetivos específicos obteniendo una mayor investigación con respecto de estas dos posiciones, como también es parte del escenario los sujetos entrevistados especialistas en Derecho Tributario y Civil con la finalidad de tener una amplia lucidez del tema.

### 2.2.2. Caracterización de sujetos

A continuación se presentara quienes serán los sujetos que prestarán su colaboración en el desarrollo del presente trabajo y quienes serán los entrevistados.

**Cuadro N° 1:**

| <b>NOMBRE</b>                  | <b>PROFESIÓN Y<br/>GRADO ACADEMICO</b>   | <b>PERFIL<br/>PROFESIONAL</b> | <b>CARGO</b>   |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Angel Augusto<br>Vivanco Ortiz | Abogado especialista<br>en Derecho Civil y<br>Maestría en Civil y<br>Comercial | Procurador Adjunto            | Procurador Adjunto y<br>Representante en los<br>Procesos Judiciales a<br>cargo de la<br>Procuraduría Pública<br>del Ministerio de<br>Economía y Finanzas |

| <b>NOMBRE</b>                     | <b>PROFESIÓN Y GRADO ACADEMICO</b>   | <b>PERFIL PROFESIONAL</b>  | <b>CARGO</b>  |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Luis Gabriel Donayre Lobo         | Abogado especialista en Derecho Tributario Internacional Administrativo  | Defensor Adjunto y Autor de Artículos en Temas Tributarios y Administrativos Publicados Por la Defensoría del MEF.                                     | Defensor Adjunto de la Defensoría del contribuyente y usuario Aduanero del Ministerio de Economía y Finanzas  |
| Luis Alberto Durán Rojo           | Doctor en Derecho Tributario – España<br>Magister en Derecho Constitucional y<br>Postgrado en Derecho Tributario Europeo           | Especialista en Derecho Tributario Internacional y Constitucional, Autor de Libros y otras publicaciones en diarios y periódicos en Materia Tributaria | Director de la Revista Análisis Tributario, Docente de la pontificia Universidad Católica del Perú y Expositor de Conferencias y Talleres en materia Tributario Constitucional. |
| Ángela Gannine Arrunátegui Burgos | Abogada Especialista de Derecho Corporativo y<br>Magister en Derecho Tributario  | Abogada especialista en Temas Tributarios – Aduanero y Municipal   | Abogada a cargo de los Procesos Judiciales de la Procuraduría Publica en Defensa del MEF  |
| Yolanda Hirache Rosas             | Abogada especialista en Derecho Civil, Magister en Derecho Empresarial y Ex Fiscal Provincial del distrito Judicial de la Libertad | Abogada Senior especialista en Derecho Procesal General y Derecho Tributario Municipal.  | Abogada a cargo de los Procesos Judiciales de la Procuraduría Publica en Defensa del MEF  |
| Manuel Augusto Obregón Osorio     | Abogado Especialista en Derecho Civil  | Abogado Senior Especialista en la Área Civil y Procesos de Conciliación y  | Abogado a cargo de los Procesos Judiciales de La Procuraduría Publica en Defensa  |



| <b>NOMBRE</b>                     | <b>PROFESIÓN Y<br/>GRADO ACADEMICO</b>   | <b>PERFIL<br/>PROFESIONAL</b>                | <b>CARGO</b>   |
|-----------------------------------|--|--|--|
|                                   |  | Arbitraje.                                   | del MEF  |
| Oscar Gilmalca<br>Palacios        | Abogado con<br>especialización en<br>Derecho Tributario y<br>Aduanero  | Abogado especialista<br>en Tributos Internos | Abogado de la<br>Defensoría del<br>Contribuyente y<br>Usuario aduanero del<br>MEF. |
| Vladimir Alfredo<br>Cerna Barreto | Abogado Especialista<br>en Derecho Tributario<br>con Magister en<br>Derecho Procesal y<br>Contador con<br>Maestría Política Fiscal<br>y G.T. | Abogado especialista<br>en Tributos Internos | Abogado de la<br>Defensoría del<br>Contribuyente y<br>Usuario aduanero del<br>MEF. |

*Fuente: Elaboración propia.*

### **2.2.3 Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica**

El plan de análisis, es el procedimiento que se va a desarrollar la investigación, ya que como es de enfoque cualitativo basada en la teoría fundamentada, es el método idóneo, porque permite extraer la información (datos relevantes, fichas, señales, signos, etc) que van a permitir interpretar y analizar la investigación, siendo un mejor entendimiento para el tema de investigación.

En esta investigación se utilizó el método analítico, que según Ruiz (2007) el cual consiste en la: Desmembración de un todo, disgregándolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular (p. 13).

## 2.3 RIGOR CIENTÍFICO

Es una metodología, para obtener la información y que esa información sea autentica, la que no debe sufrir ningún cambio ni modificaciones, porque debemos darle una valoración, las cuales son validez interpretativa y validez argumentativa.

Para culminar con un resultado exitoso la técnica utilizada se basa en un procedimiento sustentado metodológicamente. Por lo tanto Olivero, (2008), las técnicas resultan útiles a la sociedad, y se complementan a través de procedimientos organizados, para el desarrollo de la investigación.

Para obtener la **validez** es necesario revisar de qué manera se ha usado la variable por otros investigadores. Y en esa investigación elaborar un mundo de ítems que logren medir la variable y todo lo relacionado con ella (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.293).

### **Técnicas e Instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad.**

Es el contexto de recolección de datos que implica una confiabilidad y validez de los métodos usados para la recolección de datos bajo los instrumentos utilizados. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.284).

Para el siguiente trabajo se utilizaron las técnicas de recolección para el desarrollo del mismo.

### **Técnicas o Instrumentos de recolección de datos.**

Para una investigación cualitativa se busca recoger datos las cual se sustenta en la obtención de información de personas relacionadas al tema de investigación.

Para Narváez (2014), la recolección de datos tiene la finalidad de analizar y comprender la información para encontrar las respuestas a las preguntas de la investigación con el propósito de generar conocimiento (ppt.4).

## **Entrevista.**

En las entrevistas se podrá profundizar el tema que se está investigando, gracias al contacto que se tiene con las personas que se entrevistarán como profesionales conocedores del tema.

Es el instrumento mediante el cual dos a más expertos darán su opinión sobre el problema a investigar. Por lo tanto, la entrevista tendrá preguntas abiertas para que el sujeto a entrevistar tenga una opinión libre sobre el tema.

A través del cual el entrevistador va realizar las preguntas de manera apropiada, ordenada y fluida, permitiendo al entrevistado consignar sus ideas y expresarse libremente frente a las preguntas abiertas planteadas por el investigador. Este instrumento de recolección de datos está compuesto por nueve preguntas abiertas, formuladas a partir de la realización del problema general y los problemas específicos. En relación a los objetivos plasmados.

### **- Guía de Entrevista**

Es un instrumento que se realiza a través del contacto directo con los sujetos entrevistados especialistas en el tema de investigación. De igual modo Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) el investigador al elaborar su guía de entrevista debe anticipar cualquier situación y reacción de los entrevistados además, puede ser estructurada, con los temas específicos y semiestructurada en la cual se tratan puntos generales (p. 412).

### **Análisis de Fuente Documental**

Como su nombre lo indica este tipo de investigación se realiza mediante la búsqueda de fuentes de carácter documental de cualquier tipo de especie. Ya sea consulta de libros, artículos, ensayos de revistas o periódicos, documentos que se encuentren en archivos; circulares, expedientes, cartas, oficios, etcétera. Teniendo en cuenta los subtipos de la investigación ya sea archivista, hemográfica o bibliográfica (Behar, 2008, p.20,21).

## **- Guía de análisis Documental**

Mediante este instrumento se realizó el análisis de la Ley materia del trabajo de investigación a través de la identificación y descripción del objeto a analizar teniendo como origen el problema general.

## **Análisis de Fuente Jurisprudencial**

Está basada en el análisis que hará el investigador sobre el contenido de las sentencias por jueces o magistrados que resuelven teniendo en cuenta criterios estrictamente jurídicos (legales).

## **- Guía de análisis Jurisprudencial**

A través de este documento se hizo un profundo análisis sobre las sentencias del Tribunal Constitucional en materia tributaria, siendo esta jurisprudencia relevante para el tema de investigación.

## **Validez**

Para conseguir la validez a la opinión de expertos en el tema, para Pérez (2006) son personas que declaran su conocimiento en el tema y sus valoraciones quedan plasmadas en un instrumento (p. 227).

Por tales razones, es necesario señalar que los instrumentos (guía de entrevista y análisis jurisprudencial) fueron validados por cuatro especialistas pertenecientes a la Universidad César Vallejo.

**Cuadro N° 2:**

| VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO        |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| Sujeto que Validó el Instrumento | Cargo                                  | Porcentaje |
| Esaú Vargas Huamán               | Asesor de Tesis UCV                    | Aceptable  |
| Santisteban Llontop, Pedro       | Fiscal Militar – Fuero Militar         | Aceptable  |
| Salas Quispe Mariano Rodolfo     | Docente de Derecho UCV –<br>Lima Norte | Aceptable  |
| Israel Ballena Cesar Augusto     | Docente de Derecho UCV –<br>Lima Norte | Aceptable  |

*Fuente: Elaboración propia.*

### **Confiabilidad**

Para obtener confiabilidad se entrevistó a sujetos que tengan pleno conocimiento del tema, para que su opinión subjetiva de cada uno de ellos sea un aporte necesario y de colaboración para el desarrollo de la investigación. Para ello Hernández, Fernández y Baptista, (2014), para mantener la confiabilidad en lo investigado se emplea un mínimo de estándares mediante el término “rigor “para identificar la validez y objetividad (p. 454).

En ese sentido, la confiabilidad que brindo cada entrevistado ya sea especialista en Derecho Tributario o especialista en Derecho Civil, mediante sus aportes para la investigación fueron sustanciales para lograr los objetivos planteados.

Finalmente, la confiabilidad es la manera de obtener resultados de manera eficiente, creando seguridad y confianza a los instrumentos realizados por el investigador.

## 2.4. ANÁLISIS CUALITATIVOS DE LOS DATOS

La finalidad del proceso de análisis de datos cualitativos recogidos en la investigación debe ser reducida en el sentido de organizarlos categóricamente, luego se debe elaborar el análisis descriptivo. Ante ello, Mejía, J. (2011) contribuye a que los procesos de análisis de los datos se relacionen entre sí y no sean excluyentes.

**a). Análisis Interpretativo:** se refiere a un enfoque razonable, coherente que estudia la realidad en su totalidad, las interpretaciones realizadas se trabajaron con datos ya existentes consiguiendo un mejor método para fundamentar y sustentar lo consignado en los instrumentos de investigación.

**b). Análisis Comparativo:** mediante este análisis se logra contrastar los resultados con las categorías que guiaron la investigación. A través de una comparación sistemática. Finalmente se hace una explicación y descripción de los resultados obtenidos que fueron semejantes o diferentes.

## 2.5 ASPECTOS ÉTICOS

El investigador tiene que tomar en cuenta los valores éticos que se encuentran en la realidad, Por lo tanto, la investigación está sustentada en las leyes, la doctrina y la jurisprudencia, que son fuentes de derecho.

Además, el trabajo investigado toma en cuenta las reglas APA, utilizando los métodos de parafraseo sin salir del contexto de la opinión del autor respetando las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes de consulta, por ende la tesis en ningún momento ha sido plagiada no total ni parcialmente. Asimismo, la tesis no ha sido publicada ni creada por otro autor.

Es mi deber como estudiante de la Universidad César Vallejo tener una conducta ética dentro y fuera de la casa de estudios.

### **III.DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS**

### **3.1 Descripción de Resultados: guía de entrevista dirigida a abogados y funcionarios públicos.**

Según Valderrama, S. (2017) se sustenta en analizar los datos recogidos de la investigación, teniendo el control del instrumento de recogida de datos a través de diferentes técnicas. Lo cual permite analizar una situación de diferentes ángulos (p. 290).

Por lo tanto, el autor indica que es el recojo de información necesaria que permite al investigador analizar los datos recogidos para la investigación del tema.

A continuación, se plasmaran los datos obtenidos de la guía de entrevista, es decir los resultados, teniendo en cuenta el problema general de la presente investigación:

**Objetivo General:** Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

#### **1. ¿Qué implicancia jurídica considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?**

Vivanco, Donayre y Arrunátegui (2018), coinciden en que los contribuyentes se encuentran en una situación incierta, pues no tienen certeza sobre si deben o no pagar el impuesto en caso que sus vehículos sean hurtados o robados, debido a que la norma no prevé de manera expresa dicho supuesto; lo que genera una evidente inseguridad jurídica

De igual manera, Hirache (2018), considera que se genera una incertidumbre jurídica para el contribuyente, al existir diferente interpretación de la Administración Tributaria, respecto al pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular en caso de Vehículos robados o hurtados, al no estar debidamente normado este supuesto de hecho, esta diferente



interpretación también genera que se vulnere principios constitucionales de los contribuyentes.

En cambio para Durán (2018), se genera dos problemas, el primero: decidir según las normas del derecho común, es decir el derecho civil hasta cuando uno es propietario en el supuesto que el bien ha sido hurtado o robado. En teoría debería generar el Tributo (el hecho material de imposición se ha producido). Segundo: tiene que ver con el valor constitucional, si el impuesto grava la propiedad del vehículo, no podría gravarse cuando el bien ha sido hurtado o robado, pues más allá de la declaración de pérdida de propiedad bajo las reglas del derecho civil, habría que hacer un análisis constitucional, si en tales supuestos el tributo se vuelve confiscatorio y ello debería estar a luz de los parámetros que establece la norma constitucional.

Por otro lado, Obregón (2018), dice que básicamente no permite una solución uniforme a los casos que puedan presentarse, lo que conlleva a generar incertidumbre Jurídica.

Del mismo modo, Gilmalca (2018), señala que existe una vulneración al principio de Capacidad Contributiva, más aun si el hurto o robo de vehículos destinados a negocios personales que generan ingresos al patrimonio al estar fuera de la esfera patrimonial no podrán ser uso ni disfrute de como propietarios, generando talvez que el impuesto se vuelva confiscatorio.

En ese mismo sentido, Cerna (2018), se afecta la seguridad jurídica, en cuanto a la predictibilidad y certeza que tienen que tener las decisiones de los órganos administrativos, lo cual implica la exigencia de coherencia o uniformidad de criterios en la interpretación y aplicación del derecho. De la misma manera, se afecta el principio de igualdad en la aplicación de la ley, que impone la obligación a todos los órganos públicos (incluidos los órganos administrativos), de no aplicar la ley de una manera distinta a personas que se encuentran en casos o situaciones similares

2. **¿Qué implicancia económica considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?**

Vivanco y Donayre (2018) señalan que existe implicancia económica para los contribuyentes tener que pagar el Impuesto a pesar que ya no tienen el vehículo en su poder, para la Administración Tributaria que va a recaudar a pesar que ya el contribuyente no tiene el vehículo en su poder. Existe por tanto una afectación económica para el contribuyente y la Administración recaudo donde no debería hacerlo.

Asimismo Arrunategui (2018), considera que la interpretación efectuada del artículo 30° por parte del Tribunal fiscal solo se realiza tomando en cuenta el mencionado artículo, más no toma en consideración de hurto o robo. En el sentido. La principal implicancia económica de esta interpretación es que grave con Impuesto Vehicular a aquellas personas que han sido despojados de dicho patrimonio, lo cual no es la finalidad de la norma

Del mismo modo, Hirache (2018) existe afectación económica para el contribuyente en estos casos, dado que tienes que realizar el pago del Impuesto respecto de un bien que ya no está en la esfera de tu patrimonio por haber sido robado o hurtado.

En cambio para Durán (2018), en términos constitucionales y jurídicos no evalúa la afectación económica sino la violación de un derecho constitucional.

Por otro lado, Obregón (2018), considera que la contienda propiamente no tiene implicancia económica para el administrado o la administración, pues la implicancia económica se genera una vez resulta la controversia. Si existe inseguridad para las partes que finalmente, genera gasto a uno y a otro.

En cambio para, Gilmalca (2018), al respecto dice que termina siendo confiscatorio para el propietario al no formar parte de su patrimonio sobre todo, si el vehículo le genera ingresos.

De otra manera más amplia, Cerna (2018), señala que Internalizar una situación más gravosa por parte del contribuyente, probada la pérdida del bien o pérdida de su esfera patrimonial, conlleva al contribuyente a soportar una situación más gravosa pues no solo no tiene el bien sino que deberá pagar tributo asociado al uso, disfrute y disposición del mismo que no puede cumplir, en el mismo sentido vulneración al principio de capacidad contributiva y no confiscatoriedad, en tanto la persona no tiene o reúne la misma aptitud económica que antes del hecho generador del perjuicio(robo o hurto), por lo que además con la obligación del pago del tributo el estado estaría apropiando indebidamente de parte de la propiedad del contribuyente (dinero), cuando la norma debería regular esta situación y establecer un límite material.

**3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?**

Para Vivanco y Donayre (2018), se resolvería la contienda interpretativa con una norma aclaratoria que regule el problema. Es decir que debería existir una modificatoria de la norma y expreso lo siguiente: debería modificarse la Ley de Tributación Municipal en el sentido de incluir la exención o no pago al impuesto si el vehículo es robado o hurtado. Consignando que la posición del Tribunal Fiscal no ha cambiado y que este colegiado está por encima del SAT.

De igual manera Arrunategui (2018), tomando en cuenta y de acuerdo con el artículo 74° de la Constitución la aplicación de tributos debe realizarse mediante ley o norma con rango similar, a fin de no continuar exigiendo el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular a aquellos propietarios que quedan despojados de sus vehículos mediante hurto o robo, se debería establecer una precisión en el ART. 30° de la Ley de Tributación Municipal en el que se señale que no se encuentra gravado con el impuesto en comentario la propiedad de vehículos hurtados o robados

De otra manera, Duáan (2018), modificarse la norma para dejarlo claramente establecido, debería establecerse una regla por la cual se establezca una declaración de que el vehículo

ha sido hurtado o robado o algún elemento de juicio que evitara un fraude a la ley es decir que la gente mienta para no pagar el impuesto.

Por otro lado, Hirache (2018) debe modificarse el artículo 968° del Código Civil, sobre causas de extinción de la propiedad, en el inciso 2°, agregando el supuesto de pérdida total del bien mueble en casos de robo o hurto.

En cambio, Obregón (2018), en armonía con el derecho de propiedad (entiéndase sus atributos), debería haber una modificatoria normativa que establezca una exoneración al pago del Impuesto en el caso de Vehículos Hurtados o Robados.

Asimismo, Gilmalca (2018), recomienda plantear una modificación normativa, donde se pueda indicar que en los casos hurto o robo, el pago del impuesto se suspenda a partir del próximo año, si el vehículo es recuperado por el propietario y este debería informar a la administración retirar la suspensión y continuar con el pago.

En la misma línea, Cerna (2018), debería existir claridad normativa, la legislación cuando no reúne todos los supuestos de la realidad permite lo que conocemos como interpretación para establecer el verdadero significado o sentido de la norma, así, una forma de resolver interpretaciones disímiles sería recoger el supuesto del hecho (hecho imponible) en la norma y darle consecuencia jurídicas, siendo el caso que nos convoca la pregunta estaría encaminada a establecer los supuestos de exoneración del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular.

**Objetivo Específico 1:**

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

**4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?**

Para Donayre y Vivanco (2018), se afecta el principio de igualdad, cuando se exige el pago del impuesto tanto a una persona que tiene en su poder el vehículo, como aquella que no lo tiene. Con ello, se está tratando igual a quienes están en situaciones diferentes, lo que implica la vulneración a este principio.

Asimismo Arrunategui y Durán (2018), se afecta el principio de igualdad, porque se exige el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular a aquellos propietarios que ya no se encuentran en posesión de sus vehículos a comparación de otros propietarios que si se encuentran gozando de su propiedad al no haber sido Víctimas de hurto o robo

Por otro lado, Hirache (2018), el Tribunal Fiscal como tribunal administrativo no puede ejercer control difuso administrativo según la STC N° 04293-2012-AA del 18.03.2014, por lo que aplica la norma vigente (principio de legalidad, no puede analizar la constitucionalidad de la norma, en este caso, el principio de igualdad.

En cambio, Obregón (2018), hay un afectación al principio de igualdad, pues no podría considerarse equitativo aplicar el impuesto a quien no tiene el uso del vehículo frente a aquel que si lo tiene. En tal sentido, la interpretación que efectúa el Tribunal Fiscal si afecta el principio de igualdad.

De la misma manera, Gilmalca (2018), es deber de todo ciudadano a contribuir al gasto público, sin embargo no todos debemos estar obligados de igual manera ya que

personalmente se debe tener en cuenta la situación económica de cada persona, en ese contexto el vehículo al no formar parte de la esfera patrimonial del propietario por un incidente que ha generado un perjuicio económico, no debería estar obligado a pagar el impuesto por no estar en las mismas condiciones que los demás.

Por lo tanto, **Cerna** (2018), afecta al principio de igualdad, en mención supone que ha iguales supuestos de hecho se aplican iguales consecuencias jurídicas, entonces hay que preguntarnos si cuando se produce el robo o hurto no es cierto que la víctima (contribuyente) ha perdido el derecho de propiedad sobre el mismo por un hecho ajeno a su voluntad seguir aplicando el impuesto supondría asumir que el supuesto de hecho que grava al contribuyente no se habría alterado, lo cual es negado por la realidad.

**5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?**

Donayre, Vivanco y Durán (2018), se afecta, pues se grava con el impuesto a pesar que no hay patrimonio en poder del contribuyente; volviéndose confiscatorio pues el Impuesto grava al contribuyente sin que exista riqueza; ya que no puede ejercer el derecho de propiedad en toda su extensión.

Vivanco

De igual manera, Arrunategui (2018), afecta el principio de no confiscatoriedad, dado que la exigencia del pago de dicho tributo está en lo establecido en la norma art. 30° además se debe tomar en cuenta que la afectación del principio de no confiscatoriedad debe ser evaluado en cada caso, dado que la aplicación de determinado tributo puede ser confiscatorio para algunos contribuyentes por sus situaciones particulares, y para otras no necesariamente devendría en confiscatorio.

Por otro lado, Hirache (2018), conforme se ha dicho el Tribunal Fiscal según la STC N° 04293-2012-AA del 18.03.201, conoce de facultades para ejercer control difuso administrativo, ya que dicha facultad solo está reservada para el Órgano Jurisdiccional y el

Tribunal Constitucional esto es que puedan ejercer el control difuso de la constitucionalidad de las normas. En tal sentido, si la norma del Impuesto al Patrimonio Vehicular afecta el principio de no confiscatoriedad, ello implica que el Tribunal Fiscal ejerza control difuso, lo que está prohibido según la citada sentencia del TC.

Por lo contrario, Obregón y Gimalca (2018), partiendo de que la aplicación del impuesto en el caso de vehículos robados, vulnera el principio de igualdad, entonces puede concluirse que si existe una afectación del principio de no confiscatoriedad, de manera que la interpretación del Tribunal Fiscal afecta al propietario económicamente.

De manera más precisa, Cerna (2018), afecta el principio de no confiscatoriedad, la imposición no debe producir consecuencias indeseables o imprevisible, tampoco debe provocar efectos que menoscaben su propia finalidad, y es que si señalamos que el robo de un vehículo no supone una alteración al derecho de propiedad del contribuyente e insistimos en el cobro del tributo, debemos advertir que para poder hacer frente a las obligaciones tributarias ante el fisco, el contribuyente se desprende de otra parte de su patrimonio, para cumplir con la obligación tributaria que se ha visto afectada por una realidad económica que a las resoluciones del tribunal fiscal parece no importar.

**6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?**

Donayre y Durán (2018), afecta pues no hay capacidad contributiva que deba cobrarse, pues ya el contribuyente no es tal, dado que no podrá comportarse como propietario al no tener en su poder el bien y por ello no puede ejercer el derecho de propiedad en toda su extensión.

Pero Vivanco (2018), al respecto afirmo que es relativo, es eminentemente subjetivo, depende de la utilidad del vehículo.

Para Arrunategui (2018), considera que la interpretación del Tribunal fiscal no afecta la capacidad contributiva, dado que si bien el propietario del vehículo ha sido privado de uso, ello no significa que al momento de haber adquirido el bien se haya encontrado en la posibilidad de asumir el Impuesto al Patrimonio Vehicular.

Por otro lado, Hirache (2018), al igual que lo expuesto en el punto anterior el Tribunal Fiscal no puede ejercer control difuso administrativo, por lo que no puede analizar si el Impuesto al patrimonio vehicular afecta el principio de capacidad contributiva porque ello significaría analizar la constitucionalidad o no de la norma, la que le está prohibido por la STC N° 04293-2012-AA del 18.03.201.

En cambio Obregón (2018), si hay afectación a principio de capacidad contributiva en el sentido que habiendo sido sustraído de la esfera patrimonial del contribuyente (robado el vehículo) eminentemente no existirá riqueza respecto de la cual deba tributarse.

De manera más simple Gilmalca (2018), si afecta, porque está vulnerando con el principio de igualdad.

De igual modo, Cerna (2018), si afecta el principio de capacidad contributiva reconocido por la aptitud económica que tiene la persona para asumir cargas tributarias tomando en cuenta la riqueza que dicho sujeto ostenta, cabe preguntarse razonablemente si el robo del vehículo no norma la capacidad contributiva del contribuyente y podemos señalar que si existe una afectación a la exteriorización de riqueza, renta real o potencial que legitime la imposición, pues el contribuyente ya no cuenta con el bien que indicaba su capacidad contributiva.



**Objetivo Específico 2:**

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

**7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?**

Para Vivanco, Donayre y Durán (2018), se garantiza, porque garantiza el deber de pago únicamente a quienes posee el bien, es decir pues no debe tributar igual quien no está en una situación diferente quien no tiene en su poder el bien, no debe tributar como aquel que si tiene el bien su poder.

De igual manera, Arrunategui (2018), en este caso garantiza el principio de igualdad al no exigir el pago a aquellos propietarios de vehículos hurtados o robados.

Por otro lado, Hirache (2018), el SAT respecto al Impuesto al Patrimonio Vehicular debe aplicar dicha normativa en virtud del principio de legalidad contenida en el Código tributario.

En cambio Obregón (2018), el criterio del SAT es acorde con el principio de igualdad, no obstante al tratarse de una regulación normativa de carácter tributario que exonere pago de impuestos debería estar regulado en la Ley.

Con la misma opinión, Gilmalca (2018), garantiza el principio de igualdad, más aun si los vehículos robados generan beneficio al contribuyente.

De igual forma, Cerna (2018), garantiza el principio de igualdad, porque según la directiva del SAT ya no se encuentra en la esfera patrimonial del contribuyente, el cual implica que si se cobra hay una diferencia en la capacidad contributiva (pérdida del bien) pues esto implica que no se puede recibir un mismo trato administrativo ante el mismo supuesto de hecho

**8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?**

Vivanco y Durán (2018), garantiza, porque no afecta al patrimonio del contribuyente, porque ya no tiene en su poder.

Asimismo Donayre (2018), garantiza pues no se grava con el impuesto a quien no tiene la posibilidad de comportarse como propietario del bien, de esta manera el impuesto no afecta la propiedad del contribuyente.

De igual manera Arrunategui y Gilmalca (2018), considera que no afecta el principio de no confiscatoriedad dado que el propietario del vehículo hurtado o robado no tendrá que efectuar el pago por el Impuesto al Patrimonio Vehicular.

En cambio, Hirache (2018), en virtud del principio de legalidad, el SAT de Lima debe aplicar la norma que establece el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular, sin entrar a analizar si se afecta o no el principio de no confiscatoriedad, pues ello significaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicha norma.

Por otro lado, Obregón (2018), el criterio del SAT de Lima no afecta el principio de no confiscatoriedad, dado que libera del pago del impuesto a quienes han sufrido el robo de

sus vehículos, lo cual coincide con la aplicación del principio de razonabilidad y de no arbitrariedad que debe ser respetado por las entidades estatales.

En ese mismo sentido, Cerna (2018), se garantiza el principio de no confiscatoriedad, precisando que la confiscatoriedad puede evaluarse desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo; siendo cuantitativo cuando el tributo es oneroso para el contribuyente, y cualitativo, cuando se produce una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios, como por ejemplo, en este caso, el principio de igualdad.

**9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?**

Donayre y Vivanco (2018), si garantiza y expresa de la siguiente manera: garantiza, ya que considero que una persona que no tiene en su poder un bien por haber sido sustraído por otro, no tiene capacidad contributiva que deba ser gravada, no hay riqueza.

Asimismo, Arrunategui y Durán (2018), garantiza el principio de capacidad contributiva, dado que exime del pago del Impuesto al patrimonio Vehicular a aquellos contribuyentes que han sido víctimas de robo o hurto.

Por otro lado, Hirache (2018), el SAT debe aplicar la norma en virtud del principio de legalidad contenida en el Código Tributario, sin entrar a analizar la constitucionalidad o no de dicha norma y si afecta o no el principio de capacidad contributiva.

En cambio Obregón (2018), en tanto el vehículo no se encuentre dentro de la esfera de propiedad del administrado, no resulta razonable exigir el pago del impuesto, pues no existe riqueza que sustente la aplicación del impuesto de manera que la interpretación que efectúa el SAT estimo correcta.

Del mismo modo Gilmalca (2018), estabiliza dicho principio en tanto haya una afectación patrimonial al contribuyente.

También, Cerna (2018), garantiza el principio de capacidad contributiva, pues advierte la norma que el sujeto no se en contraría en la aptitud económica para asumir la carga tributaria al haber sido despojado de un bien, por esta situación identifica claramente una nueva realidad para ser exonerado del impuesto del pago del impuesto que no tendría capacidad contributiva.

### **3.2 Descripción de los resultados de la Guía de Análisis Documental.**

A continuación, se consignarán los datos obtenidos de la guía de análisis documental, la cual está basada en el objetivo general, del trabajo de investigación:

**Objetivo General:** Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

#### **Artículo 30° de la Ley de Tributación Municipal.**

“El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir de la Primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular.”

#### **Descripción del Objetivo a analizar.**

Como puede advertirse, el artículo 30° de la Ley de Tributación Municipal, grava con el Impuesto al Patrimonio Vehicular, la propiedad de determinados vehículos, sin exigir que dicha propiedad sea aquella que permita ejercer todos los atributos propios del derecho de propiedad, por lo que en una interpretación literal de dicha norma, también estarían obligados al pago, los propietarios de los vehículos hurtados o robados.

En tal sentido, se propone la modificación de la citada Ley.

### **3.3 Descripción de los resultados de la Guía de Análisis Jurisprudencial.**

De la misma manera se registrará los resultados que se obtuvieron mediante la guía antes mencionada, la cual se concentra en el objetivo específico 1 y objetivo específico

**Objetivo Específico 1:** Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

**I. Artículo 74° de la Constitución Política del Perú:** “(...) el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio (...)”

La Constitución Política es la Ley Fundamental, que tiene por finalidad ser base del ordenamiento jurídico nacional, dirigida al respeto de los principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos que se desprenden de ella y que se aplica a todas las leyes de la República.

Prevalece sobre todas las leyes, siendo sus normas inviolables y de obligatorio cumplimiento.

En ese contexto, la Constitución Política del Perú regula en su artículo 74°, la potestad tributaria del Estado, así como los límites a dicha potestad, a través de los principios tributarios que en ella se mencionan.

#### **Identificación del objeto de análisis.**

### **II. Principio de Igualdad**

La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02727-2002-AA/TC en su considerando cuarto señala lo siguiente:

“(…) la distribución de los tributos se debe realizar de tal forma que se trate igual los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, principalmente donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que evidencia que implique que se considere la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes”.

### **III. Principio de no Confiscatoriedad.**

La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0041-2004-AI/TC, en el considerando cincuenta y seis:

“La confiscatoriedad no solo será evaluada desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, esto es, cuando se produzca una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios (…)

### **IV. Principio de Capacidad Contributiva.**

La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4014-2005-AA/TC, señala en el considerando Séptimo:

“se entiende como capacidad contributiva a la aptitud de una persona para ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, que se sustentan en base a determinados hechos que revelan riqueza. Por su parte, este principio va de la mano con el de igualdad sea en el plano horizontal o vertical, determinando, por un lado, que se generalice la obligación del pago cuando exista igual manifestación de riqueza y por el otro, que dicha obligación sea proporcional a la capacidad contributiva del obligado”

### **Descripción del Objetivo a analizar.**

Las Resoluciones del Tribunal Fiscal analizadas no toman en cuenta el Principio de Igualdad, que significa tratar igual a los que están en igual posición económica y desigual a los que están en desigual posición económica.

Así, de acuerdo con el criterio del Tribunal Fiscal, deben pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular tanto los que pueden ejercer el uso y disfrute de su vehículo, como aquellos que no pueden ejercer tales atributos por una causa ajena a su voluntad, es decir, por el hurto o robo de los mismos; con lo que se estaría tratando igual, a quienes no están en una misma situación.

Por tales razones, las resoluciones del Tribunal Fiscal vulnerarían el Principio de Igualdad.

En el entendido que un impuesto se convierte en confiscatorio cuando vulnera otros principios tributarios, podría afirmarse que las resoluciones del Tribunal Fiscal que determinan que se debe pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular en el caso de vehículos hurtados o robados, vulneran también el principio de no confiscatoriedad.

Asimismo, tratándose el Impuesto al Patrimonio Vehicular de un impuesto real, que recae sobre el valor del bien, no existiendo el mismo, no habría capacidad contributiva que merezca ser gravada.

En tal sentido, las Resoluciones del Tribunal Fiscal vulnerarían este principio, al exigir que se pague el impuesto a pesar que el vehículo ya no está en el patrimonio del propietario.

**Objetivo Específico 2:** Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

**I. Artículo 74° de la Constitución Política del Perú:** “(...) el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio (...)”

La Constitución Política es la Ley Fundamental, que tiene por finalidad ser base del ordenamiento jurídico nacional, dirigida al respeto de los principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos que se desprenden de ella y que se aplica a todas las leyes de la República.

Prevalece sobre todas las leyes, siendo sus normas inviolables y de obligatorio cumplimiento.

En ese contexto, la Constitución Política del Perú regula en su artículo 74°, la potestad tributaria del Estado, así como los límites a dicha potestad, a través de los principios tributarios que en ella se mencionan.

### **Identificación del objeto de análisis.**

## **II. Principio de Igualdad**

La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02727-2002-AA/TC en su considerando cuarto señala lo siguiente:

“(...) la distribución de los tributos se debe realizar de tal forma que se trate igual los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, principalmente donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo



que evidencia que implique que se considere la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes”.

### **III. Principio de no Confiscatoriedad.**

La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0041-2004-AI/TC, en el considerando cincuenta y seis:

“La confiscatoriedad no solo será evaluada desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, esto es, cuando se produzca una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios (...)”.

### **IV. Principio de Capacidad Contributiva.**

La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4014-2005-AA/TC, señala en el considerando Séptimo:

“se entiende como capacidad contributiva a la aptitud de una persona para ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, que se sustentan en base a determinados hechos que revelan riqueza. Por su parte, este principio va de la mano con el de igualdad sea en el plano horizontal o vertical, determinando, por un lado, que se generalice la obligación del pago cuando exista igual manifestación de riqueza y por el otro, que dicha obligación sea proporcional a la capacidad contributiva del obligado”

### **Descripción del Objetivo a analizar.**

El SAT de Lima mediante su Directiva N° 001-006-00000024, determina que no es posible cobrar Impuesto al Patrimonio Vehicular cuando el vehículo ha sido hurtado o robado, lo que se encuentra conforme con el Principio de Igualdad, al tratar desigual a quienes están en desigual posición económica.

De la misma manera, la Directiva del SAT de Lima garantiza el principio de no confiscatoriedad al establecer que en el caso de los vehículos hurtados o robados no es posible cobrar el impuesto; toda vez que la posición del SAT de Lima no colisiona con otros principios tributarios.

Asimismo, tratándose el Impuesto al Patrimonio Vehicular de un impuesto real, que recae sobre el valor del bien, no existiendo el mismo, no habría capacidad contributiva que merezca ser gravada.

De esta manera, el SAT de Lima garantiza principio de capacidad contributiva, pues al no determinar deuda por los vehículos hurtados o robados, por considerar que el bien ha desaparecido de la esfera patrimonial del propietario, está asumiendo que también ha desaparecido la capacidad contributiva que justifique la imposición del referido tributo.

#### **IV. DISCUSIÓN**

En el presente capítulo se tratará todo lo referido a la discusión de resultados. Para tal propósito, se ha considerado los resultados obtenidos mediante la guía de entrevista, guía de análisis documental y guía de análisis jurisprudencial. Asimismo, se analizarán los resultados a través de los antecedentes de trabajos previos, marco teórico y otras normas que tengan relación con la presente investigación.

Es así que la discusión se sustentará en el objetivo general y en los objetivos específicos 1 y 2.

| <b>Objetivo General</b>  |
|--|
| Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados |

| <b>Supuesto Jurídico General</b>  |
|---|
| La contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, genera incertidumbre jurídica en los contribuyentes y afectación económica de los mismos. |

En los antecedentes previos de lo que fue el trabajo de investigación, en la parte internacional se tiene que la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-489/04 del 20 de mayo de 2004, recaída en el Expediente N° T-845873, estableció que la obligación de pagar el impuesto por todo el año sólo podía desvirtuarse si el contribuyente demostraba la cancelación de la matrícula del vehículo antes del nacimiento de la obligación tributaria; lo que no habría ocurrido en el caso, pues el contribuyente se habría limitado a presentar la denuncia por el hurto del vehículo ante la policía, omitiendo tramitar la cancelación de la matrícula del aludido vehículo, por lo que aún seguía figurando como propietario del mismo. Esto quiere decir, que en caso dicho contribuyente

hubiera tramitado la cancelación de la matrícula del vehículo hurtado, no habría tenido que pagar el impuesto.

Pero Según Alva (2003), en su artículo *“Hurto, Robo e Impuesto Vehicular”*, los resultados del hurto o robo de vehículos respecto del IPV, es que el propietario del vehículo no tendrá la posesión del mismo, pero no perderá su condición de propietario, por lo que continuará siendo contribuyente del referido impuesto (p.25).

En esa misma línea el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 13202-4-2008 del 18 de noviembre de 2008, reiteró el criterio establecido en la Resolución N° 03152-3-2002, precisando que la Ley de Tributación Municipal no ha previsto alguna exoneración o beneficio tributario con relación al pago del referido impuesto para los contribuyentes que hubieran padecido el hurto o robo de sus vehículos.

En cuanto al marco teórico, la Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N° 98, de octubre de 2005, ha señalado que el hecho que se exija al propietario de un vehículo robado o hurtado que pague el IPV constituye una situación objetivamente injusta, pues se estaría tratando de gravar una riqueza (patrimonio) que materialmente no existe; más aún si se tiene en cuenta que el Estado, como acreedor del impuesto, es el responsable de proteger la propiedad de sus ciudadanos.

Por otro lado, de la descripción del objetivo a analizar de la guía de análisis documental se tiene que el artículo 30° de la Ley de Tributación Municipal, grava con el IPV, la propiedad de determinados vehículos, sin exigir que dicha propiedad sea aquella que permita ejercer todos los atributos propios del derecho de propiedad, por lo que en una interpretación literal de dicha norma, también estarían obligados al pago, los propietarios de los vehículos hurtados o robados.

Así mismo, de los resultados de la guía de entrevista Vivanco, Donayre y Arrunátegui (2018), coinciden en que los contribuyentes se encuentran en una situación incierta, pues no tienen certeza sobre si deben o no pagar el impuesto en caso que sus vehículos sean hurtados o robados, debido a que la norma no prevé de manera expresa dicho supuesto; lo que genera una evidente inseguridad jurídica.

En ese mismo sentido, Cerna (2018), se afecta la seguridad jurídica, en cuanto a la predictibilidad y certeza que tienen que tener las decisiones de los órganos administrativos, lo cual implica la exigencia de coherencia o uniformidad de criterios en la interpretación y aplicación del derecho. De la misma manera, se afecta el principio de igualdad en la aplicación de la ley, que impone la obligación a todos los órganos públicos (incluidos los órganos administrativos), de no aplicar la ley de una manera distinta a personas que se encuentran en casos o situaciones similares.

Se comparte la noción de los entrevistados en el sentido que las implicancias de la contienda en la interpretación de la norma del IPV en el caso de los vehículos hurtados o robados genera incertidumbre jurídica frente al contribuyente al no tener éste en claro si debe pagar o no el impuesto. Esa falta de certeza obedece a que el SAT de Lima y el Tribunal Fiscal han adoptado criterios contradictorios, lo que hace que el contribuyente no sepa qué comportamiento debe adoptar con relación al pago del impuesto, más aun si se tiene en cuenta la situación emocional en la que se encuentra luego de haber sido víctima de la delincuencia, lo que incluso puede llevarlo a cuestionar la actuación del Estado en la protección de su seguridad. A este contribuyente no le parecerá justo que el Estado que no lo protegió cuando sufrió el ataque de la delincuencia, pretenda seguirle cobrando el impuesto sobre un bien que ya no se encuentra en su esfera patrimonial.

Tal incertidumbre se ve acentuada por la afectación al derecho de propiedad que significa exigir el pago del impuesto en tales circunstancias, al no existir capacidad contributiva que merezca ser gravada con el referido impuesto.

En cambio se discrepa con la posición de Alva (2003), para quien se debe continuar con el pago del IPV en caso de hurto o robo de vehículo pues solo se habría perdido la posesión del bien, más no su propiedad, toda vez que de acuerdo con el artículo 923° del Código Civil, el derecho de propiedad tiene entre sus atributos, el poder usar, disfrutar y disponer del bien; y si es que ya no existe el bien en el patrimonio del propietario, éste no podrá ejercer tales atributos, lo que en los hechos significaría que habría perdido la propiedad del bien. Dado que el impuesto recae sobre el valor del bien, si no hay bien, tampoco debería haber impuesto.

| <b>Objetivo Especifico 1</b>  |
|---|
| Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados. |

| <b>Supuesto Especifico 1</b>  |
|---|
| La interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, vulnera los principios de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad. |

Para el siguiente objetivo, de acuerdo al marco teórico, el método de interpretación de la *ratio legis*, busca descubrir el sentido y alcance de la norma según su razón de ser o su espíritu, la cual debe desprenderse del texto mismo de la norma (Donayre, 2014, p.192). Asimismo, la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado de crear, modificar o suprimir los tributos (Villegas, 2005, p.252).

Es por ello que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 74° de la Constitución Política de 1993, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los siguientes principios: 1) principio de reserva de la ley, 2) principio de igualdad, 3) principio de respeto de los derechos fundamentales de la persona, y 4) principio de no confiscatoriedad

Siguiendo la misma línea, el principio de capacidad contributiva es también conocido como de capacidad económica, y a criterio de Calvo (2012), este principio alude a la aptitud o posibilidad real de las personas de asumir la pretensión por parte de la Administración, de una específica prestación dineraria, encontrándose dicha aptitud vinculada a una obligación tributaria concreta, como por ejemplo, el impuesto sobre los bienes inmuebles. Asimismo, para el citado autor, se vulneraría este principio si se exigiera un impuesto por una situación o hecho que careciera de contenido patrimonial,

como por ejemplo, por el hecho de tener una determinada nacionalidad o ser residente de un determinado país. (p. 49).

De la guía de análisis jurisprudencial con respecto al principio de no confiscatoriedad en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0041-2004-AI/TC en su considerando cincuenta y seis “La confiscatoriedad puede evaluarse no Sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, cuando se produzca una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios, sin que en estos casos interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso perfectamente soportable por el contribuyente (...)”. Por ende, del objetivo analizado un impuesto se convierte en confiscatorio cuando vulnera otros principios tributarios, podría afirmarse que las resoluciones del Tribunal Fiscal que determinan que se debe pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular en el caso de vehículos hurtados o robados, vulneran también el principio de no confiscatoriedad.

En tal sentido, de los resultados obtenidos de la guía de entrevista con respecto al principio de igualdad, para Donayre y Vivanco (2018), se afecta el principio de igualdad, cuando se exige el pago del impuesto tanto a una persona que tiene en su poder el vehículo, como aquella que no lo tiene. Con ello, se está tratando igual a quienes están en situaciones diferentes, lo que implica la vulneración a este principio.

Para Cerna (2018), el principio de igualdad supone que a iguales supuestos de hecho se aplican iguales consecuencias jurídicas, por lo que considera válido preguntarse si cuando se produce el robo o hurto del vehículo ¿no es cierto que la víctima (contribuyente) ha perdido el derecho de propiedad sobre el mismo por un hecho ajeno a su voluntad?; por ello, considera que exigir el pago del impuesto supondría asumir que el supuesto de hecho que grava al contribuyente no se habría alterado, lo cual es negado por la realidad.

En cambio, para Hirache (2018), dado que el Tribunal Fiscal como tribunal administrativo no puede ejercer el control difuso, en virtud al principio de legalidad, debe aplicar la norma vigente, y no pronunciarse sobre una posible vulneración al principio de igualdad.



En concordancia con los entrevistados que consideran que la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del IPV respecto de los vehículos hurtados o robados no se encuentra conforme con los principios de igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, pues con dicha interpretación no se está tratando de manera desigual a quienes están en situaciones diferentes, gravándose con un impuesto de tipo real, a pesar de que el bien sobre el que recae el impuesto ya no está en poder del propietario por causas ajenas a su voluntad. Se considera que no se puede exigir el impuesto cuando la situación patrimonial del propietario del vehículo ha variado, al haber sido despojado injustamente del referido bien, siéndole imposible ejercer sobre el mismo los atributos del derecho de propiedad de uso y disfrute. En ese sentido, coincido plenamente con Cerna cuando afirma que para el Tribunal Fiscal pareciera que el supuesto de hecho que grava al contribuyente no se habría alterado, cuando la realidad es totalmente diferente.

Se discrepa con Hirache (2018), en el cual considera que cuando el Tribunal Fiscal interpreta una norma de acuerdo con los principios tributarios establecidos por la Constitución Política del Perú, está ejerciendo el control difuso, toda vez que no se trata de que el Tribunal Fiscal inaplique la Ley de Tributación Municipal para aplicar la Constitución, sino que a través de los distintos métodos de interpretación admitidos por el derecho, opte por aquella interpretación de la ley que mejor se adapte a los principios tributarios que regulan la potestad tributaria del Estado.

| <b>Objetivo Especifico 2</b>  |
|---|
| Determinar qué implicancias tiene la Interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados. |

| <b>Supuesto Especifico 2</b>   |
|--|
| La Interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, se encuentra arreglado a los principios tributarios de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad. |

De acuerdo a los antecedentes previos nacionales se describió que el SAT de Lima emitió la Circular N° 001-008-00000011 del 6 de enero de 2006, señalando en el numeral 7.1, que no podrá determinarse deuda por IPV, cuando se haya producido el hurto o robo del vehículo, por no encontrarse el bien en el ámbito patrimonial de su propietario.

A través de este método se busca descubrir el sentido y alcance de la norma, comparándola con otra norma que permita aclarar su significado (Donayre, 2014, p.195). Para la aplicación de este método, es necesario encontrar una norma con una razón de ser similar a la norma que estamos interpretando, para a partir de aquélla aclarar el significado de ésta.

Es por ello que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 74° de la Constitución Política de 1993, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los siguientes principios: 1) principio de reserva de la ley, 2) principio de igualdad, 3) principio de respeto de los derechos fundamentales de la persona, y 4) principio de no confiscatoriedad.

De la descripción de la guía de análisis jurisprudencial, tenemos que mediante Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02727-2002-AA/TC, en su considerando cuatro, señala que: “(...) el reparto de los tributos ha de realizarse de forma tal que se trate igual los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes”.

De la misma manera, para el principio de capacidad contributiva, la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4014-2005-AA/TC, en su considerando sétimo, indica que: “La capacidad contributiva es entendida como la aptitud de una persona para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, sustentado en base a determinados hechos reveladores de riqueza. Por su parte, el principio de igualdad tributaria, sea en el plano horizontal o vertical, va de la mano con la capacidad contributiva, determinando, por un lado, que a igual manifestación de riqueza se generalice la obligación de pago; y, por el otro, que dicha obligación sea proporcional a la capacidad contributiva del obligado”.

Por tales razones, de la descripción de resultados obtenidos por la guía de entrevista Por otro lado, Obregón (2018), opina que el criterio del SAT de Lima no afecta el principio de no confiscatoriedad, dado que libera del pago del impuesto a quienes han sufrido el robo de sus vehículos, lo cual coincide con la aplicación del principio de razonabilidad y de no arbitrariedad que debe ser respetado por las entidades estatales.

De igual manera, Cerna (2018), señala que se garantiza el principio de no confiscatoriedad, precisando que la confiscatoriedad puede evaluarse desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo; siendo cuantitativo cuando el tributo es oneroso para el contribuyente, y cualitativo, cuando se produce una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios, como por ejemplo, en este caso, el principio de igualdad.

Por el contrario, Hirache (2018), alega que en virtud del principio de legalidad, el SAT de Lima debe aplicar la norma que establece el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular, sin entrar a analizar si se afecta o no el principio de no confiscatoriedad, pues ello significaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicha norma.

De acuerdo con los entrevistados, se cree que la interpretación que hace el SAT de Lima respecto de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular en el caso de los vehículos hurtados o robados, garantiza los principios de igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad; en tanto otorga un tratamiento desigual a quienes están en situaciones desiguales, dejando de gravar con un impuesto de tipo real, al propietario de un bien que ya no lo tiene en su poder por una causa ajena a él, evidenciando que no habría una capacidad contributiva que merezca ser gravada con el impuesto. Además, con la posición del SAT de Lima se garantiza la aplicación del principio de razonabilidad y de no arbitrariedad que deben observar todas las entidades públicas. Lo antes señalado se justifica por el hecho de que no resulta razonable exigir el pago del impuesto a quien ha sido despojado injustamente del bien respecto del cual el legislador pensó e incorporó como una expresión de capacidad contributiva. Asimismo, resulta arbitrario, es decir, contrario a derecho, exigir el pago del aludido impuesto, toda vez que ello colisiona con el

principio de justicia, pues no es justo que tenga que pagar el impuesto cuando ha sufrido un perjuicio económico con el hurto o robo de su vehículo y cuando el Estado no lo Protegió de tales ilícitos penales.

Finalmente se refuta la opinión de Hirache (2018), cuando menciona que el SAT de Lima debe aplicar la norma que establece el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular, sin entrar a analizar si se afecta o no el principio de no confiscatoriedad, pues para ella, ello significaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicha norma; pues toda entidad pública debe interpretar las normas de acuerdo con la Constitución Política del Perú, y para el presente caso, conforme con los principios tributarios. Que se interprete una norma legal conforme al texto constitucional, no significa que se esté dejando de aplicar dicha norma legal para preferir la Constitución, sino, más bien de aplicarla pero interpretándola con arreglo a la Constitución.

## **V. CONCLUSIÓN**

1. La contienda en la interpretación del artículo 30° del TUO de la LTM, que regula el pago del IPV, respecto del caso de los vehículos hurtados o robados, genera incertidumbre jurídica en los propietarios de dichos vehículos, dada la posición discrepante entre el SAT de Lima, que establece que no será posible determinar el IPV cuando se ha producido el hurto o robo del vehículo, por desaparecer el bien de la esfera patrimonial de su propietario; y el Tribunal Fiscal, que considera que el propietario solo ha perdido la posesión del vehículo, pero no la propiedad del mismo.
2. La interpretación literal efectuada por el Tribunal Fiscal del artículo 30° del TUO de la LTM no se encuentra conforme con los principios de igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, por cuanto se afecta con el pago del impuesto tanto al propietario que tiene la posibilidad de usar y disfrutar del bien, como aquél que no tiene esa posibilidad por una causa ajena a su voluntad; gravando con el impuesto a quien no exterioriza capacidad contributiva, ya que tratándose el IPV de un impuesto de tipo real, la capacidad contributiva se centra en el valor del bien que el legislador ha considerado que merece ser gravada.
3. La interpretación realizada por el SAT de Lima del artículo 30° del TUO de la LTM se encuentra conforme con los principios de igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, pues se trata de una manera distinta al propietario que tiene la posibilidad de usar y disfrutar del bien, frente a aquél que no tiene esa posibilidad por una causa ajena a su voluntad; no gravando con el impuesto a quien no exterioriza capacidad contributiva, ya que tratándose el IPV de un impuesto de tipo real, la capacidad contributiva se centra en el valor del bien que el legislador ha considerado que merece ser gravada.

## **VI.RECOMENDACIONES**

1. Modificar el artículo 30° del TUO de la LTM, que regula el pago del IPV, respecto del caso de los vehículos hurtados o robados, a fin de resolver la incertidumbre jurídica en los propietarios de dichos vehículos, en los siguientes términos:

*“El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular.*

*No se encontrará gravada con el impuesto, la propiedad de los referidos vehículos, cuando éstos hayan sido hurtados o robados, a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hurto o robo del vehículo, y siempre que se hubiera presentado la denuncia policial correspondiente.*

*En caso el vehículo reingresara a la esfera patrimonial del propietario, éste se encontrará obligado al pago del impuesto a partir del 1 de enero del año siguiente de la fecha de reingreso, siempre que ello se produzca dentro del plazo de los tres (3) años a que se refiere el primer párrafo.*

2. El Tribunal Fiscal debería resolver las controversias tributarias utilizando todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho, conforme lo señala la Norma VIII del Título Preliminar del TUO del CT, entre ellos, el método de interpretación sistemático por comparación, utilizando para ello, los principios tributarios, y no limitarse al método de interpretación literal. No obstante, si bien la interpretación efectuada por el Tribunal Fiscal del artículo 30° del TUO de la LTM no se encuentra conforme con los principios de igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, dado que el referido órgano colegiado constituye la última instancia administrativa en materia tributaria y que dicha interpretación ha sido recogida en reiteradas resoluciones que podrían derivar en la emisión de una jurisprudencia de observancia obligatoria, resulta necesario que se modifique el referido artículo, en los términos señalados en la primera recomendación.
3. Si bien la interpretación realizada por el SAT de Lima del artículo 30° del TUO de la LTM se encuentra conforme con los principios de igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, dado que dicha entidad carece de competencia para condonar el pago del IPV, toda vez que en virtud del artículo 41° del TUO del CT, los Gobiernos Locales no pueden condonar las deudas tributarias por concepto de los impuestos que administren; resulta necesario que se modifique el artículo 30° del TUO de la LTM, en los términos señalados en la primera recomendación.



## REFERENCIAS:

### - BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

Alva M., M. (Mayo, 2003). *Hurto, Robo e Impuesto Vehicular*. Revista Análisis Tributario (184), 23-25.

Ataliba, G. (1987). *Hipótesis de Incidencia Tributaria*. Perú: Instituto Peruano de derecho Tributario.

Avendaño, J. y Avendaño, F. (2017). *Derechos Reales*. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

Bravo, J. (2013). *Derecho Tributario. Reflexiones*. Perú: Jurista Editores E.I.R.L.

Calvo O., R. (2012). *Curso de Derecho Financiero*. España: Aranzadi S.A.

Circular N° 001-008-00000011 del SAT de Lima. (Enero, 2006). *Impuesto al Patrimonio Vehicular*.

Código Penal. (2017). *Delitos contra el Patrimonio*. (12.<sup>a</sup> ed.). Lima: Jurista Editores E.I.R.L

Código Tributario. (2017). *Título Preliminar*. Lima: Jurista Editores E.I.R.L

Decreto Supremo. (N° 22-94-EF). *Norma referida al Impuesto al Patrimonio Vehicular*. Perú: Ministerio de Economía y Finanzas.

Directiva N° 001-006-00000024 del SAT de Lima. (Agosto, 2017). *Reglamento del Impuesto al Patrimonio Vehicular*.

Defensoría del Pueblo. (2005). *Impuesto al Patrimonio Vehicular*. Perú: Informe N° 98.

Donayre L., G. (Diciembre ,2014). *La Interpretación Jurídica: Propuestas Para su Aplicación en el Derecho Tributario*. Revista Derecho & Sociedad (43), 189-195.

Gonzales, T. (2013). *Delito de Robo Agravado*. Recuperado de <https://es.calameo.com/search#searchdelito%20de%20hurto%20y%20robo/boos>

Ley de Tributación Municipal. (Enero, 1994). *Impuesto al Patrimonio Vehicular. Artículo N°30* .Perú.

María R., E. (1994). *Derechos Reales y Propiedades*. (2.ª ed.). Perú: San Marcos.

Pérez R., F. (2015). *Derecho Financiero y Tributario*. (25.ª ed.). España: Aranzadi S.A.

Plazas V., M. (2005). *Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario*. (2ª ed.). Colombia: Temis S.A.

Real Decreto Legislativo. (Marzo, 2004). *Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica*. España: Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 2/2004

Ruíz P., F. (2008). *Impuesto al Patrimonio Vehicular*. Revista Ius Et Veritas.

Soler, O. (2008). *Derecho Tributario. Económico – Constitucional – Sustancial – Administrativo - Penal*. (3ª ed.). Buenos Aires. La Ley.

Tarsitano., A. (Diciembre ,2014). *El Principio de Capacidad Contributiva como Fundamento de la Constitución Financiera. Una Visión Doctrinaria y Jurisprudencial*. Revista Derecho & Sociedad (43), 119-128.

Tribunal Constitucional. (Mayo, 2004). *Sentencia Recaída N° T-489/04*. Colombia: Expediente N° T-845873.

Tribunal Constitucional. (2002, 2005, 2010 y 2011) *Sentencias*. Perú: Expedientes N°4014-2005-AA/TC, 03769-2010-PA/TC, 2727-2002-AA/TC, 03688-2011-PA/TC y 2727-2002-AA/TC.

Tribunal Fiscal. (2002, 2008, 2009, 2011 y 20012). *Apelación contra Impuesto al Patrimonio Vehicular*. Perú: Resoluciones N° 03152-3-2002N°, 13202-4-2008, 06356-7-2009, 05695-7-2011 y 10722-8-2012.

Villegas H., B. (2005). *Curso De Finanzas, Derecho Financiero Y Tributario*. (9ª ed.). Buenos Aires: Astrea.

Vizcardo, H. (2005) *Política Criminal actual y Delito de hurto*. Revista Jurídica Docentia et Investigatio (vol.7). 1.

## - BIBLIOGRAFÍA METODOLÓGICA

Bernal, C., (2010) *Metodología de la investigación*. Universidad de la Sabana, Colombia. Pearson. Recuperado de:  
[http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com\\_docman&task=doc..1](http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc..1)

Behar, D., (2008) *Metodología de la investigación*. Editorial Shalom. Recuperado de:  
<http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20este.pdf>

- Bizquera, R., (2009) *Metodología de la investigación educativa*. Editorial La Muralla. Madrid. Recuperado de: [https://books.google.com.pe/books?id=VSb4\\_cVukkcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.pe/books?id=VSb4_cVukkcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false)
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., (2014). *Metodología de la Investigación*. Sexta edición. Mc Graw Hill Education. México. Revisado en: <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20-sampieri-%206ta%20EDICION.pdf>
- Narváez, G., (2014). *Recolección de Datos Cualitativos (Diapositivas)*. Recuperado de: <https://es.slideshare.net/gambitguille/recoleccion-de-datos-en-la-investigacion-cualitativa>
- Mejía, J. (2011). *Problemas centrales del análisis de datos cualitativos*. Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación - ReLMIS. N°1. Año 1. Abril - Sept. de 2011. Argentina. Estudios Sociológicos
- Valderrama, S. (s.f.) *Pasos para elaborar proyectos y tesis de investigación científica*. (1ra Ed.). Lima: Editorial San Marcos.
- Olivero, N. (2008) *Técnicas para el recojo de la información*. Seminario de tesis. Recuperado de: <http://nopcrea.blogspot.pe/2008/11/tecnicas-para-el-recojo-de-la.html>.
- Pérez, A. (2006). *Teoría sociocultural y la psicología social actual*. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.
- Ruiz, R. (2007) *Método Científico y sus etapas*. México. Recuperado de: <https://es.slideshare.net/recursostics/el-mtodo-cientfico-y-sus-etapas-ramn-ruiz-mxico-2007-9039882>.

## **ANEXOS**

## Anexo 1:

### - Matriz

| <b>“Contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2008-2015.”</b> |  |
|--|--|
| <b>Problema General</b>  | ¿Qué implicancias tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?  |
| <b>Problemas Específicos</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ¿Qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?</li> <li>▪ ¿Qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?</li> </ul>                     |
| <b>Objetivo General</b>  | Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.  |
| <b>Objetivos Específicos</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.</li> <li>▪ Determinar qué implicancias tiene la Interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.</li> </ul> |
| <b>Supuesto General</b>  | La contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, genera incertidumbre jurídica en los contribuyentes y afectación económicos de los mismos.   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Supuesto Específicos</b>                       | <p>Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, vulnera los principios de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, se encuentra arreglado a los principios tributarios de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad.</li> </ul> |
| <b>Unidades Temáticas</b>                         | Son los temas y subtemas más importantes, relevantes y sobresalientes en el presente trabajo debido a que en todos ellos se fundamenta la presente investigación.  |
| <b>Categoría 1</b>                                | <b>Definición Conceptual:</b> Está referida a las distintas interpretaciones efectuadas por la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal del artículo 30° del TUO de la LTM, respecto a si los propietarios de los vehículos hurtados o robados deben seguir pagando el IPV.  |
| <b>Contienda en la Interpretación de la norma</b> | <p><b>Subcategorías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tribunal Fiscal</li> <li>- SAT de Lima</li> </ul>   |
| <b>Categoría 2</b>                                | <b>Definición Conceptual:</b> Tributo que grava la propiedad de los vehículos.   |
| <b>Impuesto al Patrimonio Vehicular</b>           | <p><b>Subcategorías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad Contributiva</li> <li>- Principios que regulan la potestad tributaria.</li> </ul>   |
| <b>Categoría 3</b>                                | <b>Definición Conceptual:</b> el Código Penal Tipifica el hurto y el robo de vehículos, tanto total o parcialmente, como modalidades agravadas, siendo una respuesta del legislador ante el incremento de dichos delitos en nuestra sociedad.  |
| <b>Vehículos hurtados o robados</b>               | <p><b>Subcategorías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delito de Hurto</li> <li>- Delito de robo</li> </ul>  |
| <b>Diseño del Estudio</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teoría fundamentada</li> </ul>  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              |   |
| <b>Tipo de Investigación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación básica</li> </ul>  |
| <b>Instrumento</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrevista</li> <li>• Análisis documental</li> <li>• Análisis Jurisprudencial</li> </ul> |



## Anexo 2: Validación de Instrumentos.



UNIVERSIDAD • CESAR VALLEJO

### VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

#### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Pedro Pablo Salazar Llantos  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Evaluación  
 1.4. Autor(A) de instrumento: Adriano Cristian Erazo Roldán

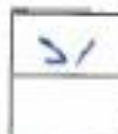
#### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | MINIMAMENTE ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                    | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Está formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Está adherido a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 5. SUFICIENCIA     | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Está adecuado para valorar las categorías.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y dicho aplicados para lograr verificar los supuestos.                      |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |

#### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

#### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:



95%

Lima, 02 de mayo del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 8980331 Tel. 983228652

PEDRO PABLO SALAZAR LLANTOS  
 ABOGADO  
 (Caj. 17961)

## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Pedro Pablo Santisteban Llano  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental  
 1.4. Autor(A) de instrumento: Alcides Viquez, Giselle Riano

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | MINIMAMENTE ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                    | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Está formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Está adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 5. SUFICIENCIA     | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Está adecuado para valorar las categorías.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.                     |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

31

95%

Lima, 07 de mayo del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 0980331 Tel. 983278657

Pedro Pablo Santisteban Llano  
 ABOGADO  
 CAL 17051  
 DOCTOR EN DERECHO



## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

## I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Pedro Pablo Salazar Llano  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuadro de Evaluación  
 1.4. Autor(A) del instrumento: Alicia Casper Buzaba Ruiz

## II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    | PARCIALMENTE ACEPTABLE |    |    |    |    | ACEPTABLE |    |     |   |  |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|-----------|----|-----|---|--|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65                     | 70 | 75 | 80 | 85 | 90        | 95 | 100 |   |  |
| 1. CLARIDAD        | Está formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |
| 2. OBJETIVIDAD     | Está adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |
| 3. ACTUALIDAD      | Está adecuado a las objetivos y las necesidades reales de la investigación.                                    |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |
| 5. SUFFICIENCIA    | Tiene en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.   |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |
| 6. INTEGRALIDAD    | Está adecuado para cubrir las categorías.  |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |
| 7. COHERENCIA      | Se respalda en fundamentos teóricos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |
| 8. CORRESPONDENCIA | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos y/o hipótesis.                                     |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.                 |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y se adecúa al Método Científico. |             |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |           |    |     | ✓ |  |

## III. OPCIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

## IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:



95%

Lima, 07 de mayo del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI N° 980508 Tel: 943278652

PEDRO PABLO SALAZAR LLANO  
 ABOGADO  
 CUI 17981  
 DOCTOR EN DERECHO

## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Pedro Pablo Santisteban Montop  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Sociodudencial  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Arleaga, Desgraz, Pucella, Rosio

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| ASPECTOS DE VALORACIÓN |  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    |     |
|------------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
| CRITERIOS              | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | MINIMAMENTE ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|                        |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                    | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD            | Esta formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 2. OBJETIVIDAD         | Esta adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 3. ACTUALIDAD          | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN        | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 5. SUFFICIENCIA        | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 6. INTERCONEXIONADO    | Esta adecuado para valorar las categorías.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 7. CONSISTENCIA        | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 8. COHERENCIA          | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 9. METODOLOGÍA         | La estrategia requiere una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.                     |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 10. PERTINENCIA        | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

P

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

SI

95 %

Lima, 07 de mayo, del 2018

  
 FIRMADO DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI N°

09803311

Tel:

999025433





## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Salas Quiroz Mariano Roberto  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV DTP  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Alejo Vázquez Buzalla Botto

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | MINIMAMENTE ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                    | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Esta formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Esta adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |
| 5. SUFICIENCIA     | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las categorías.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.                     |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | x  |     |

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

51

95 %

Lima, 07 de mayo del 2018

[Firma]  
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 06174923 Telf. 953526951

## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: José Quispe Mariano Rojas  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV STP  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Ardeaga Almagro Gisella Rosio

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    | MINIMAMENTE ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65                    | 70 | 75 | 80        | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Esta formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Esta adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |
| 5. SUFICIENCIA     | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales   |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las categorías.   |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.                     |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    |    | x  |     |

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

51

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 07 de mayo del 2018

S/D  
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 06989923 Telf.: 93526951

### VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

#### I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Salas Rauspa, Mariano Rodolfo  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV DSD  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Sociodemográfico  
 1.4. Año(s) de instrumento: Antes y Después Huacocha, Rosio

#### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | INDICADOR<br>ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|------------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                     | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Está formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Está adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |
| 5. SUFFICIENCIA    | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.  |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Está adecuado para valorar las categorías.   |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, argumentos jurídicos.  |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.                     |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                        |    |    |           |    | x  |     |

#### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

SI

#### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

 Lima, 27 de mayo del 2018

FIRMA DEL EXEJUTO INFORMANTE

 DNI No. 6489927 Tel: 953326931



## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Cesar Augusto Israel Dávila  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Arango, M. S. Guzmán, D. M. Dávila, P. P. D.

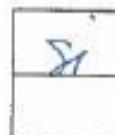
### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    | MINIMAMENTE ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65                    | 70 | 75 | 80        | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Esta formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Esta adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |
| 5. SUFICIENCIA     | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales   |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las categorías.   |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos  |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.                     |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | X  |    |     |

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :



90 - %

Lima, 07 de mayo del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

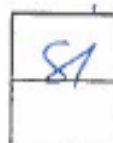
1.1. Apellidos y Nombres: Cesar Augusto Israel Ballena  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Alejo Vázquez Guisola Rosin

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | MINIMAMENTE ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                    | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Está formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Está adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |
| 5. SUFICIENCIA     | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Está adecuado para valorar las categorías.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.                     |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           | X  |    |     |

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación



### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, 07 de mayo del 2018

  
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 10746241 Telf: \_\_\_\_\_

## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: ESAI Vargas Huamán  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Asesor de tesis  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Sociodemográfico  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Adriana Vargas S. y Cecilia Rosio

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS       | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | SEMIMAMENTE ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|-----------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
|                 |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                    | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD     | Está formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 2. OBJETIVIDAD  | Está adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 3. ACTUALIDAD   | Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 5. SUFFICIENCIA | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 6. PERTINENCIA  | Está adecuado para valorar las categorías.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 7. COHERENCIA   | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 8. COHERENCIA   | Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 9. METODOLOGÍA  | La estrategia responde una metodología y diseño apropiados para lograr verificar los supuestos.                    |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |
| 10. PERTINENCIA | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | ✓  |     |

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

|    |
|----|
| SI |
|    |

95 %

Lima, 07 de mayo del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI N° 78063977 Tel 051 984 54 13

### Anexo 3:

#### - Guías de Instrumentos de Recolección de Datos

##### 3.1. Guía de Entrevista

#### FICHA DE ENTREVISTA

**Título: “Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2008-2015.”**

**Entrevistado:**

.....  
**Cargo / profesión / grado académico:**

.....  
.....

**Institución:**.....  
.....

.....  
**Lugar:**.....

.....  
**Fecha:**.....

---

**Objetivo General:** Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

1. ¿Qué implicancia jurídica considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ¿Qué implicancia económica considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....

**Objetivo Específico 1:**

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Objetivo Específico 2:**

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## FICHA DE ENTREVISTA

**Título:** "Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2000-2015."

**Entrevistado:**

..... ANSEL AVEUSTO VIVANCO ORTIZ .....

**Cargo** ..... **profesión** ..... **grado** ..... **académico:**

..... PROCURADOR ADJUNTO .....

..... Abogado .....

**Institución:** ..... MEF - Procuraduría .....

.....  
**Lugar:** ..... Procuraduría .....

.....  
**Fecha:** ..... 07 - 05 - 2018 .....

---

**Objetivo General:** Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

1. ¿Qué implicancias jurídicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

..... el propietario se encuentra en una situación .....  
..... incierta, por lo que además el fisco y por .....  
..... otra me. Esta incertidumbre genera .....  
..... falta de recomendación y aborrecimiento al .....  
..... dueño, así como beneficio indirecto .....  
..... de quien ha hurtado. .....

2. ¿Qué implicancias económicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

*Dificultad en la recaudación,  
porque el Estado no va poder  
individualizar al deudor tributario.*

3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

*Con una norma aclaratoria q  
regule el problema*

**Objetivo Específico 1:**

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

*Afecta al principio de igualdad.*

5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

*Afecta el principio de no confiscatoriedad, porque se estaría resumiendo a quien no goza de la posesión del bien.*

6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

Es relativo, es eminentemente subjetiva, depende de la utilidad del vehículo.

### Objetivo Específico 2:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

Si garantiza, porque garantiza el deber de pago únicamente a quienes poseen el bien.

8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular

de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

Garantiza, porque no afecta al patrimonio del contribuyente, porque ya no tiene en su poder.

9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

Si garantiza, porque el vehículo es cuando no estuviere.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ANGEL AUGUSTO ORLANDO ORTIZ

PROFESORADO DE DERECHO

ABOGADO REG. Nº 15301

DNI 20147777

## FICHA DE ENTREVISTA

**Título:** "Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2008-2015."

**Entrevistado:**

Luis Gabriel Donayre Lobo

**Cargo / profesión / grado académico:**

Asesor Abogado

Docente Universitario

**Institución:** Defensoría del Contribuyente y  
Plano Aduanero del Ministerio de Economía  
y Finanzas

**Lugar:** Lima

**Fecha:** 07/05/2018

**Objetivo General:** Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

1. ¿Qué implicancias jurídicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Considero que genera inseguridad jurídica para los contribuyentes y que no tienen las sanciones sobre si deben o no pagar el Impuesto en caso que los vehículos son robados o hurtados.

2. ¿Qué implicancias económicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Para los contribuyentes tener q' pagar el impuesto a pesar q' ya no tienen el vehículo en su poder. Para la Administración Tributaria, que sea a recordar a pesar que ya el contribuyente no tiene el vehículo en su poder. Existe por tanto una afectación económica para el contribuyente y la Administración recuerda el caso no debería hacerlo.

3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Debería modificarse la ley de tributación Municipal en el sentido de incluir la exención o no para el Impuesto si el vehículo es robado o hurtado. Considerando que la policía del Tribunal Fiscal no ha creptalucos y que este colectivo es la p. enana del SAT.

### Objetivo Específico 1:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

Afecta el Principio de Igualdad; pues  
hace que pague el impuesto una persona  
que no tiene en su poder un vehículo,  
igual que aquella que lo tiene. Por  
eso es que se afecta este principio; no  
trata desigualmente a los desiguales; sino  
más bien, trata igual a quienes están  
en situaciones diferentes.

5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

Afecta, pues se gravará con el impuesto  
a pesar que no hay patrimonio en poder  
del contribuyente; volviéndose confiscatorio  
por el impuesto gravar al contribuyente  
sin que exista riqueza que de su ser  
proveniente; ya que no puede ejercer  
el derecho de propiedad en toda su extensión.



6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

Afecta, por a mi criterio no hay capacidad contributiva que deba pagarse, por ya el contribuyente no es tal, dado que no podría comportarse como propietario si no tener en su poder el bien y por ello no poder ejercer el derecho de propiedad en toda su extensión.

#### Objetivo Específico 2:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

Garantiza, por no debe tributar igual quien está en una situación diferente, quien no tiene en su poder el bien no debe tributar como aquel que sí tiene el bien en su poder.

8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular

de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

Garantiza; pues no se aplica con el impuesto a quien no tiene la posibilidad de considerarse como propietario del bien. De este manera el impuesto no afecta la propiedad del contribuyente.

9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

Garantiza, ya que considero que una persona que no tiene es de poder un bien, por haber sido sustraído por el robo, no tiene capacidad contributiva que deba tributar. No hay riqueza que alguien detente.

Juanito

Cel 30874

Tel 997915862

DN 05375090

## FICHA DE ENTREVISTA

Título: "Contienda en la interpretación de la norma del pago del impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2008-2015."

Entrevistado:

Luis Alberto Durán Rojo

Cargo / profesión / grado académico:

Doctor en Derecho Tributario - Universidad Católica la Madre y la Maestra - España  
Maestría Derecho Constitucional, Postgrado en Derecho Tributario Europeo

Institución: Director de la Revista Andina Tributaria

Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Lugar: Lima

Fecha: 28/06/18

Objetivo General: Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

1. ¿Qué implicancia jurídica considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Se genera dos Problemas. Primero: decidir según las normas del derecho común es decir, el derecho civil hasta cuando uno es propietario en el supuesto que el bien ha sido hurtado o robado. En tercer lugar, deberia generarse el tributo (el hecho material de imposición se ha producido). Segundo: como que va con el valor Constitucional, si el impuesto grava la propiedad del vehículo, no podría gravarse cuando el bien ha sido hurtado o robado, pues más allá de la declaración de pérdida de propiedad bajo las reglas del derecho civil, habría que

hacer un análisis constitucional si en tal caso, Supuestos el tributo se vuelve confiscatorio, y ello debería estar a la luz de los parámetros que establece la norma Constitucional.

2. ¿Qué implicancia económica considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

En términos Constitucionales y Jurídicos no evalúa la afectación económica sino la violación de un derecho Constitucional.

3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Modificar la norma para dejarlo claramente establecido. Debería establecerse una regla por la cual se establece una declaración de que el vehículo ha sido hurtado o robado, con una denuncia policial o algún otro elemento de juicio que evite un fraude a la ley. Es decir que la gente mienta para no pagar el impuesto.

B

**Objetivo Especifico 1:**

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

Podría aceptarlo en la medida que se salaró  
gravando donde no hay propiedad.

5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

de igual modo, se aceptaría en la medida que  
se grava el impuesto donde ya no hay  
propiedad.



6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

De la misma manera, se afirma que se podría haber generado impuesto donde ya no existe propiedad.

#### Objetivo Específico 2:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

El SAT hace lo correcto, pero que va en la línea del criterio de hacer estrictamente las cosas de la Constitución.

8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular

de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

Del mismo modo, creo que va en la línea del criterio de hacer permanentemente los valores de norma constitucional.

9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

Finalmente, el SAT hace lo correcto, va en la línea de hacer permanentemente los valores de la Constitución.



LUIS DURÁN

## FICHA DE ENTREVISTA

**Título:** "Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2008-2015."

**Entrevistado:**

Angela Armandeги Burgos

**Cargo / profesión / grado académico:**

Abogada

**Institución:** Ministerio de Economía y Finanzas

**Lugar:**

**Fecha:**

**Objetivo General:** Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

1. ¿Qué implicancias jurídicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Considero que la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular, genera incertidumbre en los propietarios de los vehículos cuya propiedad se encuentra gravada, debido a que dicha norma no establece precisiones en cuanto aquellos casos en que los vehículos fueron materia de hurto o robo.



2. ¿Qué implicancias económicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Considero que la interpretación efectuada del artículo 30° por parte del Tribunal Fiscal solo es realizada tomando en cuenta el mencionado artículo, mas no toma en consideración la afectación al patrimonio producida como consecuencia de un hurto o robo.

En ese sentido, la principal implicancia económica de esta interpretación es que se grave con Impuesto vehicular a aquellas personas que han sido despojadas de dicho patrimonio lo cual no es la finalidad de la norma.

3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Tomando en cuenta que de acuerdo con el artículo 74° de la Constitución, la aplicación de tributos debe realizarse mediante ley o norma con rango similar, a fin de no continuar exigiendo el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular a aquellos propietarios que querran despojados de sus vehículos mediante hurto o robo, se debería establecer una precisión en el art. 30° de la Ley de Tributación Municipal en el que se señale que no se encuentra gravado con el Impuesto en comento la propiedad de vehículos hurtados o robados.

### Objetivo Específico 1:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

\* Considero que la interpretación sí afecta el principio de igualdad, porque se exige el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular a aquellos propietarios que ya se encuentran en posesión de sus vehículos, a comparación de otros propietarios que si se encuentran gozando de su propiedad al no haber sido víctimas de hurto o robo.

5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

\* No considero que afecte el principio de no confiscatoriedad, dado que la exigencia del pago de dicho impuesto se encuentra en lo establecido en la norma (art. 30° LTM). Además, se debe tomar en cuenta que la afectación del principio de no confiscatoriedad debe ser evaluado en cada caso, dado que la aplicación de determinado impuesto puede ser confiscatorio para algunos contribuyentes por sus situaciones particulares, y para otros no necesariamente derivará en confiscatorio.

6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

.....  
\* Considero que la interpretación del TF no afecta el principio de capacidad contributiva, dado que si bien el propietario del vehículo ha sido privado de su uso, ello no significa que al momento de haber adquirido el bien se haya encontrado en la posibilidad de asumir el impuesto al Patrimonio Vehicular.  
.....

#### Objetivo Específico 2:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

.....  
En este caso considero que garantiza el principio de igualdad al no exigir el pago a aquellos propietarios de vehículos robados o hurtados.  
.....  
.....  
.....  
.....


8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular

de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

\* Considero que no afecta el principio de no confiscatoriedad, dado que el propietario del vehículo hurtado o robado no tendrá que efectuar pago por el Impuesto al Patrimonio Vehicular.

9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

\* Considero que respalda el principio de capacidad contributiva dado que exime del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular a aquellos contribuyentes que han sido víctimas de robo o hurto.

  
Angela Gamino Armas  
Reg. CAL N° 61361

## FICHA DE ENTREVISTA

Título: "Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2008-2015."

Entrevistado:

YOLANDA HIRACHE ROSAS

Cargo / profesión / grado académico:

ABOGADA

Institución: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lugar: LIMA

Fecha: 22-5-2018

Objetivo General: Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

1. ¿Qué implicancias jurídicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

- GENERA UNA INCERTIDUMBRE JURIDICA PARA EL CONTRIBUYENTE, AL EXISTIR DIFERENTE INTERPRETACIÓN de la Administración Tributaria respecto al Pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular en caso de vehículos robados o hurtados, al no estar debidamente normado este supuesto de hecho.
- Esta diferente interpretación también genera que se vulnere principios constitucionales de los contribuyentes.

2. ¿Qué implicancias económicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Si existe afectación económica para el contribuyente en estos casos, dado que bienes que realizan el pago del impuesto respecto de un bien que ya no está en la esfera de su propiedad por haber sido robado o hurtado.

3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Considero que debe modificarse el art. 962 del Código Civil, sobre Causas de extinción de la propiedad, en el inciso 2º, agregándose el supuesto de pérdida total del bien por robo o hurto.

#### Objetivo Específico 1:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

El Tribunal Fiscal como Tribunal Administrativo no puede ejercer control de fondo Administrativo según la STC N° 04243-2012-PA del 18.03.2014, por lo que aplica la norma vigente (principio de legalidad), no puede analizar la constitucionalidad de la norma, en este caso, el principio de igualdad.

5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

Conforme se ha dicho el Tribunal Fiscal según la STC N° 04243-2012-PA del 18.03.2014, carece de facultades para ejercer control de fondo Administrativo, ya que dicha facultad sólo está reservada para el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, esto es que pueden ejercer el control de fondo de la constitucionalidad de las normas. En tal sentido, si la norma del Impuesto al Patrimonio Vehicular afecta el principio de no confiscatoriedad, ello implica a' el Tribunal Fiscal ejerce control de fondo, lo que está prohibido según la citada Sentencia del TC.

6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

Al igual que lo expuesto en el punto anterior, el Tribunal Fiscal no puede ejercer control difuso Administrativo, por lo q' no puede analizar si el Impuesto al Patrimonio Vehicular afecta el principio de capacidad contributiva, por lo que significaría analizar la constitucionalidad o no de la norma, lo que le está prohibido por la STC N° 04293-2012-AA.

#### Objetivo Específico 2:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

El SAT respecto al Impuesto al Patrimonio Vehicular debe aplicar dicha normativa, en virtud del principio de legalidad, contenida en el Código Tributario.

8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular



de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

El SAT debe aplicar la norma en virtud del principio de legalidad, por lo que debe aplicar el Impuesto al Patrimonio Vehicular sin entrar a analizar la constitucionalidad o no de dicha norma, y si se afecta o no el principio de no confiscatoriedad.

9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

El SAT debe aplicar la norma en virtud del principio de legalidad contenido en el Código Tributario, SIN entrar a analizar la constitucionalidad o no de dicha norma y si afecta o no el principio de capacidad contributiva.

  
Celular 955551157

## FICHA DE ENTREVISTA

Título: "Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2008-2015."

Entrevistado:

MANUEL AUGUSTO OSOREÓN OSORIO

Cargo / profesión / grado académico:

ABOGADO CIVIL

Institución: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lugar: LIMA

Fecha: 12 / 06 / 2018

Objetivo General: Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

1. ¿Qué implicancias jurídicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

básicamente no permite una solución uniforme a los casos que puedan presentarse, lo que conlleva a generar incertidumbre jurídica.

2. ¿Qué implicancias económicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Considero que la contienda, propiamente, no tiene implicancias económicas para el administrado o la administración, pues la implicancia económica se produce una vez resuelta la controversia.

En todo caso, si existe inseguridad para ambos partes que, finalmente, genera gastos a uno y otro sujeto.

3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

En armonía con el derecho de propiedad (entendase, sus tributos) debería haber una modificación normativa que establezca una exoneración al pago del impuesto en el caso de vehículos hurtados o robados.

### Objetivo Específico 1:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

Creo que si hay una afectación al principio de igualdad, pues no podía considerarse equitativo aplicar el impuesto a quien no tiene el uso del vehículo frente a aquel que si lo tiene. En tal sentido, la interpretación que efectúa el Tribunal Fiscal si afecta al principio de igualdad.

5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

Partiendo de que la aplicación del impuesto, en el caso de vehículo robado, vulnera el principio de igualdad, entonces puede concluirse que si existe una afectación del principio de no confiscatoriedad, de manera que la interpretación del Tribunal Fiscal afecta dicho principio.

6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

Considero que si hay una afectación al principio de capacidad contributiva en el sentido que, habiendo sido sustraído de la esfera patrimonial del contribuyente (por el robo del vehículo) evidentemente no existirá riqueza respecto de la cual debe tributar.

#### Objetivo Específico 2:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

El contenido del SAT es acorde con el respeto al principio de igualdad; no obstante, al tratarse de una regulación normativa de carácter tributario que exonerar del pago del impuesto debería ser regulado en una ley.

8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular

de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

El criterio del SAT no afecta el principio de no confiscatoriedad, dado que la Sra. del pago del impuesto a quienes se ven afectados en el robo de su vehículo, lo cual además se condice con la aplicación del principio de razonabilidad y de no arbitrariedad que debe ser respetado por las entidades estatales.

9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

En tanto el vehículo no se encuentra dentro de la esfera de propiedad del Administrado, no resulta razonable exigir el pago del impuesto, pues no existe la riqueza que sustenta la aplicación del impuesto de manera que la interpretación que efectúa el SAT estimo correcta.

  
DNI 06086192  
REG. CAL 27368



## FICHA DE ENTREVISTA

Título: "Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2008-2015."

Entrevistado:

Oscar Gilmer Palacios

Cargo

/ profesión

/ grado

académico:

Abogado

Institución:

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -  
Defensoría de Contribuyente y Usuario Ahorrador

.....

Lugar:

Lima

.....  
Fecha:

15/06/18

.....

**Objetivo General:** Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

1. ¿Qué implicancias jurídicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Existe una vulneración al principio de capacidad contributiva, más aun si el hecho es de robo de vehículos destinados a negocio personal que genera ingresos al propietario. Al estar fuera de su esfera patrimonial el propietario no puede ser considerado como propietario, generando tal vez que el tributo se vuelva impositivo.

2. ¿Qué implicancias económicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Debe formularse como consecuencia al propietario el sufragar el costo del patrimonio sobre todo si el vehículo le genera ingresos.

3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

Se debe plantear una medida precautoria como consecuencia de que se evita que la pérdida de bienes o robo del pago del impuesto se suspenda a partir del patrimonio anual. Si el vehículo es recuperado por el propietario, este deberá informar a la administración para cancelar la suspensión y continuar con el pago del impuesto.



### Objetivo Específico 1:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

Es deber de todo ciudadano a contribuir al go to  
público, sin embargo no todos deben estar  
obligados de igual manera ya que personalmente  
se debe tomar en cuenta la situación económica  
de cada persona. En este contexto, al vehículo al no  
formar parte de la ~~opora~~ patrimonio del propietario  
por un incidente que no genera un perjuicio económico,  
no debería estar obligado a pagar el I.P.V. al no estar  
en las mismas condiciones que los demás.

5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

Afecta el principio de no confiscatoriedad de  
al contribuyente lo afecta económicamente.

6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

*Sí, por que está relacionado con el principio de igualdad*

#### Objetivo Específico 2:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

*Garante el principio de igualdad, pues aún si los vehículos robados generan un beneficio al contribuyente*

8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular

de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

Sí garantiza el referido principio, ya que el no pago del I.V.T. no está en perjuicio de los contribuyentes.

9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

Garantiza dicho principio, ya que tanto la ley como la interpretación del SAT no afectan el patrimonio de los contribuyentes.

  
CSC 9354  
ENT 4066 7757

## FICHA DE ENTREVISTA

Título: "Contienda en la interpretación de la norma del pago del impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados, Lima Metropolitana, periodo 2008-2015."

Entrevistado:

VLADIMIR ALFREDO CERNA BARRETO

Cargo / profesión / grado académico:

ESPECIALISTA EN ABOGADO MAESTRISTA DERECHO PROCESAL  
TRIBUTOS INTERIOS CONTADOR MAESTRISTA RUTINA FISCAL Y G.T.

Institución: DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERO  
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lugar: CERCADO DE LIMA

Fecha: 18/06/2018

Objetivo General: Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

1. ¿Qué implicancias jurídicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

- ✓ AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA, en cuanto a la afectación a la predictibilidad y certeza que tienen que tener las decisiones de los órganos administrativos, lo cual implica la certeza de certeza o seguridad de certeza que deben tener en la interpretación y aplicación del derecho.
- ✓ AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, por la aplicación de la ley, que impone una obligación a todos los órganos públicos (incluyendo los órganos administrativos) por lo que no se puede aplicar la ley de una manera diferente a personas que se encuentren en casos o situaciones similares.



✓ DUALIDAD DE CERRADOS, que significa que órganos administrativos de la misma jerarquía, como Municipalidades Provinciales, ante una misma norma varían su sentido de aplicación o interpretación.

2. ¿Qué implicancias económicas considera usted que genera la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

✓ INTERNALIZAR UNA SITUACIÓN MAS GRAVE POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE, probada la pérdida de bien o pérdida de persona patrimonial, se condena al contribuyente a soportar una situación más grave por no haber su bien o bien, plus que deberá pagar su tributo respecto de su, dignos y disposición del mismo que no puede cumplir.

✓ VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA Y NO CONFISCATORIA en tanto la persona no tiene o reduce la misma aptitud económica que antes del hecho generador del impuesto (robo o hurto), por lo que adquiere con la obligación al pago del tributo el estado se estaría apropiando indebidamente de parte de la propiedad del contribuyente (dinero), cuando lo mismo debería resolverse esta interpretación y establecer un límite material.

3. ¿Cómo considera que debería resolverse la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados?

✓ CLARIDAD NORMATIVA. La legislación cuando no remite todo lo siguiente de la realidad permite lo que los jueces como interpretación por otro lado el verdaderamente significado o sentido de una norma; así, una forma de resolver los conflictos por disímiles para el receptor el impuesto de hecho (hecho imponible) en la norma y darle consecuencia jurídica; siendo que en el caso que nos compete la pregunta estaría encaminada a establecer los supuestos de exención del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular.

#### Objetivo Específico 1:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

4. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

AFECTA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. El principio en cuestión supone que ha igualar supuestos de hecho, y aplicar iguales consecuencias jurídicas, ante un caso que preguntamos si cuando se produce el hurto o el robo de un vehículo es cierto que la víctima (contribuyente) ha perdido el derecho de propiedad sobre el mismo por un hecho ajeno a su voluntad, según aplicables el impuesto supondría afirmar que el supuesto de hecho que genera el deber tributario de su habería ocurrido, lo cual es un hecho por la realidad.

5. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

AFECTA EL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD. La imposición no debe producir consecuencias intolerables o imprevisibles, tampoco debe promover hechos que menoscaben su propia finalidad, y es que si señalamos que el robo de un vehículo no supone una alteración al derecho de propiedad del contribuyente e insistimos en el deber del tributo, debemos admitir que ello puede llevar frente a las obligaciones tributarias ante el fisco el contribuyente a desprenderse de todo parte de su patrimonio, pero cumplir con la obligación tributaria que se ha visto afectada por una mala realidad económica que a las resoluciones del Tribunal Fiscal parece no importar.



6. ¿Considera usted que la interpretación del Tribunal Fiscal con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

AFECTA EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. Resumido que la aptitud económica que tiene la persona para asumir cargas tributarias depende en cuanto al impuesto que dicho sujeto afecta, debe proporcionalizarse proporcionalmente al robo del vehículo no hubiera la capacidad económica del contribuyente, y podemos pensar que si existe una aptitud a la exteriorización de riqueza, tanto real o potencial, que los tributos de imposición, pues el contribuyente ya no cuenta con el bien que evaluado ha su capacidad contributiva.

#### Objetivo Específico 2:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

7. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de igualdad?

Garantiza el Principio de Igualdad. Porque según la Directiva del SAT, ya no se cuenta en la esfera patrimonial del contribuyente, el cual implica que si cobra por una diferencia en la capacidad contributiva (pérdida del bien) pues esto implica que no se puede recibir un trato administrativo ante el mismo suceso de hecho.

8. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular

de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de no confiscatoriedad?

Se garantiza el Principio de no Confiscatoriedad, considerando que la Confiscatoriedad puede evaluarse desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo: siendo cuantitativo cuando el tributo es oneroso para el contribuyente, y cualitativo, cuando se produce una afectación ilegítima de la propiedad por violación de otros principios, como por ejemplo en este caso, el Principio de Igualdad.

9. ¿Considera usted que la interpretación del SAT de Lima Metropolitana con respecto a la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los vehículos hurtados o robados, garantiza o afecta el principio de capacidad contributiva?

garantiza el Principio de capacidad contributiva, pues advierte la norma que el sujeto no se encuentra en la aptitud económica para asumir la carga tributaria al haber sido despojada de un bien, por esta situación identifica claramente una nueva realidad para ser exonerado del impuesto, del pago del impuesto que no tendrá capacidad contributiva.

  
Vladimiro Alvarado Cerna Cornejo.  
DNI 40668750.



## Guía de Análisis Documental



### Objetivo General:

Analizar las implicancias que tiene la contienda en la interpretación de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

### Ley de Tributación Municipal

|  |
|--|
| Número de la norma                                     |
| Denominación de la norma: Ley de Tributación Municipal |
| Publicado en el Diario el Peruano                      |
| Fecha de emisión 01 de enero de 2002                   |
| Órgano emisor: Congreso de la República                |

| Ítems  | Marcar  |    |
|--|---|----|
|  | Si  | No |
| Vigente  | X   |    |
| <b>Artículo 30° de la Ley de Tributación Municipal.</b><br><br>"El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir de la Primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular." | <b>Descripción del Objetivo a analizar.</b><br><br>Como puede advertirse, el artículo 30° de la Ley de Tributación Municipal, grava con el Impuesto al Patrimonio Vehicular, la propiedad de determinados vehículos, sin exigir que dicha propiedad sea aquella que permita ejercer todos los atributos propios del derecho de propiedad, por lo que en una interpretación literal de dicha norma, también estarían obligados al pago, los propietarios de los vehículos hurtados o robados. En tal sentido, se propone la modificación de la citada Ley. |    |

### 3.3 Guía de Análisis Jurisprudencial

#### Guía de Análisis Jurisprudencial 1



#### Objetivo Especifico 1:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del Tribunal Fiscal de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

#### Constitución Política del Perú

|  |
|--|
| Número de la norma : Artículo 74°  |
| Denominación de la norma: Capítulo IV del Régimen Tributario y Presupuestal. |
| Fecha de emisión: 29 de Diciembre de 1993, vigencia 01 de enero de 1994      |
| Órgano emisor : Congreso dela República                                      |

| Ítems  |   | Marcar |    |
|--|---|--------|----|
|  |   | Si     | No |
| Vigente  |   | X      |    |
| I. <b>Artículo 74° de la Constitución Política del Perú:</b> “(...) el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio (...)” | La Constitución Política es la Ley Fundamental, que tiene por finalidad ser base del ordenamiento jurídico nacional, dirigida al respeto de los principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos que se desprenden de ella y que se aplica a todas las leyes de la República.<br>Prevalece sobre todas las leyes, siendo sus normas inviolables y de obligatorio |        |    |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Identificación del objeto de análisis.</b></p> <p><b>II. Principio de Igualdad</b><br/> la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02727-2002-AA/TC en su considerando cuarto señala lo siguiente:</p> <p>“(…) la distribución de los tributos se debe realizar de tal forma que se trate igual los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, principalmente donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que evidencia que implique que se considere la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes”.</p> <p><b>III. Principio de no Confiscatoriedad.</b></p> <p>La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0041-2004-AI/TC, en el considerando cincuenta y seis:</p> <p>“La confiscatoriedad no solo será evaluada desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, esto es, cuando se produzca una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios (…)”.</p> | <p>cumplimiento.</p> <p>En ese contexto, la Constitución Política del Perú regula en su artículo 74°, la potestad tributaria del Estado, así como los límites a dicha potestad, a través de los principios tributarios que en ella se mencionan.</p> <p><b>Descripción del Objetivo a analizar.</b></p> <p>Las Resoluciones del Tribunal Fiscal analizadas no toman en cuenta el Principio de Igualdad, que significa tratar igual a los que están en igual posición económica y desigual a los que están en desigual posición económica.</p> <p>Así, de acuerdo con el criterio del Tribunal Fiscal, deben pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular tanto los que pueden ejercer el uso y disfrute de su vehículo, como aquellos que no pueden ejercer tales atributos por una causa ajena a su voluntad, es decir, por el hurto o robo de los mismos; con lo que se estaría tratando igual, a quienes no están en una misma situación.</p> <p>Por tales razones, las resoluciones del Tribunal Fiscal vulnerarían el Principio de Igualdad.</p> <p>En el entendido que un impuesto se convierte en confiscatorio cuando vulnera otros principios tributarios, podría afirmarse que las resoluciones del Tribunal Fiscal que determinan que se debe pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular en el caso de vehículos hurtados o robados, vulneran también el principio de no confiscatoriedad.</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>IV. Principio de Capacidad Contributiva.</b></p> <p>La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4014-2005-AA/TC, señala en el considerando Séptimo</p> <p>“se entiende como capacidad contributiva a la aptitud de una persona para ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, que se sustentan en base a determinados hechos que revelan riqueza. Por su parte, este principio va de la mano con el de igualdad sea en el plano horizontal o vertical, determinando, por un lado, que se generalice la obligación del pago cuando exista igual manifestación de riqueza y por el otro, que dicha obligación sea proporcional a la capacidad contributiva del obligado”</p> | <p>Asimismo, tratándose el Impuesto al Patrimonio Vehicular de un impuesto real, que recae sobre el valor del bien, no existiendo el mismo, no habría capacidad contributiva que merezca ser gravada.</p> <p>En tal sentido, las Resoluciones del Tribunal Fiscal vulnerarían este principio, al exigir que se pague el impuesto a pesar que el vehículo ya no está en el patrimonio del propietario.</p> |
|--|---|

## Guía de Análisis Jurisprudencial 2



### Objetivo Específico 2:

Determinar qué implicancias tiene la interpretación del SAT de Lima de la norma que regula el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados.

### Constitución Política del Perú

|  |
|--|
| Número de la norma : Artículo 74°  |
| Denominación de la norma: Capítulo IV del Régimen Tributario y Presupuestal. |
| Fecha de emisión: 29 de Diciembre de 1993, vigencia 01 de enero de 1994      |
| Órgano emisor : Congreso dela República                                      |

| Ítems   | Marcar  |    |
|---|---|----|
|   | Si  | No |
| Vigente   | X   |    |
| I. Artículo 74° de la Constitución Política del Perú: “(...) el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio (...)” | La Constitución Política es la Ley Fundamental, que tiene por finalidad ser base del ordenamiento jurídico nacional, dirigida al respeto de los principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos que se desprenden de ella y que se aplica a todas las leyes de la República.<br>Prevalece sobre todas las leyes, siendo sus normas inviolables y de obligatorio cumplimiento.<br>En ese contexto, la Constitución Política del Perú regula en su artículo 74°, la potestad tributaria del Estado, así como los límites a dicha potestad, a través de los principios |    |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Identificación del objeto de análisis.</b></p> <p><b>II. Principio de Igualdad</b><br/> la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02727-2002-AA/TC en su considerando cuarto señala lo siguiente:</p> <p>“(…) la distribución de los tributos se debe realizar de tal forma que se trate igual los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, principalmente donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que evidencia que implique que se considere la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes”.</p> <p><b>III. Principio de no Confiscatoriedad.</b></p> <p>La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0041-2004-AI/TC, en el considerando cincuenta y seis:</p> <p>“La confiscatoriedad no solo será evaluada desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, esto es, cuando se produzca una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios (...)”.</p> <p><b>IV. Principio de Capacidad Contributiva.</b></p> <p>La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4014-2005-AA/TC, señala en el considerando Séptimo:</p> <p>“se entiende como capacidad contributiva a</p> | <p>tributarios que en ella se mencionan.</p> <p><b>Descripción del Objetivo a analizar.</b></p> <p>El SAT de Lima mediante su Directiva N° 001-006-00000024, determina que no es posible cobrar Impuesto al Patrimonio Vehicular cuando el vehículo ha sido hurtado o robado, lo que se encuentra conforme con el Principio de Igualdad, al tratar desigual a quienes están en desigual posición económica.</p> <p>De la misma manera, la Directiva del SAT de Lima garantiza el principio de no confiscatoriedad al establecer que en el caso de los vehículos hurtados o robados no es posible cobrar el impuesto; toda vez que la posición del SAT de Lima no colisiona con otros principios tributarios.</p> <p>Asimismo, tratándose el Impuesto al Patrimonio Vehicular de un impuesto real, que recae sobre el valor del bien, no existiendo el mismo, no habría capacidad contributiva que merezca ser gravada.</p> <p>De esta manera, el SAT de Lima garantiza principio de capacidad contributiva, pues al no determinar deuda por los vehículos hurtados o</p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>la aptitud de una persona para ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, que se sustentan en base a determinados hechos que revelan riqueza. Por su parte, este principio va de la mano con el de igualdad sea en el plano horizontal o vertical, determinando, por un lado, que se generalice la obligación del pago cuando exista igual manifestación de riqueza y por el otro, que dicha obligación sea proporcional a la capacidad contributiva del obligado”</p> | <p>robados, por considerar que el bien ha desaparecido de la esfera patrimonial del propietario, está asumiendo que también ha desaparecido la capacidad contributiva que justifique la imposición del referido tributo.</p> |
|---|--|

### 3.4 Ley Analizada en la Guía Documental

Ley de Tributación Municipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 776

(\*) Consultar TEXTO ÚNICO ORDENADO, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, publicado el 15-11-2004.

CONCORDANCIAS: R.Nº 009-2003-CAM-INDECOPI  
D.LEG. Nº 952, Art. 34  
R.D. Nº 013-2004-EF-76.01  
DIRECTIVA Nº 013-2004-EF-76.01  
DIRECTIVA Nº 013-2005-EF-76.01(Directiva para la programación, formulación y aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2006)  
Directiva Nº 003-2006-EF-76.01 (Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales del Año Fiscal 2006)  
R.D. Nº 034-2006-EF-76.01 (Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2007)  
R. DEFENSORIAL Nº 0044-2006-DP (Aprueban el Informe Defensorial Nº 106 "Informe sobre el proceso de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales en Lima y Callao (Ejercicios Fiscales 2002 al 2006)  
R. Nº 175-2007-SUNAT  
R. C. Nº 431-2007-CG (Aprueban la Guía de Auditoría a los Arbitrios Municipales)  
R.Defensorial Nº 004-2008-DP, Art. Segundo (Aprueban Informe Defensorial Nº 133 denominado "¿Uso o abuso de la autonomía municipal? El desafío del desarrollo local")  
D.LEG.Nº 1253 (Decreto Legislativo que dicta medida para fortalecer la inversión en seguridad ciudadana)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso Constituyente Democrático mediante Ley Nº 26249 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de modificar la legislación del Sistema Tributario del Gobierno Central y de los Gobiernos Locales;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;



### Capítulo III

#### Del Impuesto al Patrimonio Vehicular

Artículo 30.- Créase el Impuesto a la Propiedad Vehicular, de periodicidad anual, que grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas y station wagons con una antigüedad no mayor de tres (3) años. (\*)

(\*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616 (esta norma entrará en vigencia el 01-01-2002), publicada el 29-12-2001, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 30.- El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular."

CONCORDANCIAS: R.M. Nº 006-2004-EF-15

"Artículo 30-A.- La administración del impuesto corresponde a las Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo. El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipalidad Provincial."

(\*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616 publicada el 29-12-2001. Esta norma entrará en vigencia el 01-01-2002.

Artículo 31.- Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los vehículos señalados en el artículo anterior.

El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada al 01 de enero del año a que corresponda la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier transferencia el adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del 01 de enero del año siguiente de producido el hecho.

Artículo 32.- La base imponible del impuesto está constituida por el valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, el que en ningún caso será menor a la tabla referencial que anualmente apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas. (\*)

(\*) Artículo sustituido por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 03-02-2004, disposición que entró en vigencia a partir del primer día del mes siguiente de su publicación, con excepción de los artículos de la presente norma que modifican los impuestos de periodicidad

### 3.5 Sentencias del Tribunal Constitucional analizadas en la Guía Jurisprudencial



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 2727-2002-AA/TC  
LIMA  
COMPAÑÍA MINERA CAUDALOSA S.A.

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

#### ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por la Compañía Minera Caudalosa S.A. contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 351, su fecha 24 de setiembre de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

#### ANTECEDENTES

Con fecha 6 de febrero de 2001, la recurrente interpone acción de amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), solicitando se declare la inaplicabilidad de las Resoluciones del Tribunal Fiscal N.ºs 930-2-2000, 993-2-2000 y 1049-4-2000, vinculadas con el cobro del Impuesto Extraordinario a los Activos Netos, así como la devolución de los montos efectivamente pagados por el mismo impuesto, desde la fecha de su creación hasta el mes de junio de 1999, ascendentes a la cantidad de S/. 162,288.00. Alega que dicho tributo afecta el principio de no confiscatoriedad y el derecho de propiedad, dado que en los ejercicios de los años 1996, 1997 y 1998 no ha obtenido utilidad, habiendo cerrado el año fiscal con pérdida financiera y tributaria, lo que hizo de conocimiento a la SUNAT mediante los recursos pertinentes, los cuales fueron declarados inadmisibles.

La SUNAT alega que el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos no grava la renta, sino el patrimonio, de manera que carece de sentido alegar que la empresa demandante no ha generado renta; asimismo, deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía previa en lo que se refiere a la devolución de los montos efectivamente pagados.

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 23 de enero de 2002, declaró infundada la demanda, por considerar que no se ha acreditado que la aplicación del tributo tenga efectos confiscatorios.

La recurrida confirma la apelada, por estimar que carece de fundamento argüir que la obligada no ha percibido rentas dentro del ejercicio gravable, pues el impuesto tiene por propósito gravar el patrimonio.



#### TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

pago del impuesto a la renta, supone una desnaturalización desproporcionada del propio impuesto a la renta que dicha norma con rango de ley establece, ya que pretende gravar no el beneficio, la ganancia o la renta obtenida por la accionante como consecuencia del ejercicio de una actividad económica, conforme se prevé en el artículo 1°, donde se diseña el ámbito de aplicación del tributo, sino el capital o sus activos netos (...).

De manera que el argumento según el cual el impuesto ahora cuestionado es inconstitucional porque sustituye, con otro nombre, el impuesto mínimo a la renta, reproduciendo sus mismos vicios, esto es, gravar la fuente productora de la renta, y no la renta propiamente dicha, debe desestimarse.

3. Ahora bien, si lo expresado en el fundamento precedente es una razón suficiente para desestimar la pretensión por la *causa petendi* que anida, no lo es para evitar pronunciarse sobre el problema de fondo. En concreto, respecto a la alegación de confiscatoriedad del IEAN creado por la Ley N.º 26777: ¿es inconstitucional, por violar el principio de no confiscatoriedad, que un impuesto grave el patrimonio? ¿es inconstitucional la tasa del IEAN? En lo que sigue, analizaremos ambos temas.

#### El principio de no confiscatoriedad de los tributos

4. Uno de los principios constitucionales a los cuales está sujeta la potestad tributaria del Estado es el de no confiscatoriedad de los tributos. Este principio informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal y, como tal, constituye un mecanismo de defensa de ciertos derechos constitucionales, empezando, desde luego, por el derecho de propiedad, ya que evita que la ley tributaria pueda afectar irrazonable y desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas. Asimismo, se encuentra directamente conectado con el derecho de igualdad en materia tributaria o, lo que es lo mismo, con el principio de capacidad contributiva, según el cual, el reparto de los tributos ha de realizarse de forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes.

De otro lado, el principio de no confiscatoriedad de los tributos tiene también una función institucional. Con su observancia, en efecto, se asegura que ciertas instituciones que conforman nuestra Constitución económica, como el pluralismo económico, la propiedad o la empresa, no resulten suprimidas o vaciadas de contenido cuando el Estado ejerza su potestad tributaria.

De modo que el principio de no confiscatoriedad de los tributos constituye un principio estructural de la "Constitución tributaria", establecida en la Ley Fundamental de 1993.





## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 0041-2004-AI/TC  
LIMA  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

### SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de noviembre de 2004, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

#### ASUNTO

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra las Ordenanzas N.ºs 171-MSS y 172-MSS expedidas por la Municipalidad de Santiago de Surco, que aprueban el régimen legal tributario y los importes de arbitrios municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2004; las Ordenanzas N.ºs 003-96-O-MSS, 006-97-O-MSS, 002-98-O-MSS y 01-0-MSS; el artículo 4º de la Ordenanza N.º 024-MSS (2000), el artículo 4º de la Ordenanza N.º 55-MSS (2001), el artículo 6º de la Ordenanza N.º 92-MSS (2002), los artículos 7º y 8º y la Segunda Disposición Final de la Ordenanza N.º 128-MSS (2003), así como el artículo 5º de la Ordenanza N.º 130-MSS (2003), por contener vicios de inconstitucionalidad.

#### ANTECEDENTES

##### Argumentos de la Defensoría del Pueblo

Con fecha 16 de julio del 2004, la Defensoría del Pueblo interpone demanda de inconstitucionalidad contra diversas Ordenanzas expedidas por la Municipalidad de Santiago de Surco, alegando que las mismas vulneran los principios tributarios de legalidad (no ratificación por ordenanza provincial y aplicación retroactiva de la ley), no confiscatoriedad y capacidad contributiva; y asimismo, porque utilizan criterios prohibidos para la determinación del importe a pagar por concepto de arbitrios.

##### *a) Sobre la inconstitucionalidad de las Ordenanzas N.ºs 171-MSS y 172-MSS*

Respecto a las Ordenanzas N.ºs 171-MSS y 172-MSS, correspondientes al ejercicio fiscal 2004, indica que se ha vulnerado el principio de legalidad tributaria por no haberse cumplido con las formalidades preestablecidas en el ordenamiento jurídico para su



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

56. El principio de no confiscatoriedad informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal, garantizando que la ley tributaria no pueda afectar irrazonable y desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas.

Debe tomarse en cuenta, además, que la confiscatoriedad puede evaluarse no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino también *cualitativo*, cuando se produzca una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios, sin que en estos casos interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso perfectamente soportable por el contribuyente. (Hernández Berenguel, Luis. El Poder Tributario y la nueva Constitución. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, N.º 24, Junio, 1993).

57. Al respecto, el Tribunal Constitucional sostuvo en el Exp. N.º 2727-2002-AA/TC, que el principio de confiscatoriedad tiene la estructura propia de lo que se denomina un "concepto jurídico indeterminado". Es decir, su contenido constitucionalmente protegido no puede ser precisado en términos generales y abstractos, sino que debe ser analizado y observado en cada caso, teniendo en consideración la clase de tributo y las circunstancias concretas de quienes estén obligados a sufragarlo. No obstante, teniendo en cuenta las funciones que cumple en nuestro Estado democrático de derecho, es posible afirmar, con carácter general, que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad.

58. Por ello, conforme se declaró en el Exp. N.º 0004-2004-AI/TC (acumulados), es preciso distinguir la eventual inconstitucionalidad de un tributo en atención a su incidencia concreta en las circunstancias particulares en las que se encuentre cada uno de los obligados a sufragarlo, y la inconstitucionalidad en la que pueda incurrir la ley que lo regula, la cual sólo podría ser determinada, en sentido abstracto, analizando los elementos constitutivos del tributo, y particularmente la materia imponible y la alícuota, cuyos contenidos o dimensiones podrían ser muestras evidentes de un exceso de poder tributario.

59. Cabe preguntarse, entonces, *¿cuándo se constata, en el caso de arbitrios municipales, que un cobro es confiscatorio?*

60. Las ordenanzas impugnadas, en todos los casos, fueron ratificadas fuera del plazo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades; y siendo este un requisito sustancial para su validez, se concluye que no se ha respetado el principio de legalidad. Por lo tanto, dichas normas resultan confiscatorias desde un punto de vista cualitativo.

EXP. N.º 4014-2005-AA/TC  
LIMA  
INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Concepción, a los 20 días del mes de julio de 2005, el pleno del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

### ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por NETTALCO S.A. contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 444, su fecha 15 de diciembre de 2004, que declaró infundada la demanda de autos.

### ANTECEDENTES

Con fecha 21 de marzo de 2002, la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y el Tribunal Fiscal, con objeto de que se deje sin efecto: a) la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 00015-1-2002, y b) las Resoluciones de Intendencia N° 015-4-13607 y 015-4-13689. Asimismo, solicita se declare inaplicable la Ley 26969, que creó el Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) de cargo de los empleadores.

Sostiene que el referido impuesto desvirtúa el principio de capacidad contributiva, puesto que toma como base imponible la capacidad contributiva de una persona (los trabajadores) para afectar a una persona distinta (el empleador); que por lo tanto se está imponiendo un cobro confiscatorio e inconstitucional, afectando indebidamente su patrimonio, sin medir directamente la capacidad de respuesta de estos respecto del gravamen. Alega que el Impuesto Extraordinario de Solidaridad, al ser la sustitución de la contribución al FONAVI, ha dado lugar a un impuesto atípico y antitécnico, el cual fue considerado inconstitucional por el resumen ejecutivo y el Informe de la Comisión de Estudio y Revisión de la Legislación, emitido el 5 de abril de 1992, por el Ministerio de Justicia, por vulnerar el principio de no confiscatoriedad consagrado en la Constitución.

Los emplazados deducen las excepciones de incompetencia y de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y contestan la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus aspectos, señalando: a) que el Estado, al momento de aprobar las normas del IES, respetó los principios de legalidad y reserva de ley; b) que el legislador nacional, al regular el IES, ha tenido en cuenta la capacidad contributiva de los contribuyentes, específicamente de los empleadores, determinando su consumo a través

del pago de remuneraciones a sus trabajadores. Concluye que la base imponible está en relación con las remuneraciones de todos sus trabajadores y que debe considerarse que la carga del impuesto ha sufrido modificaciones y que este ha sido reducido del 5% en el 2001 al 2% en el 2002.

El Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 23 de julio de 2003, declara infundadas la excepciones alegadas e improcedente la demanda considerando que la inaplicación de una norma incompatible con la Constitución no puede ser resultado de un análisis abstracto, sino más bien del análisis de una situación concreta de hechos que, en el caso de autos, no se ha generado; y en cuanto al pedido de inconstitucionalidad de una ley, sostiene que ello se resuelve de conformidad con el artículo 200°, inciso 4, de la Constitución Política del Perú, esto es, a través de la acción de Inconstitucionalidad.

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, arguyendo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Estado tiene la potestad de sustituir tributos por otros, siempre y cuando lo haga a través de una norma legal, tal como lo establece el artículo 74 de la Constitución, pero incidiendo en que debe respetarse la capacidad contributiva. Argumenta, de otro lado, que la Constitución no ha constitucionalizado ningún tipo de impuesto, ni tampoco ha determinado qué tipo de actividades económicas pueda ser objeto de regulación fiscal. En ese sentido, considera que el recurrente no ha logrado acreditar los hechos en que sustenta su demanda.

## **FUNDAMENTOS**

### **§ Petitorio**

1. En el presente caso, la recurrente solicita la inaplicación de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00015-1-2002 y de las Resoluciones de Intendencia N° 015-4-13607 y 015-4-13689, que declararon inadmisibles sus reclamos contra las órdenes de pago N° 011-01-0053899 y 011-01-0056514, giradas por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), correspondiendo a los periodos de febrero y marzo de 2001, alegando que dicho impuesto, creado mediante Ley 26969, debe ser declarado inaplicable a su caso concreto, toda vez que el mismo no toma en cuenta la capacidad contributiva del empleador a efectos de gravarlo con el impuesto, sino la del trabajador, resultando de este modo confiscatorio e inconstitucional, por atentar contra lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución.

### **§ Cuestiones controvertidas**

2. Los demandados contradicen el alegato de la empresa recurrente, afirmando que el Impuesto Extraordinario de Solidaridad no vulnera el principio de capacidad contributiva, por cuanto lo que grava es la capacidad del empleador de pagar remuneraciones, más no la del trabajador de percibir las. Asimismo, aducen que mediante la STC 001-1999-AI/TC, el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad del IES, de manera que no puede desconocerse tal criterio.
3. Cabe precisar que si bien mediante Ley 28378, de fecha 10 de noviembre del 2004 el Impuesto Extraordinario de Solidaridad quedó derogado, ello no impide su evaluación

en el presente caso, dado que las Resoluciones administrativas cuestionadas están referidas a órdenes de pago giradas durante la vigencia del referido impuesto y cuya cobranza aún se exige, por lo que, para este caso, la norma en cuestión no ha agotado sus efectos. En ese sentido, este Colegiado debe resolver las siguientes cuestiones controvertidas: a) si la STC 001-1999-AI/TC efectivamente confirmó la constitucionalidad del Impuesto Extraordinario de Solidaridad; de no ser así, b) si el diseño del IES, a cargo del empleador, vulnera el principio de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad, debiendo inaplicarse al caso de la recurrente.

#### **§ Los alcances de la STC 001-1999-AI/TC en el presente caso**

4. El fundamento 6 de la STC 001-1999-AI/TC determinó lo siguiente: *“El Estado tiene la potestad de sustituir tributos por otros, siempre y cuando lo haga a través de una norma de rango legal, tal como lo establece el artículo 74° de la Constitución Política del Perú; en consecuencia, la impugnación que la parte demandante hace a la constitucionalidad del artículo 3.° de la Ley N.° 26969, en cuanto sustituye el FONAVI por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad, con la consiguiente desactivación de la UTE-FONAVI, no procede”*.
5. Conforme se aprecia, el cuestionamiento que en aquella oportunidad se hizo del artículo 3 de la Ley 26969 estaba referido únicamente respecto a la viabilidad de sustituir un tributo por otro; mas no a la evaluación de aspectos sustanciales de constitucionalidad en la configuración del Impuesto Extraordinario de Solidaridad; puede extender consecuentemente, en ese extremo, no hay *ratio decidendi* ni *fallo* que se pueda extender al presente caso. En otras palabras, el pronunciamiento de validez preexistente, al estar referido a un aspecto distinto al cuestionado en esta oportunidad, no puede surtir efectos de cosa juzgada.

#### **§ Los principios de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad**

6. Se cuestiona el Impuesto Extraordinario de Solidaridad, a cargo del empleador, por vulnerar los principios de igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, al considerarse que su base imponible toma en cuenta la capacidad contributiva de un tercero; esto es, las remuneraciones de los trabajadores, para finalmente gravar al empleador.

Los demandados desvirtúan tal alegato afirmando que dicho impuesto grava en realidad, la capacidad del empleador de pagar remuneraciones, más no la del trabajador de percibirlas; por lo tanto no vulnera los principios constitucionales tributarios invocados.

7. La capacidad contributiva es entendida como la aptitud de una persona para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, sustentado en base a determinados hechos reveladores de riqueza. Por su parte, el principio de igualdad tributaria, sea en el plano horizontal o vertical, va de la mano con la capacidad contributiva, determinando, por un lado, que a igual manifestación de riqueza se generalice la obligación de pago; y, por el otro, que dicha obligación sea proporcional a la capacidad contributiva del obligado.



En tal sentido, este Colegiado debe evaluar el presente caso determinando si el Impuesto Extraordinario de Solidaridad, a cargo del empleador, sustentó su base imponible en alguna manifestación real de capacidad contributiva como fundamento y medida de la imposición.

8. Al respecto, lo primero que debe tomarse en cuenta es que en reiterada jurisprudencia vinculante, aplicable según lo dispuesto en el último párrafo del artículo VI del título preliminar del CP Const., el Tribunal Constitucional ha precisado lo siguiente: “(...) *La Constitución no ha constitucionalizado ningún impuesto, ni tampoco ha determinado qué tipo de actividades económicas pueden ser, o no, objeto de regulaciones fiscales.* (STC 2727-2002-AA/TC, 0004-2004-AI/TC). Ello, por cuanto es potestad del legislador - en el marco de una política fiscal ordenada y justa-, establecer los impuestos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, tomando en cuenta que la recaudación no es un fin en sí mismo, sino un medio para hacer factible la mejor cobertura de necesidades públicas.
9. Sentada esta premisa, el hecho de que el legislador haya considerado, de manera extraordinaria y temporal, la capacidad de pago de remuneraciones como un síntoma o presunción de riqueza gravable, no vulnera en abstracto los principios de capacidad contributiva, igualdad y el no confiscatoriedad. Si, por el contrario, esta base de cálculo resultó antitécnica, conforme lo ha señalado el recurrente a lo largo del proceso (ff. 71, 409 y 493); es preciso dejar en claro que el “antitecnismo” de las leyes o, acaso, su “ineficiencia”, no pueden merecer atención en lo que respecta a la evaluación de su constitucionalidad, pues esta únicamente debe centrarse en aspectos relativos a su compatibilidad formal y material con la carta fundamental, ( STC 0004-2004-AI/TC fund. 4).
10. Cabe precisar que si en términos generales, un impuesto no resulta inconstitucional, ello no desvirtúa la posibilidad de los efectos confiscatorios en el caso específico, o, incluso, que siendo el hecho gravado una expresión de capacidad económica en términos generales, el recurrente carezca de capacidad contributiva efectiva. Para verificar este supuesto y eximirse del deber de contribuir, resulta necesario que el demandante demuestre tales situaciones de manera fehaciente, siendo capaz de generar convicción en el juzgador respecto a lo que se alega; más aún, tomando en cuenta que en el proceso constitucional de amparo no existe etapa probatoria.
11. Es ahí justamente, donde el recurrente no ha logrado demostrar cómo es que, en su caso, el Impuesto Extraordinario de Solidaridad resulta una carga insoportable y determina una afectación irrazonable a su derecho de propiedad; es decir, en autos no obran documentos o pruebas que demuestren su falta de capacidad contributiva, o, de suyo la confiscatoriedad material del tributo en su realidad. Por lo tanto, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos y principios constitucionales tributarios invocados la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

## **HA RESUELTO**

Declarar **INFUNDADA** la demanda de amparo.

**SS.**

**ALVA ORLANDINI  
BARDELLI LARTIRIGOYEN  
GONZALES OJEDA  
GARCÍA TOMA  
VERGARA GOTELLI**

Yo, *Esaú Vargas Huamán*, docente de la Facultad de Derecho y Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo de Lima Norte, revisor de la tesis titulada

"Contienda en la interpretación de la norma del pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de los vehículos hurtados o robados , Lima Metropolitana, periodo 2008-2015".

De la estudiante *Guisella Rosio Arteaga Vásquez*, constato que la investigación tiene un índice de similitud de **22 %** verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lima, 09 de Julio del 2018

  
.....  
Firma  
*Esaú Vargas Huamán*  
DNI: 31042328

|         |                            |        |                    |        |                                 |
|---------|----------------------------|--------|--------------------|--------|---------------------------------|
| Elaboró | Dirección de Investigación | Revisó | Responsable de SGC | Aprobó | Vicerrectorado de Investigación |
|---------|----------------------------|--------|--------------------|--------|---------------------------------|







# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE

JOSE JORGE RODRIGUEZ FIGUEROA

---

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

GUISELLA ROCIO ARTEAGA VASQUEZ

INFORME TÍTULADO:

CONTIENDA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DEL PAGO DEL  
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR RESPECTO DE LOS  
VEHÍCULOS HURTADOS O ROBADOS, LIMA METROPOLITANA,  
PERIODO 2008-2015

---

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE: ABOGADO (A)

---

ABOGADA

SUSTENTADO EN FECHA: \_\_\_\_\_

NOTA O MENCIÓN: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

---

ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)  
"César Acuña Peralta"

## FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS

### 1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres: (solo los datos del que autoriza)

Asteaga Vasquez Guisella Rosio

D.N.I. : 44522287

Domicilio : Sr. Julian Alarcos N° 908 S.M.P.

Teléfono : Fijo : 5178823 Móvil : 989242081

E-mail : Guisellorasteagav@gmail.com

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS

Modalidad:

☒ Tesis de Pregrado

Facultad : Derecho

Escuela : Derecho

Carrera : Derecho

Título : Abogada

☐ Tesis de Post Grado

☐ Maestría

Grado : .....

Mención : .....

☐ Doctorado

### 3. DATOS DE LA TESIS

Autor (es) Apellidos y Nombres:

Asteaga Vasquez Guisella Rosio A.

Título de la tesis:

Contenido en la interpretación de la norma del Paso de Impuestos al Patrón  
no respecto de vehículos hurtados o robados Lima N. Período 2008-2015

Año de publicación : 2018

### 4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA:

A través del presente documento, autorizo a la Biblioteca UCV-Lima Norte,  
a publicar en texto completo mi tesis.

Firma :

Fecha :

20/11/18